

LAS FISURAS DEL NEOLIBERALISMO CHILENO

**Trabajo, crisis de la
«democracia tutelada»
y conflictos de clases**

Franck Gaudichaud



**TIEMPO
ROBADO
EDITORA**



Franck Gaudichaud: Doctor en Ciencia política (Universidad París 8), Magister en Historia (Universidad Bordeaux 3), académico en Estudios latinoamericanos de la Universidad Grenoble-Alpes (Francia). Es autor de varios libros y numerosos artículos sobre movimientos populares, izquierdas y capitalismo en Chile y América Latina (en varios idiomas), miembro del colectivo editorial del portal www.rebellion.org, colaborador de *Le Monde Diplomatique* (París) y redactor de la revista *ContreTemps*. Su último libro publicado en Chile es un trabajo colectivo: *América Latina. Emancipaciones en construcción* (Tiempo Robado – América en Movimiento, 2015).

LAS FISURAS DEL NEOLIBERALISMO CHILENO

**Trabajo, crisis de la
«democracia tutelada»
y conflictos de clases**

Franck Gaudichaud



**TIEMPO
ROBADO
EDITORAS**

Las fisuras del neoliberalismo chileno

Trabajo, crisis de la “democracia tutelada” y conflictos de clases.

Franck Gaudichaud - 1ª ed. - Santiago, Quimantú y Tiempo robado, 2015.

132 pp.; 15 x 21 cm.

ISBN (libro impreso): 978-956-9364-06-8

ISBN (libro digital): 978-956-9364-21-1

Copyleft

Esta edición se realiza bajo la licencia de uso creativo compartido o Creative Commons. Está permitida la copia, distribución, exhibición y utilización de la obra bajo las siguientes condiciones:

Atribución: se debe mencionar la fuente (título de la obra, autor, editorial, edición, año).

No comercial: no se permite la utilización de esta obra con fines comerciales.

Mantener estas condiciones para obras derivadas: solo está autorizado el uso parcial o alterado de esta obra para la creación de obras derivadas siempre que estas condiciones de licencia se mantengan para la obra resultante.

Los autores, los integrantes de Tiempo Robado editoras, de Quimantú y los colaboradores destinan su trabajo y los potenciales ingresos generados por esta edición al fomento de nuevas publicaciones de la editorial.

Diseño portada: Paula Bravo

Diseño y diagramación: Tiempo robado editoras

Edición: Claudia Marchant

Tipografía: Adobe Garamond Pro

Impreso en Ojo en Tinta, Santiago de Chile

ÍNDICE

NOTA DE LOS EDITORES	7
NOTA DEL AUTOR	11
PRÓLOGO. La contrarrevolución neoliberal chilena y la construcción política estratégica para el hoy	
RAFAEL AGACINO	13
INTRODUCCIÓN. A más de 40 años del golpe: ¿el “modelo” chileno en crisis?	19
CAPÍTULO 1. La vía chilena al neoliberalismo: de la (contra)revolución cívico-militar a la democracia neoliberal tutelada actual	25
CAPÍTULO 2. Génesis del capitalismo neoliberal “maduro”, mitos de la sociedad de “clase media” y nuevas dominaciones	39
CAPÍTULO 3. ¿Adiós a los trabajadores? Flexibilización, precarización y conciencia de clase	53
CAPÍTULO 4. ¿El retorno del movimiento obrero? Recomposiciones sindicales limitadas, luchas estratégicas emblemáticas y saqueo extractivista de los recursos naturales	65
CAPÍTULO 5. Ciudadanía “neoliberalizada”, crisis del sistema político y politización de los conflictos sociales	77
CAPÍTULO 6. Breve comentario sobre el gobierno de Bachelet: progresismo transformista, nuevo ciclo político y continuidad de una hegemonía	93
A MODO DE CONCLUSIÓN. ¿Derrumbe del modelo o construcción estratégica? Los desafíos de la creación de alternativas ecosocialistas “raizales”	103
BIBLIOGRAFÍA	117
ANEXOS	129

Nota de los editores

Quienes trabajamos en Quimantú y Tiempo robado editoras, hace unas semanas nos encontramos en la conmemoración del 45 aniversario de la toma que dio origen al campamento Nueva Habana, un primero de noviembre de 1970. En esa fecha histórica, los pobladores organizados iniciaron una experiencia que durante el gobierno de la Unidad Popular alcanzó un importante grado de organización y autogestión en unos terrenos en la zona oriente de Santiago, hoy conocidos como población Nuevo Amanecer de La Florida.

La oportunidad y el escenario de ese nuevo encuentro –antes compartimos en las Ferias “Yo me libro” y “América Latina desde abajo” así como en otros espacios de difusión y discusión– resultó ser un estímulo para imaginar posibilidades de mancomunar alguno de nuestros esfuerzos editoriales. Desde una mirada compartida sobre el espacio editorial en Chile, su necesaria puesta a disposición de los diversos grupos y organizaciones que luchan por transformar los mecanismos que nos mantienen bajo un modelo neoliberal opuesto al mundo al que aspiramos, y que somete también el debate y la discusión política a las leyes del mercado, nos propusimos la tarea de pensar proyectos de coedición, aportando cada uno sus redes, sus saberes y su trabajo.

Así, hoy podemos presentarles este texto de Franck Gaudichaud que –más allá de compartir o no su análisis sobre las fisuras, grietas y apresurados diagnósticos sobre el derrumbe del modelo neoliberal en Chile– se posiciona exactamente en el punto desde el cual como editoriales nos interesa también aportar: ayudar a armar la caja de herramientas para esa “batalla de ideas en la guerra de movimiento contrahegemónica” –en palabras del autor– puesta al servicio del movimiento popular ubicado “abajo y a la izquierda”.

Esperamos que esta primera iniciativa mancomunada y solidaria, siga adelante con nuevos textos que se instalen en las mismas trincheras del debate por una sociedad verdaderamente democrática y alternativa a la que hoy nos vemos sometidos.

Quimantú y Tiempo robado editoras
Santiago, noviembre de 2015

*Podemos afirmar enfáticamente, y sin temor alguno a equivocarnos,
que la clase trabajadora chilena no tiene otra “salida”
para resolver integral y verídicamente sus innumerables problemas,
que la acción directa determinada a un cambio sustancial y total
del régimen económico, político, social y cultural del país*

Clotario Blest Riffo (1899- 1990),
8º aniversario de la CUT, 12 de febrero de 1962

Nota del autor

*A Darío Amaru
A las y los que luchan de norte a sur de Chile
A los sueños que siguen cabalgando por Abya Yala*

Este breve ensayo está basado en un extenso artículo publicado a principios del año 2015, por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) después de haber sido seleccionado con “mención especial” en el contexto del premio “Hugo Zemelman Merino”. Este concurso dirigido a científicas sociales latinoamericanas y extranjeros de todo el continente proponía reflexionar, a más de 40 años del golpe de Estado, sobre Chile y sus “desafíos y alternativas en la nueva coyuntura democrática”.

En un segundo momento, y después de haber recibido los comentarios de varios amigos, militantes, compañeros y compañeras, nos hemos propuesto actualizar y reescribir en parte, el texto para transformarlo en el presente libro.

Agradecemos en particular a Claudia Marchant, Rafael Agacino, Miguel Urrutia, Luis Martín-Cabrera, Rocío Gajardo y Sebastián Osorio por sus lecturas y críticas, como también el apoyo de Pacte (Unidad mixta de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica-CNRS, Francia) y del departamento de sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (Facso) de la Universidad de Chile, en particular el “Equipo Interdisciplinario de Estudios en movimientos sociales y poder popular”. Por cierto, las ideas vertidas aquí son de mi única responsabilidad.

Lo que intentamos y proponemos al lector(a) es una invitación a elaborar un diálogo-debate colectivo sobre la historia y realidad del Chile actual, sus contradicciones y grietas, abordando también los posibles caminos de resistencia popular y de construcción de alternativas en un país que ha sido moldeado, violentamente, durante cuatro décadas de una modernidad capitalista neoliberal “radical”.

Para nosotros es central poder publicar esta reflexión –que esperamos sea exigente en su contenido pero clara en sus ideas vertebrales– en una edición de bajo costo para facilitar su más amplia difusión. La colaboración con las y los compañeros de Tiempo robado editoras y Quimantú fue en este sentido “natural” por el perfil autogestionario de estas dos valientes editoriales independientes.

Sabemos que no siempre es fácil tomar el tiempo de leer, pensar, actuar, militar, debatir en el mundo de hoy, donde priman la sociedad del espectáculo y de las pantallas, la cultura de la inmediatez y de los mensajes en 160 caracteres y, sobre todo, tiempos infernales de trabajo (remunerado o no)... Escribir un libro es siempre una apuesta de futuro. Los múltiples colectivos y agrupaciones de “rearme crítico” que se multiplican en Chile desde el 2011 confirman que el campo de las batallas de ideas es entendido, con razón, por la nueva generación como un eje esencial de la guerra de movimiento contrahegemónica que es indispensable forjar para ponerlo al servicio del movimiento popular.

Ojalá podamos aportar con este texto algunas herramientas para esta gran caja de ideas colectiva en fase de elaboración, abajo y a la izquierda.

Santiago de Chile, La Florida
Noviembre 2015

Prólogo

La contrarrevolución neoliberal chilena y la construcción política estratégica para el hoy

Rafael Agacino¹

Como se sabe Chile ha sido un laboratorio para las elites dominantes y el imperialismo; aquí su *intelligentsia*, sus intelectuales orgánicos y la tecnoburocracia experta en gestión de conflictos, ensayaron el nuevo arsenal de reformas institucionales diseñadas para extirpar de raíz las conciencias y voluntades anticapitalistas. El experimento chileno se llamó contrarrevolución neoliberal. Su punto de partida, su momento fundacional, arrancó de los escombros dejados por el golpe de Estado de 1973 y se extendió hasta inicios de los años 80; luego sobrevivió a una severa crisis mundial recurriendo a ajustes heterodoxos, y ya entrada la década de los 90, recuperada y ufana, se vistió de democracia al cuidado de una coalición de exgolpistas y franjas de la izquierda conversa. Su última etapa –la *pax neoliberal* como la denomina Franck Gaudichaud– ha sido exitosa pues, además de superar en años a la dictadura, también terminó por reconvertir a la izquierda al credo neoliberal. La guinda de la torta fue la incorporación de la dirección del Partido Comunista, primero al Parlamento en el año 2010, y luego, a la alianza de gobierno el 2014. Toda una hazaña de los ingenieros de las transiciones políticas.

Este extenso trayecto dura ya 42 años, y dado que las reformas estructurales tienen décadas de aplicación y sus relaciones sociales y subjetividades son usos y costumbres, nada tiene de extraño que la racionalidad individualista y de mercado sea el sentido común predominante. En el curso de las reformas neoliberales la sociedad chilena fue adelgazando el tejido de sus relaciones sociales, aunque paradójicamente multiplicara su red de interacciones; todos cada vez más conectados pero a la vez más empobrecidos de sentido colectivo; átomos guiados según el interés de cada cual y compitiendo

¹ Investigador Plataforma Nexos (www.plataforma-nexos.cl).

en las arenas de la institución neoliberal por antonomasia: el mercado. Pero también a 42 años del golpe, la utopía neoliberal muestra fisuras y aflora un malestar social inusitado, y en éste, un potencial de ruptura. A nivel de la política y lo político se están manifestando las contradicciones derivadas de un agotamiento crítico de la forma que tomó la sociedad chilena en el curso de cuatro décadas; se trata de las anomalías de esta contrarrevolución neoliberal propias de su etapa de maduración. Y eso lo saben, intuyen o viven cian casi todos los sectores en lucha latente o abierta. Por ello, tanto los de arriba como los de abajo, atribulados por la emergencia de contradicciones estructurales, se agrupan y reagrupan entre la resistencia conservadora y la apertura al posneoliberalismo.

El valioso texto que nos ofrece aquí Franck Gaudichaud precisamente se pone en este borde histórico y sobre la base de una evaluación de la trayectoria reciente de la sociedad chilena, incursiona sobre las interpretaciones del momento actual y las posibilidades de algún tipo de alternativa política de carácter popular. Los ejes en que concentra su análisis –nombro solo los que me parecen principales– son la centralidad de la relación capital/trabajo, el carácter de los movimientos sociales y el peso de la subjetividad de masas que el propio modelo produce y reproduce, todo ello en el marco de la institucionalidad política y la estructura de clases que caracterizan en el presente al modelo neoliberal. La combinación de dichos ejes y la apelación a tales aspectos estructurales (lo político y las clases sociales), conducen a una síntesis crítica que, a mi juicio, constituyen el aporte central que ofrece el texto, pues permite una discusión sobre las alternativas políticas, teniendo a la vista una hipótesis interpretativa del momento por el que hoy atraviesa la sociedad chilena.

En este sentido, aprovecho esta nota para acentuar algunos aspectos en relación a los ejes que nos propone Gaudichaud; estos comentarios ya han sido expuestos en otros lugares, pero creo viene al caso retomarlos aquí dado el tipo de análisis que nos presenta el autor.

En primer lugar, destacar que las recientes movilizaciones de trabajadores han tendido a desbordar las formas organizativas y de acción tradicionales, y por ello mismo, a la propia institucionalidad sindical conservadora. En 2015 tenemos a la vista la huelga de los subcontratistas del cobre –que incluso costó la vida del trabajador Nelson Quichillao a manos de la

policía militarizada—, el largo conflicto de los profesores que rebasó la política conciliadora de una parte de la dirigencia del Colegio de Profesores, y finalmente, la lucha de los trabajadores públicos del Registro Civil que han debido enfrentar al gobierno y al despliegue de todos los dispositivos del poder: la ley, la presión política, la campaña mediática e incluso la conducta desleal (si no francamente aleve) de la dirigencia de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de la izquierda parlamentaria.

Estas movilizaciones confirman la profunda crisis del sindicalismo clásico, pero a la vez abren posibilidades para un nuevo movimiento de trabajadores que rompa con los límites ideológicos y objetivos impuestos hasta ahora por el sindicalismo conservador. En efecto, si este nuevo movimiento logra madurar, lo hará a partir de bases totalmente diferentes. Por ejemplo, desprendiéndose de una concepción que considera al sindicalismo tradicional y sus sindicatos legales, propios de la etapa desarrollista industrializadora, como la única y más efectiva forma de organización de los trabajadores. Hubo antes formas mutualistas, sociedades en resistencia, mancomunales, etc., que en ausencia de una legislación laboral, organizaron grandes masas obreras que enfrentaron directamente al capital e incluso ofrecieron respuestas autónomas a las necesidades colectivas; los derechos codificados en la legislación laboral, a cuyo amparo se desarrolló luego el sindicalismo clásico, es resultado de dichas luchas. También comprendiendo que frente a un “capital extendido”, es decir, que somete a su racionalidad y dominio actividades sociales antes fuera de la producción capitalista, es necesario del mismo modo, concebir de manera “extendida a la clase trabajadora”. Si el capital convierte los servicios —antes públicos y sin fines de lucro— en actividad productiva de valor, o somete otras actividades no mercantiles, personales y/o comunitarias, a la lógica de la acumulación, entonces los que allí se desempeñan y vendan su talento productivo al capital, son igualmente parte de la clase trabajadora. Así como las formas de pago o de contratación —directa o indirecta; parcial o completa; temporal o permanente— no importan para definir a la clase trabajadora, tampoco el carácter material o inmaterial del trabajo o de su resultado, son criterios correctos para dilucidar quiénes son o no parte de aquella. Lo central es la relación social entre capital y trabajo. Y finalmente, entendiendo que hay luchas cuya escena no es ya el terreno de la empresa e incluso la rama, pues se trata de derechos

colectivos que sólo pueden imponerse enfrentándose al conjunto del capital y al Estado. Un nuevo sistema de relaciones laborales, de salud, de transporte público o un sistema educacional, por citar algunas demandas más inmediatas, indefectiblemente son luchas por *derechos generales* y no derechos de un sindicato o federación; son luchas por los intereses globales de los trabajadores constituidos como sujeto colectivo autónomo y opuesto al capital.

En segundo lugar, es necesario resaltar la emergencia entre 2006 y 2011 de las movilizaciones sociales, pues, como bien muestra el autor en este libro, la abrupta explosión de “lo social” cambió severamente el panorama nacional: mostró las arrugas de una contrarrevolución madura y develó una suerte de *incompletitud* del teorema neoliberal. En efecto, la institución mercado mostró sus insuficiencias para procesar todos los conflictos y disiparlos en meras contiendas entre partes privadas; el dispositivo de regateo entre privados (el mercado), incluyendo el recurso judicial para resolver las contiendas sobre obligaciones y derechos consignadas en los contratos, no alcanzó para contener y mantener los conflictos en la esfera civil, sobre todo cuando una de las contrapartes saltó de lo individual a lo colectivo.

El creciente malestar terminó por desbordar parcialmente el “orden de mercado” y la burocracia política y sus ingenieros en gestión de conflictos, desacreditados y perplejos, en reiteradas ocasiones fueron superados por la dinámica de las luchas sociales. El conflicto por la educación es un caso paradigmático por muchas razones, pero una es crucial y se refiere al sentido menos visible de la lucha de los estudiantes secundarios. Estos reclamaron por la gratuidad y mejores condiciones materiales, pero dejaron entrever en sus formas organizativas, en sus acciones y en su estética de lucha, un rechazo feroz a la propia comunidad escolar, a la escuela, como espacio invivible por su autoritarismo, mediocridad, por el colapso de los profesores, por su régimen de competencia individual y la presión por el éxito que enfrenta unos jóvenes y adolescentes con otros. Por ello, a diferencia de otros movimientos, los secundarios no eran fácilmente domesticables apelando a políticas redistributivas y clientelares: sus demandas no eran susceptibles de reducirse a precios; y mirado desde otro ángulo, se trataba de la rebelión de los hijos del modelo neoliberal maduro cuyas luchas no consistían en resistir las reformas neoliberales, sino en rebelarse contra el efecto de su funcionamiento pleno; en rigor, su malestar era consecuencia, resultado, de un

modelo realizado y frente al cual venían reaccionando masiva, espontánea y sistemáticamente desde el “mochilazo” del 2001. No es arriesgado, entonces, afirmar que fue el movimiento estudiantil secundario –y no el universitario– la base de las luchas sociales que lograron trizar los consensos de las clases dominantes y la paz social que los gobiernos civiles mostraban al mundo como el exitoso modelo chileno y la triunfante transición a la democracia.

Así las cosas, la *incompletitud* de la utopía neoliberal puede considerarse una *anomalía crítica*, una verdadera falla estructural, por cuanto la emergencia de las movilizaciones masivas y de los movimientos sociales expresan, tanto el fracaso del intento de diluir la “cuestión social” en la cuestión privada, como la ineficiencia del propio sistema político que diseñó el neoliberalismo, cuestión central a la hora de calibrar el momento actual de la política chilena. Detengámonos un minuto aquí. En particular, el sistema de partidos políticos se ha mostrado estéril para anticipar, procesar y disipar los conflictos sociales que escalan por abajo, a la par que parece no ser capaz ya de ofrecer una representación eficaz del interés general de capital y gestionar sus conflictos fraccionales que se precipitan por arriba. Y esto es una debilidad crucial pues manifiesta los límites de “lo político” en el contexto de un modelo cuyas potencialidades se han realizado casi completamente. En efecto, un régimen político debilitado, que pierde por abajo su capacidad de maniobra vía clientelismo frente a las luchas sociales, por *default* tiende a fortalecer sus dispositivos y formas policíacas de control del orden, mientras por arriba, si es capturado por el capital, tiende a convertirse en un cuasi cascarón jurídico-político dirigido desde fuera por un “poder dual burgués”, que comanda a la tecnoburocracia y su administración. El régimen político y el Estado actuales en nada se parecen al ideal republicano liberal-burgués, al Estado de compromiso y benefactor declarado por la Constitución de 1925 y aderezado a través de sus sucesivas reformas. El régimen político actual carece de su aura democrática y el Estado de su majestad como titular del bien común; incluso más, el mismo Estado corre riesgo de “lumpenizarse”. Esta posibilidad no es ajena a los momentos en que se conjugan una fuerte concentración del capital con una debilidad estructural de la institucionalidad política burguesa, y en América Latina la asociación policíaco-mafiosa entre transnacionales, capital monopólico, partidos políticos y ejército no son ninguna sorpresa.

Así, la contrarrevolución neoliberal chilena se encamina veloz hacia sus propios límites. Hoy son las instituciones de la “república” las que se trizan. El Estado subsidiario, el Parlamento, los partidos políticos, las Fuerzas Armadas, el empresariado, la burocracia eclesiástica, y la Constitución Pinochet-Lagos que las resguarda, todos eslabones de una larga trenza de corrupción moral y material, ya han entrado en la zona de costos crecientes para sostener su hegemonía ideológica y política. Y si bien todo esto aparece ahora sin claros oscuros, que los velos han caído y la decadencia moral se muestra como simple síntoma del fracaso de la utopía neoliberal, no fue así hasta hace muy poco. Poco tiempo atrás, la mayor parte de la sociedad chilena vivía bajo el influjo de un modelo estable y triunfante... Fuera por cinismo, miopía o por ambos, las clases dominantes subestimaron las fisuras de su modelo, y una vez enfrentadas a las crudas circunstancias, han mostrado sorpresa y cierta perplejidad que ha retardado el diseño de una salida institucional.

Lo que se ha abierto en Chile es un periodo político de creciente pugna entre las fracciones conservadores y reformistas de las élites dominantes, pugna en torno a cómo enfrentar y resolver los déficits estructurales del neoliberalismo maduro. Pero a la vez, un mismo ambiente tenso por arriba, ofrece a los “terceros excluidos” del teorema neoliberal, los trabajadores y sectores populares, enormes posibilidades para dar un salto y constituirse en una fuerza gravitante en los acontecimientos por venir. Y es éste el terreno al que nos conduce directamente, y sin rodeos, todo el riguroso trabajo analítico de Franck Gaudichaud: la construcción política estratégica para el hoy, crudo problema al que no en vano le dedica sus mayores esfuerzos teóricos y prospectivos en la última parte de su texto. Nada simple por cierto. Se trata nada menos que desentrañar las posibilidades de una política general que haga plausible la configuración del bloque de los de abajo, o lo que no es sino su contracara, una estrategia común capaz entrelazar la multiplicidad de luchas contra el capital que discurren actualmente por el país. Un desafío no sólo del análisis político, sino también de la propia práctica política inmediata.

Santiago, 21 de noviembre de 2015

Introducción

A más de 40 años del golpe: ¿el “modelo” chileno en crisis?

“Con una metralleta en la raja, todo Chile trabaja”

Sergio de Castro,
Ministro de Hacienda de la dictadura
entre 1977 y 1982

“Debemos reconocer que no hemos logrado superar las grandes desigualdades que nos afectan, ni terminar con los privilegios y abusos en distintos ámbitos de nuestra vida y de la marcha del país”

Michelle Bachelet, presidenta de la República,
21 de mayo de 2014, discurso ante el Congreso

11 de septiembre en Chile. Una fecha cargada de olvido y de memoria: memoria viva, memoria herida, memoria en lucha. Un mes lleno de dolor y odio, de rabia y miedo. Una fecha simbólica que nos recuerda que a más de cuatro décadas del golpe de Estado, la dictadura no es sólo pasado, sino presente, ya que en cierta medida “el pasado no pasa”, a pesar de los años y de los profundos cambios vividos por Chile desde 1990 (Compagnon, Gaudichaud, 2008).

En 2014, el mes de septiembre fue particularmente agitado y tenso. El lunes 8, una bomba explota en la estación de metro “Escuela Militar” de Santiago, dejando 14 personas heridas y provocando pánico en la ciudadanía de la capital. Inmediatamente, los principales medios de comunicación alimentan la confusión: en la noche, un reportaje televisivo emitido por Canal 13 no duda en vincular directamente el atentado con varias organizaciones del movimiento estudiantil, sin apoyarse en ningún tipo de investigación;

la mañana siguiente, y acompañando la tendencia a la criminalización de la protesta social, el diario conservador *La Segunda* destaca en su portada en todos los kioscos del país: “El retorno del miedo”... Una estrategia de la tensión nutrida por el duopolio casi perfecto que domina el campo mediático chileno.¹ El 10 de septiembre, un senador recalca, a *mezzovoce* y casi disculpándose, una reflexión que ya está dando vueltas en las redes sociales:

lo que corresponde es que se estudien la distintas hipótesis y, así como algunos han apuntado a sectores anarquistas, e incluso algunos han apuntado irresponsablemente hacia los estudiantes, nosotros también creemos que es importante analizar lo que podría ocurrir con células de exagentes ligados a la inteligencia militar o la dictadura.²

Ese mismo día, 24 horas antes de las conmemoraciones, aparece un inserto en el periódico *La Tercera* firmado por oficiales de las Fuerzas Armadas en retiro, proclamando su reivindicación del golpe militar y condenando los procesos judiciales a los que están sometidos altos militares por su actuar en contra de los derechos humanos. Los términos son claros y transparentes:

Saludamos a todos los chilenos en el día que señala la fecha fundacional del Chile del siglo XXI. La tarea de reconstrucción efectuada, por toda la Nación, de las FFAA y de Orden a partir del 11 de septiembre de 1973, sigue siendo reconocida por los chilenos amantes del orden y la seguridad.³

Los fieles partidarios del fallecido —e impune— dictador no se equivocan: la obra de la Junta fue precisamente *fundacional* para la sociedad chilena actual. El mismo 11 de septiembre, mientras se desarrollan conmemoraciones oficiales, partidarias o de organismos de la sociedad civil y de derechos humanos, algunos jóvenes encapuchados de barrios populares se enfrentan a Carabineros con barricadas incendiarias y *cocktails* molotov, como todos

¹ Ver la reacción de rechazo de los dirigentes estudiantiles frente a esta manipulación, así como las duras críticas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. En: <www.eldinamo.cl/2014/09/10/ex-dirigentes-rechazan-reportaje-de-canal-13-que-vincula-bombazos-con-movimiento-estudiantil>.

² Jiménez, Marcela, 2014 *El Mostrador*, 10 de septiembre. En: <www.elmostrador.cl/pais/2014/09/10/quintana-sincera-tesis-y-advierte-que-tras-bombazos-pueden-haber-reactivacion-de-ex-agentes-de-la-dictadura>.

³ 2014 *La Tercera* (Santiago) 10 de septiembre.

los años, ritualmente. En las calles céntricas de Santiago, en los supermercados, la gran mayoría parece poco sensible a esa fecha y sigue su rutina, imperturbable... Hoy las imágenes del golpe parecen lejanas para muchos ciudadanos: 80% de la población no vivió el 11 de septiembre de 1973 y sus violencias o tenía menos de 10 años cuando ocurrió este traumático acontecimiento. Incluso, la transición posautoritaria de 1989-1990 parece algo de otra época para una generación que nació en “democracia” y sólo conoce la sociedad “moderna” actual, poblada de *malls* climatizados, educación-mercado, nuevas tecnologías de la información, endeudamiento masivo y consumismo. La imagen internacional proyectada de Chile en los grandes foros mundiales es la de un país “moderno”, con una democracia estable y sólida. En no pocos casos, el país que vio nacer a Violeta Parra es presentado como ejemplo a seguir. Esta “imagen-país”, tan cotizada en los mercados internacionales como garante de jugosas inversiones extranjeras directas y de bajo “riesgo” para las bolsas del primer mundo, ha sido reforzada por la integración del país andino a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2010. Un “privilegio” que sólo comparte con México en América Latina. El 23 de abril de 2013, Erik Solheim, presidente del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, afirmaba, ante un selecto grupo de medios de comunicaciones internacionales, que:

Chile tiene un rol muy importante por desempeñar compartiendo su gran experiencia en promoción de la democracia, en un rápido desarrollo económico y en sacar a la gente de la pobreza. Es un gran ejemplo de inspiración para el resto de Latinoamérica y también para el mundo (EFE, 2013).

El tecnócrata noruego añadió que una de las fortalezas del país serían sus empresas y la presencia de una sociedad civil “muy fuerte”.

Acaso, ¿desde el fin del régimen militar no se ha logrado disminuir, de manera contundente, la pobreza, que pasó –según estadísticas oficiales–, del 38,6% en 1990 a un 14,4%, en 2013?⁴ ¿No es que las elites chilenas pueden

⁴ Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2013, la pobreza en Chile medida por ingresos, alcanza un 14,4% (es decir, cerca de 2,5 millones de chilenos), mientras que desde el punto de vista de la “pobreza multidimensional” (que mide educación, salud, trabajo y seguridad social y vivienda), esta llega hasta el 20,4% (Ministerio del Desarrollo social, 2015).

vanagloriarse de una baja tasa de desocupación, articulada con un fuerte crecimiento económico, impulsado por un empresariado nacional muy concentrado y un régimen fiscal extremadamente favorable a los capitales internacionales? De hecho, Chile ha suscrito varios convenios internacionales sobre protección de los derechos humanos y, a la vez, detenta el récord en el mundo de cantidad de tratados de libre comercio firmados ¿La democracia chilena no es reiteradamente presentada, por medios de comunicación y cientistas sociales, como producto de una transición modelo, basada en amplios acuerdos y consensos entre las fuerzas políticas que gobiernan desde entonces?

Empero, tras el lindo escaparate del *chilean way* subyace el secreto no contado de tanta acumulación de riquezas, expansión del consumo y crecimiento sostenido de productividad: una explotación feroz del trabajo y de la naturaleza por el capital nacional y transnacional. Como lo intentaremos subrayar en las próximas páginas, los exitosos frutos que arroja el mentado “jaguar” chileno –y sus empresarios– provienen en rigor de una extracción de plusvalía descomunal sobre el trabajo vivo, acoplada a un modelo primario-exportador extractivista, que *in fine* limita la economía chilena a ser un eslabón altamente dependiente del mercado mundial, sin capacidad de transformación-valoración de sus materias primas ni de sus inmensos recursos naturales. Es dentro de los efectos de tales dinámicas que se deben entender varias de las “irracionalidades” más comentadas del capitalismo neoliberal chileno: inmensas desigualdades⁵ y condiciones de empleo desastrosas para las grandes mayorías; debilitada relación entre política, participación popular y democracia; mercantilización de todos los espacios de vida; disconformidad creciente de una nueva generación que parece haber perdido el miedo; ausencia de legitimidad de un sistema institucional moldeado en dictadura, consecuencias medioambientales del sistema primario-exportador, etc. Grietas múltiples que al calor de las movilizaciones que ha vivido el país desde los años 2006-2007 parecen haberse transformado en fisuras abiertas el 2011, con sus masivas luchas sociales y la irrupción en las calles de un descontento acumulado, particularmente en la juventud. En ese momento, algunos autores anunciaron categóricamente el fin del “modelo”, la próxima llegada de una primavera democrática. Y no pocos

⁵ Chile es el cuarto país más desigual de América Latina, con un índice Gini de 0.51: ver Gráfico en Anexo 2. Mapa de la extrema desigualdad.

analistas todavía piensan que la victoria electoral de la presidenta Bachelet en 2013 y el actual gobierno de la “Nueva Mayoría”, con su programa de reformas, son la prolongación de este nuevo ciclo político. ¿Será cierta esta primera impresión? ¿Y qué pensar de la escasa presencia en estos diversos análisis de un actor esencial en la historia chilena: los asalariados organizados, el movimiento sindical y el conflicto capital/trabajo? Hoy, cuando el gobierno despliega sus principales medidas, ¿cómo analizar la coyuntura pero también, más profundamente, la construcción histórica de la sociedad neoliberal chilena, sus conflictos sociales y políticos actuales?

El presente ensayo tiene como objetivo realizar un estudio crítico de la dinámica histórica y presente de un régimen político y de acumulación capitalista atravesado, de manera dialéctica, por grandes tensiones y contradicciones. Este estudio pretende volver sobre este *proceso de maduración y fisura* parcial del modelo chileno en su etapa “avanzada”, con un enfoque particular puesto en el conflicto capital/trabajo, elemento fundamental poco considerado en los principales estudios sobre Chile, pero que también toma en cuenta otros ámbitos de la sociedad neoliberal comenzando por el campo político-institucional, la estratificación social y composición clasista, la forja cultural del individuo neoliberal, los movimientos sociales y el actual gobierno. En el plano epistemológico, asumimos una orientación de carácter marxista, un materialismo dialéctico, abierto a otras corrientes del pensamiento crítico, con el propósito de desvelar algunos de los “paisajes de la verdad” del capitalismo chileno, tal como lo ha propuesto, desde otras problemáticas, un autor como Michael Löwy (Löwy, 1991). Por otra parte, pretendemos hacer aquí una labor de síntesis y de balance bibliográfico crítico, cruzando trabajos y fuentes que no siempre supieron —o no quisieron— dialogar hasta el momento, con el fin de alimentar discusiones colectivas sobre el “modelo chileno”. Y no desde un punto de vista académico falsamente “neutral” sino, al contrario, aspirando a que este texto se convierta en un modesto aporte para las necesarias construcciones de alternativas democráticas, anticapitalistas y ecosocialistas en el Chile de hoy.

Realizaremos, en un primer momento, un repaso a la literatura existente sobre el neoliberalismo “maduro” chileno y el régimen político actual, recordando la importancia del legado dictatorial hasta nuestros días. También trataremos de mostrar las líneas de fuerza de la sociogénesis neoliberal, su

estructura sociopolítica y clases sociales, su sistema mercantilizado de educación y sus grandes desigualdades sociales o territoriales, así como el consecuente malestar popular y ciudadano. Nuestra hipótesis es que el regreso de agudas expresiones de descontento social después de décadas de “paz neoliberal”, evidencia tanto una *crisis de legitimidad política del neoliberalismo chileno*, de más largo aliento, como una potencial crisis de hegemonía de este modo de acumulación. Por otra parte, explicaremos, a partir del análisis de varias publicaciones y estudios, el estado de la relación capital/trabajo en Chile, el impacto de la *flexiprecarización* del empleo sobre la conformación de la clase asalariada y sus capacidades de resistencia: una evaluación esencial en el momento de pensar las alternativas posneoliberales y poscapitalistas y, como lo veremos, ampliamente eludida por la literatura sobre el tema. Asimismo, analizaremos el estado del movimiento sindical, mostrando la situación muy débil y globalmente subordinada de amplias fracciones del asalariado, pero también la potencialidad político-social de algunas luchas emblemáticas en sectores estratégicos de la economía. No por eso dejaremos de lado, un breve diagnóstico sobre el reciente “despertar” de varios movimientos sociales, estudiantiles y populares, y la mutación de un descontento subterráneo en creciente politización desde el 2011-2012, sin que haya significado hasta ahora la impugnación global del neoliberalismo y de sus principales “sentidos comunes”. Antes de concluir, trataremos la fábrica del individuo neoliberal y sus consecuencias, y también mencionaremos el nuevo ciclo político-institucional abierto por el gobierno de la “Nueva Mayoría” desde principios del 2014, con la aparición de lo que hemos podido describir como formas originales de “transformismo político”. Para terminar, intentaremos una reflexión –de manera prospectiva– sobre las posibles condiciones y experiencias colectivas necesarias para la constitución de una dinámica de conflicto que podría encaminar a Chile hacia un proceso de democratización “raizal” (término acuñado por el colombiano Fals Borda), dejando atrás definitivamente la herencia pinochetista, discutiendo entonces las apresuradas teorías del supuesto “derrumbe” del modelo chileno.

La vía chilena al neoliberalismo: de la (contra)revolución cívico-militar a la democracia neoliberal tutelada actual

Los hechos son mundialmente conocidos. En septiembre de 1973, la aviación chilena bombardeaba el palacio presidencial en Santiago, y mientras fallecía Salvador Allende, armas en mano, en La Moneda incendiada, comenzaba la represión en las poblaciones, los cordones industriales y en el campo. No sólo se terminaba con la “vía chilena al socialismo” y se iniciaba un periodo de terrorismo de Estado y de destrucción de todos los espacios democráticos, sino también debutaba una larga dictadura cívico-militar (17 años), cuyo principal objetivo fue el aniquilamiento del movimiento obrero y revolucionario. En abril de 1975, el régimen del general Pinochet, aún cuando no había terminado el periodo de más intensa represión socio-política, comenzó su obra refundacional de todos los cimientos de la sociedad, de la economía y del Estado. Bajo el alero del poder militar, las reformas drásticas de los “Chicago boys”¹ y seguidores locales del economista Milton Friedman, lograron liquidar las numerosas nacionalizaciones de la época de la Unidad Popular (UP, 1970-1973) y neutralizar, por varios años, la extraordinaria capacidad de movilización obrera y de poder popular (Gaudichaud, 2013). La política de “shock” fue destinada a transformar de manera radical (es decir *en la raíz*) las fronteras establecidas entre poder político, Estado y campo económico para terminar definitivamente con el Estado capitalista “de compromiso” de los años 1930-1970.² Se trataba de terminar con toda expresión de estrategia de sustitución de importaciones (que ya había mostrado todas sus contradicciones) y rasgos, aunque tímidos, de Estado-regulador. El “plan de recuperación económica” del ministro Jorge Cauas sólo se pudo imponer después de haber marginado las veleidades nacional-corporativistas de miembros eminentes de la Junta, tal como el general de aviación Gustavo

¹ A este propósito, ver el film documental de Carola Fuentes y Rafael Valdeavellano, *Chicago boys* (Santiago: La Ventana Cine, 2015).

² Sobre la noción de Estado capitalista de compromiso presente en la historiografía chilena y su crítica, ver Gómez Leyton, 2004.

Leigh. El terror y el aplastamiento del movimiento revolucionario no fueron elementos casuales o colaterales del fundamentalismo monetarista, sino un objetivo central del golpe, como también una condición necesaria para aplicar medidas de tal magnitud, y en tan poco tiempo:

La violencia por tanto pasa a tener un rol central en la constitución del Estado neoliberal. El fuego amenazante, aquel que impone la muerte, tortura y el exilio a los perdedores, el miedo que ronda por la calles tras fusiles y cascos militares. Esa violencia constitutiva es necesaria para reconstruir el capitalismo (Carrillo Ramos, 2009).

El “shock” fue también *blitzkrieg* –una verdadera guerra relámpago– así como lo había aconsejado el mismísimo Milton Friedman al general Pinochet con el fin de hacer decaer bruscamente la inflación, apoyar la recomposición del capital privado y su apertura al mercado mundial, impedir la oposición de los sindicatos o posibles resistencias colectivas. En pocos meses son centenares de empresas estatales o “intervenidas” por el Estado durante la UP las que fueron privatizadas, traspasadas al empresariado y, en no pocos casos, a la “familia militar” a través de las redes clientelares del pinochetismo. Entre 1978 y 1981, la Junta realizó reformas estructurales, base de la sociedad actual: ley laboral limitando drásticamente la actividad sindical (1979); liberalización de la propiedad y mercado de la tierra; privatización del sistema de pensiones (creación de las AFP³) que dio un impulso esencial a la financiarización de la economía (1980); nueva Ley minera abriendo el país a las concesiones transnacionales (1981); Ley general de universidades y proceso de municipalización de la enseñanza básica y media que termina, al final de la década, en un proceso de mercantilización de la mayoría de los estratos educativos. Todo eso coronado y avalado por la nueva Constitución de la República (1980) y, posteriormente (1984-1989), adaptado por nuevos

³ Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son instituciones financieras privadas encargadas de administrar los ahorros, según un sistema de capitalización individual de pensiones de vejez e invalidez. Fueron creadas en noviembre de 1980 por decreto-ley, entregando a empresas financieras especulativas todo el sistema de jubilación del país, el que anteriormente funcionaba según un sistema de reparto a cargo de las cajas previsionales. Las AFP constituyen un eje fundamental de la financiarización a ultranza del modelo económico chileno. No obstante, las Fuerzas Armadas se mantuvieron con las ventajas del sistema anterior por repartición... Para un análisis crítico, ver el sitio del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo: <www.cendachile.cl>.

decretos, nuevas privatizaciones, bajo el mando del ministro Hernán Büchi, después de la profunda crisis de 1982-1984 y del paréntesis “intervencionista” de la dictadura (Huneus, 2000).

Incluso esta segunda oleada [de privatizaciones] es diferente de la anterior pues no se trató de una mera reprivatización de empresas que el gobierno de Allende había pasado al área social. No, esta vez se enajenaron otras firmas estatales productoras de bienes así como las vinculadas a la producción de servicios de utilidad pública (electricidad, transporte, agua, gas, comunicaciones, etc.), para luego, desde el Estado, estimular la emergencia de actividades privadas comerciales en ámbitos antiguamente exclusivos de los servicios públicos: salud, educación, previsión. Es la materialización de las definiciones doctrinarias establecidas en la Constitución del 80 y sus leyes orgánicas. Esta segunda oleada, como se comprende, consistió en una profundización y extensión de la lógica de mercado a esferas antes no mercantiles de la vida social del país (Agacino, 2006).

Así, de manera muy temprana, en comparación con los otros países de la región latinoamericana, se forjó violentamente la contrarrevolución chilena que derivó en una auténtica “revolución” neoliberal-conservadora, como proponen llamarla Tomás Moulian (1998), Ricardo Osorio (2007) y Manuel Gárata (2012). Más allá de los legítimos debates que suscitó, la noción de “revolución capitalista” puede ser pensada en el caso chileno para graficar el carácter abrupto y fundamental de los cambios en el modelo de acumulación como también en la sociedad, que van a conducir los militares para defender los intereses de las clases dominantes por encima de sus posibles diferenciaciones:

En el caso chileno, hay una revolución capitalista por mediación puesto que los militares asumen la tarea de reformular el desarrollo capitalista chileno, cambiando su sesgo nacional-desarrollista por un sesgo liberal que ajusta la economía chilena a las tendencias, al principio inciertas y luego visibles, del capitalismo mundial (Moulian, 2002: 14).

No obstante, en un plano histórico estricto y desde un análisis de las relaciones entre las clases sociales, compartimos plenamente la afirmación de Julio Pinto y Gabriel Salazar, según la cual:

en rigor, la “revolución” de 1973 no fue ni una revolución industrial, ni revolución burguesa, ni revolución nacionalista, sino menos que eso —y más burdamente—, sólo una “contra-revolución militar” que, en el corto plazo, fue anti-proletaria, y en el mediano, pro-capitalismo internacional (Pinto, Salazar, 1999: 100).

En los años 80, y de acuerdo a la definición que propone David Harvey (que hacemos nuestra en este ensayo), el neoliberalismo conquistó el planeta ante todo como régimen de acumulación flexible, como nueva fase del capitalismo globalizado y puede ser básicamente entendido como el “camino” de una ofensiva generalizada de las clases dominantes sobre el trabajo para recomponer la tasa de ganancia a niveles globales como locales (Harvey, 2013). Siguiendo la interpretación de las ondas largas del capital de Ernest Mandel, el neoliberalismo se inscribe dentro de lo que llamó “capitalismo tardío”, terminando —en su fase de descenso— con la fase de acumulación fordista-taylorista para instalar una brusca financiarización generalizada y nueva división internacional del trabajo, apoyada —entre otros— en la especulación, el fin de los pactos sociales de los 70 y nuevas tecnologías de la comunicación y de la información (Husson, Louça, 2013; Mandel, 1979). No obstante, asumimos aquí que el neoliberalismo, un término plural y hasta contradictorio, está también relacionado con un proyecto ideológico-cultural, un *ethos transformador* y un discurso económico y, para terminar, con diversos modos de gobernar, controlar y dominar a una comunidad humana (Haber, 2012). La ola neoliberal no se interioriza al mismo tiempo, con la misma intensidad y bajo las mismas condiciones políticas o socioeconómicas según los países. Por eso, adquiere rasgos diferenciados y temporalidades propias: de ahí, esas trayectorias divergentes y “variedades de capitalismo” estudiados por el sociólogo Tomás Undurraga en el caso de Chile y Argentina (Undurraga, 2014). En países como Bolivia, Argentina o México, el *giro* se despliega a mitad de los 80 en contextos de Estado de derecho y democracia electoral (formalmente por lo menos), bajo el yugo de las prescripciones y “ajustes estructurales” del Fondo Monetario Internacional, y con la presión de la necesaria “guerra” a la hiperinflación y crisis de la deuda (Anderson, 2003). El caso chileno es pionero (el giro es de 1975) y representa según Manuel Gárata “una variante extrema del liberalismo económico”, creada en condiciones de dictadura. Ingresa en este país como contrarrevolución cívico-militar y reacción de las

atemorizadas clases dominantes, apoyadas decididamente por el imperialismo estadounidense, frente a la experiencia de la Unidad Popular. En este sentido y tomando en cuenta esas diferentes variables, creemos que se puede efectivamente hablar –como lo hacen muchos autores– de *modelo chileno*, entendido como “arquetipo”⁴ del capitalismo neoliberal, aunque el caso de Chile es también impactante por sus modalidades propias, especificidades y por no pocas variedades según los sectores económicos y campos estudiados.⁵ No obstante, en un plano más general, es evidente que la crisis de los equilibrios excluyentes e interclasistas del periodo nacional-popular (1938-1967), la derrota del proyecto allendista de vía institucional al socialismo (1970-1973) y el golpe del 11 de septiembre abrieron para la burguesía chilena la posibilidad de lanzarse en una nueva ofensiva general contra el trabajo, aplacando todo riesgo de insurrección popular y transformando el Estado, la sociedad así como el modelo económico para la instauración de un nuevo modelo con altos grados de coherencia interna y externa.

Tras cuatro décadas de transformaciones profundas, y más allá de la transición política de 1989-1990, la centralidad de los equilibrios macroeconómicos, la construcción de un Estado “subsidiario” (en realidad, un Estado autoritario neoliberal), la profundización de la asimetría entre capital y trabajo (ya muy profunda antes de 1973), el apoyo irrestricto a la estrategia exportadora como “motor” del crecimiento macroeconómico, el control de gran parte de los recursos naturales por conglomerados transnacionales, la hegemonía de las finanzas especulativas, siguen siendo el sello distintivo de la economía actual. La lógica política se subordinó a la racionalidad económica, la cual debía seguir los principios de la economía de mercado: esa “nueva razón del mundo” conformó una “sociedad neoliberal” tal como la estudiada en Europa por Pierre Dardot y Christian Laval (Dardot,

⁴ El diccionario de la RAE define la palabra modelo como: “Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo”, <<http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=xzHZWdlqrDXX2u7iR2i0>>.

⁵ El trabajo de tesis doctoral del politólogo Antoine Maillat insiste en el hecho de que en Chile la acción pública se adaptó a las exigencias del discurso monetarista pero según una gran “variedad” de modalidades, lo que significa relaciones diferenciadas entre Estado, sociedad y mercado según los sectores (transporte, salud, pensiones, educación, etc.). Según Maillat existen así diversas figuras, más que un “modelo”: neoliberalismo “ortodoxo”, “regulador”, “emulador” o “mixto” (Maillat, 2013).

Laval, 2009), pero con caracteres específicos, producto de la violenta experiencia chilena y su posición periférica en el sistema-mundo. En un parto sangriento para las clases populares y las izquierdas, nació lo que propusimos nombrar *vía chilena al neoliberalismo* (Gaudichaud, 2014b) y, con ella, una sociedad en gran parte “reformulada”. No sólo la economía se desdibujó y reconstruyó desde otras bases, sino también nuevas sociabilidades, sentidos comunes y formas radicalmente diferentes de *gubernamentalidades* (en el sentido de Foucault en sus estudios sobre la biopolítica). A partir de 1990, en nombre de “la fuerza y de la razón”,⁶ de los consensos entre las fuerzas partidarias hegemónicas que pactaron la salida pospinochetista y de la “justicia en la medida de lo posible”,⁷ los “Chicago boys” y los militares fueron gradualmente sustituidos por nuevos tecnócratas, apoyados directamente por Estados Unidos:⁸ los “monjes” de *think tanks* social-liberales como el Cieplan, y por una coalición de gobierno –la Concertación de Partidos por la Democracia⁹– que aglutinó a socialistas renovados y demócratacristianos. Existe todo un debate para saber si estos partidos del periodo posdictadura gestionaron de manera ferviente y continuaron el modelo heredado o tuvieron que gobernar “en democracia” *a pesar de éste* (Silva, 2008), también se discute si los civiles crearon un modelo propio o “una tercera vía” (Taylor, 2006). Por nuestra parte, postulamos que los 20 años de la Concertación representan ante todo un momento clave de legitimación y consolidación del capitalismo neoliberal en Chile. Aunque el objetivo de este ensayo no

⁶ Términos incluidos en el lema del escudo nacional de Chile que originalmente reza: “Por la razón o la fuerza”.

⁷ Concepto famoso del primer presidente electo en posdictadura (1990), Patricio Aylwin, justificando en parte la impunidad de los responsables de la dictadura.

⁸ Sobre el papel de Washington en el fin de la dictadura y en la transición, ver Corvalán, 2012.

⁹ La Concertación de Partidos por la Democracia se fundó en 1988 como una coalición de diecisiete partidos políticos de derecha, centro y centroizquierda que se oponían a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y agrupó a sectores que van desde el Partido Socialista renovado a la Democracia Cristiana (centroderecha), pasando por pequeñas organizaciones socialdemócratas instrumentales como el Partido Por la Democracia, PPD. Los sucesivos presidentes de la Concertación fueron Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010). En 2011 asume el gobierno de derecha de Sebastián Piñera, empresario multimillonario que pretendía formar una “nueva derecha”, más liberal y moderna; la que perderá la elección frente a la nueva candidatura de Bachelet en 2013.

es detallar este periodo de administración y profundización civil de lo inaugurado por la dictadura, es menester recordar algunos elementos en torno a este tema para poder evaluar el presente.

Un autor como Manuel Garretón (intelectual cercano a la centroizquierda), afirma que los cuatro presidentes sucesivos de la Concertación encarnaron un “progresismo limitado” y estima que lograron “corregir” varios efectos del neoliberalismo autoritario del periodo anterior. “Crecimiento con equidad” bajo el presidente Aylwin, “modernización del Estado” con Eduardo Frei, reforma de la salud y avances constitucionales con Ricardo Lagos y, para terminar, un “nuevo estilo” de gobierno y políticas públicas de protección social con el primer gobierno de la socialista Bachelet: esas son las diferentes etapas que destaca el sociólogo para determinar la existencia en Chile de un “neoliberalismo corregido”. Es verdad, el premio nacional de humanidades y ciencias sociales reconoce explícitamente que se mantienen varios “enclaves autoritarios”,¹⁰ aún no superados, en la sociedad postpinochetista:

Si bien muy lenta y gradualmente se mejoró sólo parcialmente el clima de impunidad en materia de derechos humanos, se neutralizó el poder fáctico de las Fuerzas Armadas y el tejido de actores sociales pudo, en parte, recuperarse con los problemas que mencionaremos más adelante; la sociedad de los gobiernos democráticos concertacionistas quedó atada a la sociedad de la dictadura por dos cadenas o enclaves: por un lado, el modelo socioeconómico o modelo neoliberal, con papel hegemónico del mercado en los diversos ámbitos de la vida social, rol subsidiario del Estado y profunda desigualdad estructural y, por otro, el modelo político institucional, expresado principal aunque no exclusivamente en la Constitución de 1980 y cuya razón última era impedir cambios significativos en el modelo socioeconómico (Garretón, 2013: 220).

Garretón resalta la existencia de un “triángulo neoliberal” determinado por el “predominio irrestricto” del mercado como forma de organización social, del Estado subsidiario y una desigualdad estructural –de las más

¹⁰ Garretón define un “enclave autoritario” como la presencia de elementos “institucionales, ético-simbólicos, actorales y culturales que son propios de un régimen autoritario, pero que quedan incrustados en el régimen democrático, dándole el carácter de democracia incompleta” (Garretón M. A. y Garretón R., 2010).

contendientes del mundo—, todo eso directamente relacionado con el plano político-institucional heredado de la dictadura.

Efectivamente, recordemos que la Constitución política chilena sigue siendo la *carta magna* impuesta mediante el plebiscito fraudulento de 1980. Una de las especificidades de la “tramposa” transición es justamente la ausencia de proceso constituyente al salir de la dictadura y la prolongación de una constitución espuria en un régimen que se dice “democrático” (Atria, 2013). El general Pinochet, una vez perdido el *referéndum* de 1988, se mantuvo como jefe de las Fuerzas Armadas *en democracia* hasta el 10 de marzo de 1998, para al día siguiente asumir el cargo de senador vitalicio. Sólo las tentativas de justicia internacional y su arresto en Londres pudieron comenzar a entablar una verdadera justicia transicional y simbólica (Patino, 2000), aunque sin terminar con la impunidad, producto de la negativa del gobierno de Frei a dejar que se juzgara al dictador en el extranjero (en Londres).¹¹ El concepto de *democracia protegida*¹² forjado por el profesor de derecho Jaime Guzmán e influenciado por las teorías de uno de sus mentores (Friedrich Hayek) sobrevivió a sus creadores hasta nuestros días —tal un *Frankenstein institucional*—. Una *democracia protegida neoliberal* sustentada por un Estado capitalista autoritario, que si bien consagra —a partir de 1990— el funcionamiento de una democracia electoral y la restauración de libertades civiles y políticas fundamentales, glorifica el predominio del derecho de propiedad sobre todos los otros derechos y garantiza la libertad económica sobre todas las otras libertades. Por ejemplo, impide al Estado realizar actividades empresariales, salvo que una ley de *quórum* especial lo permita.

Paralelamente, el texto constitucional está plagado de candados regresivos respecto de las principales tendencias del constitucionalismo contemporáneo: ultrapresidencialista es a la vez sumamente rígido: su reforma exige para algunas materias el voto de las tres quintas partes o hasta de las dos terceras partes de los parlamentarios, más el acuerdo del presidente de la

¹¹ A pesar de los procesos abiertos por el juez Guzmán y de más de 400 querellas abiertas, Pinochet murió impune, en su casa de Santiago, en diciembre 2006 y si bien el gobierno de Bachelet le negó un funeral de Estado, el Ejército le rindió los honores fúnebres como ex comandante en jefe.

¹² Pinochet llegó a reivindicar públicamente la noción (un oxímoron en realidad) de “*democracia autoritaria*”.

República. Para coronar el edificio, este sistema institucional rechaza el principio de la representatividad de la mayoría a través de mecanismos como el sistema electoral binominal¹³ (casi único en el mundo) para la elección parlamentaria, destinado a sobrerrepresentar mecánicamente a la derecha y a excluir a la izquierda comunista del Congreso:

extraño y regresivo sistema electoral [que] exige crear coaliciones de partidos, otorga al sistema una gobernabilidad que se basa en las limitaciones de la voluntad política de la mayoría, y obliga a la mayoría a cogobernar con la minoría electoral. (Vergara, 2007).

Por cierto, el gobierno de Bachelet, en consenso con gran parte de la oposición de derecha, derogó el sistema binominal en enero 2015 para pasar a un sistema “proporcional moderado” (según ley d’Hondt) con el fin de otorgarle más representatividad al Parlamento e intentar subsanar la poca legitimidad del Congreso. También es necesario subrayar que las reformas de 2005 (gobierno de Lagos) han disminuido la dimensión más autoritaria de la Constitución, al otorgar al presidente de la República la posibilidad de pedir la renuncia a los comandantes en jefe de las FFAA, transformar el Consejo de Seguridad Nacional en un organismo consultivo y cambiar la designación de los miembros del Tribunal Constitucional. Sin embargo, sin proceso de Asamblea Constituyente originaria y popular, la *democracia protegida neoliberal* sigue estando vigente en sus aspectos centrales. Por otra parte, basta con constatar cual fue la política real de la Concertación en materia económica, de derechos humanos, de lucha contra la impunidad, de represión a los movimientos sociales, de políticas laborales o en términos de luchas contra las desigualdades para comprender por qué no compartimos, en absoluto, la afirmación de Manuel Garretón según la cual los gobiernos de la Concertación “corrigieron”, progresivamente y de manera incremental, el sistema capitalista neoliberal heredado. Si bien es cierto que algunos autores

¹³ El complejo sistema binominal establece que el Tribunal Calificador de Elecciones proclama como elegidos senadores o diputados a los dos candidatos de una misma lista, cuando uno de ellos alcanza el mayor número de sufragios y la sumatoria de la votación de ambos representa el doble de lo obtenido por la lista que lo sigue en número de votos. Este sistema de “doblajes” permite excluir sistémicamente las “pequeñas” listas y sobrerrepresentar las grandes coaliciones: el sistema de partidos se convierte así en un sistema de oposiciones consensuales (Moulian, 2004). Para más información, ver Couffignal, 2011.

califican a la transición chilena como “exitosa” o “acabada” (Prognon, 2010), es indispensable reivindicar una lectura alternativa de esta *doxa*, particularmente cuando varios pueblos vecinos de América del Sur buscan los caminos del posneoliberalismo e incluso cómo construir alternativas anticapitalistas.

La historia “desde abajo” o popular de la transición nos presenta otro relato, diametralmente diferente. En realidad, al salir de la dictadura, fascinados por el éxito económico del “jaguar de América del Sur”, atrapados en una negociación a puertas cerradas con los militares, impregnados de las teorías sobre “el fin de la historia”, convencidos de la necesidad de respetar la “democracia de los acuerdos” con la derecha pinochetista, poco presionados por un movimiento obrero derrotado, los diferentes actores de la Concertación, entre los cuales la actual presidenta Bachelet, cambiaron sus relatos de cambio social y Asamblea Constituyente para abrazar con frenesí el neoliberalismo y la institucionalidad autoritaria. El mismo Edgardo Boeninger, senador (designado por Pinochet) demócratacristiano, exministro del primer presidente electo en posdictadura, Patricio Aylwin, reconocerá más tarde en sus “lecciones para la gobernabilidad” que:

el éxito económico postrero del régimen militar influyó significativamente en las propuestas de la Concertación, generando de hecho una convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer, ante su base partidaria y electoral (Boeninger, 1997: 368-369).

Las numerosas publicaciones del sociólogo Felipe Portales sobre los mitos de la *democracia tutelada* chilena y el nivel de integración del modelo capitalista neoliberal por parte de la cúpula de la Concertación, confirman ampliamente esta franca aserción de uno de los ideólogos de la transición. De hecho, Portales recuerda que la coalición de gobierno más estable de la historia republicana de Chile (veinte años en el poder: 1990-2010) llegó a abandonar –conscientemente y en nombre de los necesarios “consensos”– la oportunidad histórica de usar su mayoría transitoria en el Parlamento para iniciar cambios más sustanciales en la Constitución y en el modelo económico, o por lo menos para anular la ley de amnistía de 1978¹⁴ (Portales, 2005). En

¹⁴ Promulgada en abril de 1978, este decreto-ley de la dictadura exime de responsabilidad penal a quienes cometieron actos de violencia y atropellos a los derechos humanos entre

el plano de la política económica, el balance es demoledor. La Concertación se negó rotundamente a terminar con el “Plan laboral” de la dictadura y su legislación¹⁵ y a emprender una reforma tributaria sustancial. Es más, ha continuado con las políticas de privatizaciones de la educación y de los servicios públicos, como también con el plan de concesiones de los inmensos recursos naturales del país, comenzando por el sector minero, la madera, la pesca y las actividades agrícolas de exportación. Encandilados por el milagro de los tratados de libre comercio (TLC) con EEUU, China, Japón y la Unión Europea, tampoco buscaron reiniciar una política de industrialización, valorizar las materias primas a través de la Corporación por el Fomento (Corfo) o acercarse a los países vecinos para desarrollar la integración regional. Y si mantuvieron el carácter estatal de la Corporación del Cobre (Codelco), multiplicaron al mismo tiempo la entrega de la mayor reserva de metal rojo del mundo a multinacionales, dando así la espalda a la perspectiva defendida por Salvador Allende de conquistar cierto grado de soberanía nacional con el control del “sueldo de Chile”.

La experiencia neoliberal tuvo el efecto de una verdadera revolución ideológica para los empresarios que adhirieron plenamente al proyecto. El conjunto de las elites se convirtieron a la nueva ideología: el Estado mayor de las Fuerzas Armadas, pero también los cuadros de los partidos que llegaron al poder en 1990. Chile es así el país del mundo donde la inversión extranjera representa la porción más elevada del PIB (59,6% en 2008 frente a un 24,5% como promedio mundial), una realidad explicable por el número de tratados de libre-cambio firmados por parte de Santiago (eran 24 en 2012) y por una legislación favorable a los capitales extranjeros. Los principales sectores de inversión extranjera son las minas (28%), y en particular las minas de cobre, principal recurso natural del país, la electricidad y el gas (18%). Las concesiones de infraestructuras y de equipamiento públicos, iniciadas en la década de los 90, también atraerón a los inversores, principalmente europeos y en particular españoles (Zrari, 2012).

1973 y 1978, instaurando así un precedente jurídico que permite justificar, en parte, la impunidad para militares y civiles del régimen de Pinochet.

¹⁵ Sobre este tema, ver el capítulo 4 del presente texto (“¿El retorno del movimiento obrero?”).

La diferencia con el periodo autoritario ha sido esencialmente la acentuación del gasto público en políticas sociales de carácter asistencialista (asumiendo los dictámenes del Banco Mundial) que, combinado con importantes tasas de crecimiento económico –alrededor del 7% anual en la década de los 90 y de 3 a 4% la década siguiente–, se tradujo en una importante reducción de la pobreza absoluta. En ningún caso, esta orientación significó un cambio sustancial en las profundas desigualdades distributivas, territoriales y de género. Si bien, en los últimos 20 años, la economía chilena ha crecido a un promedio anual del 5,1% (Fazio, Parada, 2010), con un PIB *per cápita* que roza en 2014 los 20 mil dólares (USD), esa cifra esconde la realidad de inmensas desigualdades de ingreso. Hoy, el sueldo promedio en Chile es de 740 USD mensuales y 50% de los asalariados ganan menos de 400 USD.¹⁶ Los “súper ricos” estudiados por el Departamento de Economía de la Universidad de Chile, capturan “la parte del león” del ingreso nacional: el 1% de la población acumula el 30,5% de los ingresos, el 0,1% el 17,6% y el 0,01% cerca de un 10% (López *et al.*, 2013).

En paralelo a esta concentración de la riqueza en manos de muy pocos, la fuerza resiliente y adaptativa de la (contra)revolución capitalista chilena ha sido profundizada y –en cierta medida– *difundida* al conjunto de la sociedad con políticas públicas legitimadoras y estabilizadoras por gobiernos electos en contexto de “democracia electoral de baja intensidad”. Como bien lo anota Guillaume Boccaro, lo “más irónico de esta historia” es que son los agentes políticos de centroizquierda, varios de ellos perseguidos durante los años de la dictadura, los que contribuyeron a completar, perfeccionar y extender este modelo:

Si el periodo dictatorial corresponde a la implantación del “ajuste estructural” que tiende a reducir el papel del Estado en la vida económica del país, el periodo posdictatorial no consiste en inyectar un *poco de social* con el fin de contrarrestar los efectos nefastos del capitalismo salvaje y asegurar la gobernabilidad del país. La ambición es mucho mayor y los efectos más profundos. De lo que se trata es tomar lo social y lo cultural como espacio de difusión de la nueva *doxa* neoliberal. Y de hecho, los economistas de la Cepal y de los distintos *think tanks* promotores de la Tercera Vía no se limitan a asistir a los pobres.

¹⁶ Ver cifras, estadísticas y estudios de la Fundación Sol: <<http://www.fundacionsol.cl>>.

Retomando el lema del Banco Mundial según el cual hay que ayudar a los pobres a que se ayuden a sí mismos, aplican al pie de la letra las nuevas normativas del Consenso post-Washington. Desde ahora, de lo que se trata es responsabilizar a los pobres, hacerlos entender que deben ser emprendedores de sus propias vidas y ubicarse en los nuevos nichos de mercado sacando provecho de su capital humano, social y cultural. Ya no se opone el Estado al Mercado como en los primeros tiempos de diseminación de la *vulgata* planetaria neoliberal. Se reconfigura al Estado mediante la privatización y la extensión de sus mecanismos de intervención –vía la constitución de una esfera paraestatal de casi-mercado– a nuevos ámbitos de la sociedad. La llamada sociedad civil se construye como actor económico y se “marketea” a la democracia (Boccaro, 2013).

Este proceso de “marketing neoliberal” de la democracia, del “arte de gobernar” el conjunto de los espacios sociales, tanto físicos, como subjetivos, ha sido favorecido por el sistema político “protegido” del periodo autoritario. Esa multidimensionalidad explica hasta qué punto la visión del mundo empresarial y librecambista de la burguesía invadió todos los poros de una sociedad neoliberal que durante un tiempo se ha considerado “triumfante”.

Génesis del capitalismo neoliberal “maduro” mitos de la sociedad de “clase media” y nuevas dominaciones

Uno de los autores que, a finales de los años 90, mejor se dedicó a describir críticamente el funcionamiento de la articulación entre transición pactada, adhesión de la centroizquierda y de los partidos de la Concertación a la utopía neoliberal y sociedad de consumo crediticio es el sociólogo Tomás Moulian. En su “anatomía del mito” democrático chileno, propuso varios conceptos para explicar el “transformismo” político que ha significado la transición, como también el carácter de esa fusión entre autoritarismo político, integración de los símbolos del modernismo de la economía del mercado y anomia individualista neoliberal. Adentrándose en las controvertidas profundidades de la realidad chilena, Moulian desdibuja un país páramo del “ciudadano *credit-card*”, paraíso del consumidor endeudado, patria de un sistema constitucional autoritario administrado con entusiasmo por la Concertación. Una nación que también olvidó su historia violenta reciente: “En la matriz de una dictadura terrorista devenida dictadura constitucional se formó el Chile actual, obsesionado por el olvido de esos orígenes”. En su prólogo a la tercera edición (2002) de un libro que aún marca de su sello la sociología nacional, Moulian añade que:

[Chile] sigue siendo una sociedad donde prima el modelo socioeconómico de la “economía libre”, cuyos lineamientos generales fueron definidos durante la dictadura y donde, como es natural, sobreviven sus plagas asociadas. Ellas son: a) una democracia de baja intensidad invadida por la ideología tecnocrática, cuyo formalismo genera una fuerte indiferencia hacia la política institucional y un alto desprestigio de los profesionales de la actividad y b) una cultura en la cual priman los componentes individualistas asociativos y expresivos (Moulian, 2000: 10).

En textos ulteriores, el sociólogo ha buscado pormenorizar de qué manera la democracia chilena se basa en una política analfabeta y la construcción de una seudopolítica, donde parecen existir conflictos y debates polarizados entre partidos que en realidad representan sólo algunas variantes de la

misma sociedad del espectáculo, una “entretención” entre el mismo duopolio en el poder: la Concertación de un lado y, del otro, el bloque de la derecha política (la “Alianza por Chile”), donde encontramos a Renovación Nacional (RN, liberal conservadora) y a la Unión Demócrata Independiente (UDI, gremialista pinochetista).¹

La seudopolítica busca generar la imagen de la hiperpolitización, una de cuyas expresiones sintomáticas es una preocupación obsesiva por los personajes políticos. La prensa, la televisión y los radios multiplican las noticias políticas, pero sus temas son el chismorreo (generalmente morboso, pero en ocasiones solo frívolo) sobre las vidas privadas de los hombres públicos y los trascendidos sobre los casos de corrupción, tratados de manera desigual y sesgada. La seudopolítica busca el “asesinato de imagen” de la política, para convertirla en impotente (Moulian, 2004: 13).

Sin lugar a dudas, las publicaciones de Moulian y su gran difusión representaron una primera ruptura necesaria con la *doxa* existente sobre la transición democrática, aunque es menester resaltar que sus textos están todavía marcados por cierta denuncia moral de la desigualdad social y alguna añoranza nostálgica de los “buenos tiempos” de la política popular anterior al golpe de Estado, sin tocar detalladamente y de frente la problemática del trabajo y de su subsunción real como condición del proyecto de clase neoliberal.

Hoy, este modo de acumulación capitalista lleva casi 40 años de funcionamiento y perfeccionamiento, sin discontinuidad, con sus consiguientes transformaciones internas, construcción valórica y múltiples efectos contrarios. De hecho, Chile se encuentra en la situación original de ser la nación que presenta a la vez una de las experimentaciones neoliberales más extremas y de mayor duración, tanto en sus figuras cívico-militar (1975-1989) como neoliberal democrática (1990-2015). De allí, el interés de estudiar la literatura que se ha generado en los últimos años desde las ciencias sociales para intentar analizar el carácter “maduro”, “avanzado” o “triumfante” de este fenómeno, desde diferentes ópticas y con nuevos aportes. Podemos decir que tenemos un

¹ La UDI es, hasta la actualidad (2015), la principal fuerza parlamentaria del país, prueba de la gran resistencia y aprovechamiento de los “hijos de Pinochet” del sistema electoral binominal heredado del régimen militar (y finalmente abrogado por el segundo gobierno de Michele Bachelet).

corpus de estudios que permite trazar algunas lecturas críticas argumentadas sobre esta realidad. Desgraciadamente, existen pocos debates reales entre disciplinas, intercambios entre autores y, en la mayoría de los casos, brillan por su ausencia las referencias mutuas entre los escritos que trabajan esta problemática, por lo cual nos pareció interesante presentar los puntos de convergencia y complementariedad entre algunos textos. Si bien los investigadores que citaremos a continuación y en los próximos párrafos han aportado a una reflexión general, quedan por desarrollar más estudios a partir de análisis de casos y temáticas específicas. Un trabajo que afortunadamente ya está en curso, en particular desde una generación de investigadores, más apegados a encuestas de terreno y desarrollo de temáticas más acotadas, como lo ha demostrado —entre otros— el coloquio internacional organizado en Francia, en septiembre de 2013, sobre “gobernar y resistir en una sociedad neoliberal”.²

Primer aporte esencial, aunque ¿sorprendentemente? ignorado por los académicos más “connotados”: las propuestas del economista marxista Rafael Agacino que defiende la noción de “neoliberalismo maduro” o de “contrarrevolución madura”, recalcando la conformación en América Latina de procesos neoliberales tempranos, intermedios y tardíos. En el caso chileno, cuando en 1990 se abre la etapa de *la administración civil del neoliberalismo*, el modelo tiene ya 15 años de operatividad, a diferencia de las políticas de ajustes más tardías efectuadas en democracia, como en el Perú de Fujimori y de Toledo, en el Ecuador de Bucarán y Gutiérrez, en la Bolivia de Sánchez de Lozada y en la Argentina de Menem y De la Rúa. Según Agacino, hay que considerar varios elementos para abordar la originalidad del caso chileno, pero también subrayar que acumula hoy varios de los signos del agotamiento de un sistema ya “maduro”:

La potencia del modelo chileno y su excepcionalidad, en gran medida sólo puede explicarse a partir de un hecho político clave: la emergencia de una franja de las clases dominantes con visión estratégica que, frente a la crisis de los 80, logró anteponer a los intereses fraccionales el interés del “capital en general”. Se trata del talento de un

² Para un acercamiento pluridisciplinar y desde diferentes enfoques sobre este tema, consultar la página y actas en línea del Coloquio internacional que coordinamos con un equipo de jóvenes politólogos de la Universidad de Grenoble (Francia): “Chile actual. Gobernar y resistir en una sociedad neoliberal”, en <<http://chili-neoliberal.sciencesconf.org>>.

bloque dominante que logra simultáneamente construir hegemonía y las bases materiales necesarias cuyo éxito, finalmente, se medirá por la reconversión al neoliberalismo de la propia tecnocracia socialdemócrata. En efecto, será una suerte de “neoliberalismo rosa” el que retomará la posta y extenderá el proyecto neoliberal desde los 90 hasta nuestros días. Sin embargo, desde otra perspectiva, la contrarrevolución neoliberal chilena, la más exitosa en América Latina, entrando ya a la cuarta década, permite anticipar los problemas estructurales que resultan de su aplicación completa. En Chile, la tremenda desigualdad del ingreso, la concentración de la riqueza, la sobre explotación de la fuerza de trabajo y de los recursos naturales, la precariedad del empleo y el desempleo estructural resultan del propio crecimiento y acumulación capitalistas y no del estancamiento o el bajo crecimiento. En realidad, estas características estructurales, incluida una reducción de la pobreza cuya perdurabilidad nadie asegura por la precariedad del empleo, han sido las condiciones para el logro del crecimiento acelerado. En el largo plazo y más allá de los ciclos cortos, la contrarrevolución neoliberal chilena muestra cómo la racionalidad neoliberal avanza agotando y destruyendo sus propias fuentes de crecimiento: el trabajo y los recursos naturales (Agacino, 2006).

La noción de “madurez” no debe considerarse aquí en clave “biologista” o como producto de una evolución lineal desde el nacimiento hasta la vejez del sistema, sino más bien enfatizando en su carácter dual en el seno mismo de la onda recesiva del capitalismo tardío (descifrada por Mandel): por una parte, un modelo que acumuló solidez, parsimonia y experiencia; pero también por otra parte, cada vez menos ágil, que ha perdido flexibilidad hegemónica, credibilidad y capacidad de adaptación con los años (Urrutia, 2002). En la última década, la extraordinaria estabilidad del régimen político y socioeconómico chileno parece parcialmente debilitado, dominado por un poder real que opera cada vez más por fuera del Estado neoliberal y sus instituciones, para desplazarse esencialmente hacia poderes fácticos, practicados por grandes corporaciones, *think tanks* empresariales o social-liberales, y un reducido puñado de medios de comunicación. En 2011-2013:

todas las reformas estructurales –las pensiones, el trabajo, la salud, la educación, el sistema de medios, la gestión monetaria, la canasta productiva exportable, etc.–, han dado ya sus “frutos” y ahora comienzan

a desplegarse sus contradicciones. En estas condiciones, la emergencia de la cuestión social cambió el panorama y mostró la incompletitud de la utopía neoliberal del “orden del mercado”. La institución mercado se revela insuficiente para procesar todos los conflictos y transformarlos en meras contiendas entre partes privadas (Agacino, 2013a: 40-44).

Este diagnóstico entra en parte (pero en parte solamente) en resonancia con el trabajo de Carlos Ruiz Encina. En su última publicación y en otro libro con el sociólogo Giorgio Boccardo (Ruiz, 2013; Boccardo, Ruiz, 2014), sintetiza varios estudios colectivos desarrollados en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y en la Cepal, tanto sobre estratificación social y desigualdades, como sobre movilizaciones colectivas.³ En su estudio de 2013, propone así un “análisis de clase de la revuelta estudiantil” desvelando las entrañas de lo que denomina “neoliberalismo avanzado”. Utilizando el trabajo sobre las privatizaciones de Graciela Moguillansky (Moguillansky, 2001) y de Guillermo Campero sobre los grupos de presión (Campero, 2003), Ruiz y Boccardo insisten en la importancia de la conformación de un empresariado cohesionado y bloque dominante para explicar la estabilidad del modelo chileno. Aprovechando la carencia de oposición social y política en dictadura, la clase empresarial (a diferencia de las pugnas entre industriales y financieros en otros países de la región), en particular tras la crisis de 1982-1983, pasa de la acción defensiva a la acción en bloque. Una clase dominante que lidera el proyecto cívico-militar que le otorga importantísimos beneficios en un contexto de fuerte crecimiento primoexportador y de apertura de nuevos espacios para el capital: salud, fondo de pensiones, mercado de la educación, sector minero y primario, etc. Con la transición, los patrones sólo tendrán que aproximar su posición hacia la dirigencia de la Concertación, dejando atrás una relación orgánica casi exclusiva con los partidos de derecha y, en el otro sentido, los *technopols*, expertos y burócratas del social-liberalismo concertacionista integran cada vez más, al calor de estos años de gestión estatal, los consejos de administración, centros de estudio y fundaciones de las grandes empresas como también las redes de sociabilidades de las elites económicas, universitarias y

³ Ver por ejemplo los sucesivos números de *Análisis del Año. Política, Sociedad y Economía* de la Facso de la Universidad de Chile o las *Series de la Cepal* sobre “Estratificación y movilidad social en Chile”.

mediáticas: un fenómeno ya bien estudiado a nivel continental por Dezalay y Bryant (2002).

Empero, sería erróneo pensar que el empresariado, como el conjunto de la fisonomía de las clases sociales en contexto de neoliberalismo avanzado, no sufrió drásticas evoluciones en este lapso. En este sentido, el trabajo de Tomás Undurraga devela de manera más completa cómo la transformación del modelo de acumulación y de sus “circuitos culturales” impactaron fuertemente la formación de una nueva burguesía local-global, donde predominan progresivamente grandes *holdings* comerciales-financieros, configurados a partir de los ciclos de privatizaciones, de alianzas externas con los centros del sistema-mundo capitalista y nuevas interacciones entre academia y empresas (Undurraga, 2014). Estos grupos se desarrollaron de manera importante en los años 2000, con las multiplicación de los tratados de libre-comercio (se firma el TLC con EEUU en 2003). La hiperfinanciarización de la nueva economía abierta chilena terminó por destruir la industria local y provocar un derrumbe del pequeño y mediano empresariado productivo, que casi desaparece o es marginado a un estatuto precario de microempresas (induciendo un desempleo estructural), al mismo tiempo que algunas fracciones de las Pymes se adaptan, transformándose en meros prestatarios de servicios de los grandes grupos. La aparente paradoja es que son esas pequeñas y medianas unidades económicas las que proveen más del 80% de los empleos nacionales. Los sectores tradicionales dominantes del empresariado criollo, gestores del golpe de 1973, si bien terminaron como los grandes beneficiarios del nuevo modelo como clase, no siempre supieron manejarse dentro del huracán neoliberal y de esta “revolución del empresariado” (Montero, 1997). Pocos fueron los que pudieron realmente hegemonizar este rápido proceso de apertura-concentración-transnacionalización del capital. Estos vencedores eligieron también volcarse a la participación política directa para mantener sus privilegios y dominación de clase gracias a diversos mecanismos institucionales, como bien lo subraya la investigación del historiador Rolando Álvarez:

Durante el periodo 1990-2000, el gran empresariado, a través de diversas formas, se convirtió en el principal baluarte político que defendió el legado del régimen militar, tomando en cuenta las divisiones que debilitaron a la derecha. Pero, de acuerdo a nuestra hipótesis, esto no

lo hizo desde lo que se denominó como un “circuito extrainstitucional” de poder (o “poderes fácticos”) o sólo desde una estrategia basada en la búsqueda de consensos con el gobierno, sino que incorporándose propiamente tal al sistema de decisiones del país (Álvarez, 2015: 55).

Hoy la economía chilena está controlada por un puñado de muy pocas familias y grupos (como los Matte, Lucksic, Paulman, Angelini, Claro) muy cohesionados en el plano ideológico y cultural (a diferencia de las burguesías argentinas) y con fuerte influencia en la agenda pública. Conforman verdaderos imperios económicos regionales,⁴ de carácter transversal, presentes en los principales sectores comerciales, megaextractivistas, de servicios y exportadores, como bien lo han mostrado los estudios del economista Hugo Fazio (Fazio, 2005; Fazio y Parada, 2010). Asistimos a una clara *oligopolización capitalista* que poco tiene que ver con la utopía neoliberal del *laisser-faire* y de “la mano invisible” en un supuesto contexto de mercado de iguales oportunidades y libre competencia. Incluso un influyente economista liberal como Ricardo Hausmann (director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard) alerta sobre la existencia de una “cultura empresarial extremadamente cerrada”: los empresarios chilenos, enumera, “vienen de los mismos 3 o 4 colegios, de dos universidades, de los mismos apellidos” y tendrían dificultades para relacionarse con los que no pertenecen a su mundo⁵...

De manera más general, los diferentes estudios de la Universidad de Chile que se realizaron sobre estratificación social tanto desde el Centro de Investigación de la Estructura Social (CIES) como a través del Proyecto Desigualdades⁶ (dirigido por Emmanuelle Barozet) muestran, en base a datos estadísticos y encuestas empíricas, los desplazamientos que se generaron en la conformación social desde los años 80, de arriba a abajo de la pirá-

⁴ Tres familias (Angelini, Matte y Lucksic –27° fortuna mundial–) controlan la mitad de los activos cotizados en la Bolsa de Valores de Santiago, y su patrimonio representaba (2011) el 12,5% del PIB, contra el 9% en 2004. A eso hay que agregar el clan Horst Paulman (grupo Cencosud –154° fortuna mundial) y sus supermercados presentes en todo el continente. Estas familias disponen de representantes directos en el Parlamento, así como en la dirección de los principales medios, audiovisuales como escritos. Sobre todo desde que el presidente Piñera cerró la versión papel y vendió la versión digital del diario *La Nación* (del cual el Estado era accionista mayoritario), por juzgarlo demasiado crítico.

⁵ Cf. entrevista en Ciper (Santiago) 20 de octubre de 2015. En: <<http://ciperchile.cl/2015/10/20/academico-de-harvard-desmenuza-la-cultura-empresarial-chilena-que-frena-el-crecimiento/>>.

⁶ Ver: <www.desigualdades.cl>.

medida de las clases sociales. Las cifras sobre empleo muestran las evoluciones numéricas *relativas*, siguientes (ver Cuadro 1 y Gráfico 1): en la estructura de una Población Económicamente Activa (PEA) que supera los 8 millones 450 mil personas (2012), aparece una baja continua de la presencia de empleos agrícolas y grupos sociales en el mundo rural (con sólo 10,6% de la PEA en 2009), una disminución relativa de la clase obrera minera (0,5% de la PEA), se mantiene –con una leve reducción– el peso de los obreros industriales y de la construcción (10,1%), y se nota un notable crecimiento de la clase obrera de comercio y servicios (15,9%), como de los asalariados “medios” (29,7%).

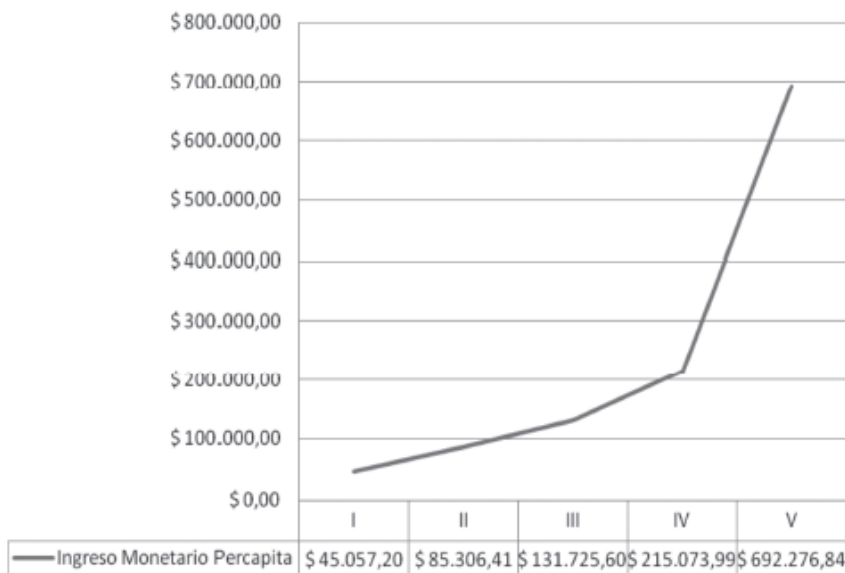
Cuadro 1 | Estratificación social y tercerización del trabajo en la sociedad neoliberal

Significación numérica de categorías sociales, 1971-2009
(En porcentajes de la PEA nacional)

Categorías sociales y grandes grupos	Periodo (años)						
	1980	1986	1990	1995	2000	2005	2009
Empresarios agrícolas	0,4	0,9	0,9	0,6	0,5	0,4	0,4
Asalariados agrícolas	6,5	9,8	9,5	7,7	7,2	6,6	5,9
Campesinado y colonos pobres	7,5	8,1	7,9	6,6	5,6	5,3	4,2
Resto PEA agrícola no clasificada en otro grupo	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Sub total categorías sociales en agricultura, silvicultura, caza y pesca	14,6	18,9	18,4	15,0	13,4	12,5	10,6
Empresarios no agrícolas	1,4	2,2	3,2	2,6	2,4	2,4	2,2
Sectores medios asalariados	20,3	21,0	23,6	26,4	26,5	28,9	29,7
Sectores medios independientes	9,2	5,7	6,2	8,1	8,0	7,9	7,4
Artesanado tradicional	5,2	4,8	5,1	5,3	5,3	4,9	4,9
Clase obrera minera	1,3	0,7	1,0	0,8	0,5	0,4	0,5
Clase obrera industrial y de la construcción	11,1	10,0	12,1	13,2	10,4	10,9	10,1
Clase obrera del comercio y los servicios	12,0	11,9	12,7	13,1	14,6	14,7	15,9
Grupos marginales	10,4	11,9	12,0	10,8	10,6	10,4	10,1
PEM & POJH	3,8	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cesantes y BTPV	10,4	8,8	5,7	4,7	8,3	6,9	8,6
Resto	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Sub total categorías sociales fuera de agricultura, silvicultura, caza y pesca	85,4	81,1	81,6	85,0	86,6	87,5	89,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Elaboración de Carlos Ruiz, en base a datos del Instituto de Estadísticas Nacionales (Ruiz, 2013: 40).

Gráfico 1 | Categorías sociales de servicio *versus* el resto, 1980-2009
(en porcentaje de la PEA nacional)



Fuente: Ruiz y Boccardo, 2010 (citado en: Ruiz, 2013: 44).

Más allá de las diferencias en las cifras, a veces importantes, que podemos constatar en las distintas investigaciones (Espinoza, Barozet, Méndez, 2013; Ruiz, Boccardo, 2011; Aguiar, 2010), el rápido crecimiento de los servicios, en la administración privada y el comercio es una de las características de la estructura ocupacional chilena, a tal punto que –siguiendo el esquema de Goldthorpe, Erikson y Portocarrero (Erikson, Goldthorpe 1992)– algunos autores proponen hablar de la “*formación de una clase de servicio*”.⁷ Es indudable que se puede discutir la performatividad de tal concepto y su denominación como “clase”, pero merece destacar que este proceso de tercerización de fracciones del asalariado, muy heterogéneo en su composición, está en

⁷ “La definición de la clase de servicio se centra en ciertos elementos. Asume que, aunque estos grupos no participan de la propiedad de los medios de producción, se diferencian de la clase obrera porque realizan un trabajo no productivo” (Ruiz, 2013: 80).

el centro de la fisonomía del neoliberalismo maduro. Para Carlos Ruiz, esta “clase de servicio” y las “nuevas clases medias” son un elemento central:

El sostenido proceso de mesocratización se erige como una de las principales marcas de la sociedad chilena actual, al punto que los expandidos niveles de consumo y calificación profesional y técnica que cobija la distinguen en el panorama regional (Ruiz, 2013: 9-10).

El sociólogo le dedica, con Giorgio Boccardo, una gran atención a estos segmentos intermedios, efectivamente importantes, “hijos del neoliberalismo”, en gran parte urbanos, e integrados a estratos superiores de los asalariados del sector privado a través del mercado de la educación y del acceso a diplomas (Ruiz, Boccardo, 2014: 111-142). Los dos autores, tanto en sus escritos como en las publicaciones de la fundación Nodo XXI⁸ que dirigen, ubican ahí cierto potencial político conflictivo marcado por la “crisis de expectativas” de estos grupos y por la frustración frente a promesas de movilidad social ascendente de la última década: esta clase media viviría “elevados niveles de flexibilidad que son distintivos del sector privado” y “niveles de malestar derivados de la privatización de servicios sociales y las trabas al ascenso social que su alto costo supone” (Ruiz, Boccardo 2014, 113). Un “malestar mesocrático” que habría despuntado con las grandes movilizaciones estudiantiles del 2011 (volveremos sobre este tema), aunque subrayan los dos sociólogos que, en la mayoría de los casos, estos sectores serían más bien individualistas, conservadores del orden social neoliberal, con “un interés sustancial en el *status quo*” y “poca evidencia estructural a favor de una posible alianza con la clase obrera” (Ruiz, 2013: 78).

Creemos que hay en estos aspectos mucho que debatir, pues dice relación con las necesarias e indispensables alianzas estratégicas entre el campo popular y grupos medios –en particular los grupos medios bajos precarizados– en torno a las fracciones organizadas de las y los trabajadores (un potencial explosivo visto además como poco probable por Ruiz y Boccardo). También conviene discutir esta irrupción del “malestar” esencialmente desde los sectores medios, algo que haremos en los siguientes párrafos. Pero es necesario, primero, relativizar fuertemente el mentado lema de la sociedad chilena como sociedad “clasemediera”, para evitar correr el riesgo de

⁸ Consultar <www.nodoxi.cl>.

sobrerrepresentar así el espacio cuantitativo, objetivo y finalmente político de la “mesocratización” (Barozet, Espinoza, 2009):

Con sólo un tercio de la población ocupada en actividades de servicio, la sociedad chilena se encuentra lejos de una “economía moderna de servicio”. Más aún, el grupo de trabajadores manuales, que representa otro tercio de la estructura socio-ocupacional chilena está compuesto mayoritariamente por trabajadores manuales sin calificación (cerca de 20%). El contraste entre los trabajadores en actividades de servicio y los trabajadores manuales muestra el alto contraste en las ocupaciones no agrícolas . [...] Finalmente, las clases populares, compuestas por trabajadores manuales calificados y sin calificación, pequeños propietarios y trabajadores agrícolas, comprenden 47% de la población. Esta pirámide social se asemeja a la de otros países de la región, en los cuales los sectores populares representan gran parte de la población, con una clase media exigua y una elite aún más reducida (Espinoza, Barozet, Méndez, 2013).

De esta manera, la estructura social del “neoliberalismo maduro” permite detectar la formación de nuevas configuraciones de clase; y por ende de nuevos agentes, como también la fuerte presencia de las clases populares que sustentan con su trabajo el edificio neoliberal. Este proceso está articulado con la extensión del asalariado, incluyendo a grupos intermedios urbanos diplomados pero también a muchos jóvenes a menudo precarizados y desafiados, que configuran –como en otros países de la región– un “nuevo proletariado en el siglo XXI” (Therborn, 2012), más que directamente una ilusoria sociedad “posindustrial”⁹ o sociedad de clase media “emergente”... De

⁹ Ernest Mandel insiste en el hecho que esta extensión de los servicios, pero en condiciones de fuerte estandarización y control jerárquico (en supermercados, bancos, tiendas y oficinas diversas) sería incluso una característica de esta fase del capitalismo: “Lejos de representar una ‘sociedad posindustrial’, el capitalismo tardío constituye la industrialización universal generalizada por primera vez en la historia. La mecanización, la estandarización, la superespecialización y la parcelación del trabajo, que en el pasado determinó sólo el dominio de la producción de mercancías en la industria propiamente dicha, penetra ahora en todos los sectores de la vida social. Es una característica del capitalismo tardío que la agricultura se esté industrializando paso a paso tanto como la industria, la esfera de circulación tanto como la esfera de la producción, y la recreación tanto como la organización del trabajo. La industrialización de la esfera de reproducción constituye la cúspide de este desarrollo” (Mandel, 1979: 378).

hecho, es lo que demuestran los estudios estadísticos del sociólogo Pablo Pérez que también van en sentido contrario a lo sugerido por Ruiz y Boccardo. Pérez recuerda que, desde una perspectiva marxista contemporánea, se entiende el concepto de “clase media” como el conjunto de asalariados que se diferencian de las posiciones de la clase trabajadora por calificaciones de alto nivel (por ejemplo, profesionales y expertos) y/o cargos de autoridad dentro de la jerarquía de las empresas (por ejemplo, supervisores y gerentes). Con esta definición más precisa, los datos oficiales demuestran que —al contrario de la idea de la creciente mesocratización—, entre 2001 y 2010, la clase media *disminuyó* en Chile, pasando de 23,2% a 16,4%, mientras que los profesionales “expertos”, muchas veces resaltados como el parangón de la “nueva clase media chilena”, no representan más del 7% de la estructura de clases (Pérez, 2015a).

Por otra parte, comprender la irrupción de los diversos actores movilizadas en años recientes es también entender las dinámicas en curso tanto en términos de movilidad, nuevas subjetividades o de “economía moral” y *politicidad*, más allá de su estricta ubicación en la estructura social. Como lo han enfatizado los trabajos de Erik Olin Wright es indispensable tener un análisis *combinado* de las clases sociales, integrando una mirada sobre estratificación social, pero sin opacar el hecho que, en el sistema capitalista, las clases se construyen como relaciones sociales de explotación y dominación, es decir como dinámica de conflicto (Olin Wright, 2009). El caso chileno lo evidencia dramáticamente. La pérdida de poder y de referentes sociopolíticos por parte de las clases populares, la transformación de los imaginarios colectivos o de asociatividad clasista en el seno de los “de abajo” después de 1973, nos dan claves para entender la precariedad de la situación de sujetos históricos como el movimiento obrero y sindical, y también el por qué del surgimiento del movimiento por la educación del 2011. La sociogénesis neoliberal avanzada es *ante todo* fruto directo de las luchas de clases y de un rumbo político que ha experimentado el país desde el golpe de Estado hasta la fecha. La dictadura cívico-militar no fue sólo un proyecto económico, se preocupó de destruir las formas más visibles del protagonismo histórico del movimiento popular: los partidos de izquierda, los sindicatos, las organizaciones armadas. Pero nunca pudo impedir el resurgir de las grandes protestas de los años 80, las múltiples huelgas obreras y jornadas de luchas callejeras en poblaciones o las diferentes estrategias de resistencia

político-militar (Salazar, 2006). Todas estas formas de violencia y movilización popular afloraron y crecieron hasta la transición pactada. No obstante:

Lo que nunca pudo lograr la dictadura militar, sí lo hizo la Concertación (la “clase política civil”) al poder operar en la subjetividad de aquellos que formaron parte de un movimiento de ciudadanos de carne y hueso que estuvo dispuesto a dar la vida no sólo por la salida del dictador, sino que también por la construcción de un orden radicalmente distinto al que, finalmente, triunfó. Esta fue tal vez la derrota más dura y paradójicamente la menos sangrienta que ha vivido el movimiento popular chileno. Este perdió vigor y su proyecto que aún estaba por hacerse se vio truncado. Sólo así puede entenderse la actual “estabilidad” y “legitimidad” del Estado Neoliberal, una estabilidad de derrotados que pasivamente acatan el orden impuesto. Sin embargo, el mundo popular parece haber sufrido transmutaciones que hoy lo llevan a distanciarse de la clase política civil, la misma que los instrumentalizó es ahora cuestionada, el descontento con el orden establecido y las protestas han vuelto (no con el grado de intensidad y masividad de los años 80). Con ello quizás la historicidad (esa capacidad de construir la historia) esté de regreso (Carrillo Ramos, 2009).

¿Adiós a los trabajadores? Flexibilización, precarización y conciencia de clase

Si uno analiza críticamente los estudios sobre el malestar ciudadano y la teoría del posible “derrumbe del modelo” (propuesta analítica del sociólogo Alberto Mayol que exponemos más abajo), la hipótesis de las posibles “correcciones progresistas” del neoliberalismo por parte de los gobiernos civiles (Garretón) o incluso varios textos de Tomás Moulian, es menester señalar un olvido central, o más bien un *silencio aturdidor*, que le quita fuerza a gran parte de la argumentación, estemos o no de acuerdo con sus postulados iniciales: el estudio de las relaciones capital/trabajo y de las transformaciones laborales como también sindicales. Al contrario, situar la constitución del capitalismo neoliberal ante todo como régimen de acumulación flexible y proyecto de clase (Harvey, 2013) y como fase del capitalismo tardío (Mandel, 1979), nos permite develar que actualmente la situación del trabajo en las relaciones de producción del neoliberalismo maduro deben estar en el centro tanto de la clave explicativa de las dificultades del movimiento obrero-popular para “derrumbar” al modelo, como en el momento de explicar los niveles de estabilidad relativa que logró forjar el empresariado desde el “giro” de 1975. El eje del modelo es su capacidad de explotación del trabajo enajenado. El joven Marx insistió en este proceso de apropiación de la plusvalía y del producto del trabajo como carácter fundamental del capitalismo:

El trabajo no sólo produce mercancías; se produce también a sí mismo y al obrero como *mercancía*, y justamente en la proporción en que produce mercancías en general. Este hecho, por lo demás, no expresa sino esto: el objeto que el trabajo produce, su producto, se enfrenta a él como un *ser extraño*, como un *poder independiente* del productor. El producto del trabajo es el trabajo que se ha fijado en un objeto, que se ha hecho cosa; el producto es la objetivación del trabajo. La realización del trabajo es su objetivación. Esta realización del trabajo aparece en el estadio de la Economía Política como *desrealización* del trabajador, la objetivación como *pérdida* del *objeto* y servidumbre a él, la apropiación como *extrañamiento*, como enajenación (Marx, 1844).

Esta enajenación del asalariado parece cada vez más “universal” bajo el régimen del capitalismo neoliberal, y específicamente en el caso chileno. Siguiendo las estadísticas oficiales del INE, Santiago Aguiar recuerda que a pesar del fenómeno masivo del “cuenta-propismo” y del “trabajador-emprendedor” independiente (más de 23% del total de la PEA), globalmente las y los asalariados¹ nunca fueron tan numerosos hoy en Chile, superando el 66% del mercado laboral (cifras 2006), e incluso representan el 74,7% de la población urbana chilena (cifra próxima a la de Argentina según Undurraga, 2014: 217). Además, mirando la composición interna de todos los activos, puede verse que predomina lo que clásicamente se llama “obreros” (asalariados que realizan trabajos manuales y repetitivos), por sobre las capas de trabajadores que realizan un trabajo de oficina o gerencial (ver cifras en Cuadro 2, en Anexo 1 y en Aguiar, 2010). Eso sí existe efectivamente una clase asalariada globalmente muy diferenciada y flexibilizada, con condiciones de organicidad todavía extremadamente frágiles, lejos de la fisonomía del movimiento obrero clasista de los años 70:

la mayor flexibilidad y la enorme rotación laboral, acarrearán una variedad de modalidades de trabajo y producción que, pese a la caída de los grados de informalidad, trastoca la vieja fisonomía de las clases trabajadoras. La emergencia de nuevas fracciones asalariadas—ligadas a diversos modos de encadenamiento productivo de las pequeñas y medianas empresas con aquellas propias del gran capital—acompañan en la última década una mayor conflictividad propia de nuevos actores asociados al nuevo panorama de la condición asalariada, los cuales guardan escasa relación con las viejas formas sindicales, reflejando también nuevos procesos de formación de clases. Ambas transformaciones en las viejas condiciones de clase, en este caso especialmente cifradas sobre aquellas posiciones de mayor centralidad política, social y cultural en el curso histórico nacional-popular, plantean nuevos dilemas de comprensión, no sólo desde el punto de vista estructural, sino también en términos de sus modalidades de constitución política y cultural (Ruiz, 2013: 10-11).

¹ Los asalariados entendidos aquí como aquellos que tienen sólo su fuerza de trabajo (física y/o intelectual) para subsistir y deben venderla a aquellos que son propietarios o controlan y administran los medios de producción.

Cuadro 2 | Estructura del empleo en Chile (2009)

	Cantidad	%
Empleadores	334.640	5%
Cuenta propia	1.439.680	20%
Asalariados	4.859.030	69%
Personal de servicio	340.410	5%
Familiar no remunerado del hogar	116.580	2%
Total	7.090.340	100%

Fuente: Elaboración de Santiago Aguiar (agregando columna de %), con base en datos del Banco Central y del INE (Aguiar, 2010)

Pensamos también que es necesario abrir más esta reflexión y que precisamente los escasos estudios universitarios sobre las temáticas de los conflictos de clases, las relaciones laborales y el movimiento sindical en tiempos neoliberales pesan muchísimo cuando se trata de entender mejor las sociedades contemporáneas. No obstante, constatar el surgir de nuevos agentes sociales y las dificultades “de las viejas modalidades de identidad por el oficio”, no pueden conducir mecánicamente a insinuar la idea de una “pérdida de la centralidad” de la clase obrera-asalariada como actor de toda transformación política poscapitalista (sin por ello caer en el “obrerismo”).

Reconociendo que el mundo del trabajo se ha vuelto mucho más heterogéneo, complejo y fragmentado, estas nuevas características que está asumiendo el asalariado en el régimen neoliberal no apuntan a la extinción de la clase obrera, sino más bien a su extensión en diversas esferas (como los servicios), aunque en condiciones laborales, de conciencia de clase y de organicidad precarias. Así, más que comprender el “fin del proletariado”, al igual que varios autores,² pensamos que el desafío es desentrañar el complejo proceso de formación de estas nuevas relaciones de producción, pero no sólo constatando estudiosamente sus cambios estructurales o el fin de las “viejas clases” del periodo nacional-popular (como lo hacen Ruiz y Boccardo, 2014: 143-173). En buena medida, dichas conclusiones solo pueden inferirse cruzando esta lectura con otras publicaciones de los autores, verificando que sus

² Ver la sección “Debates sobre trabajos” de la Revista argentina *Herramienta*: <www.herramienta.com.ar/content/debates-sobre-trabajo-trabajo-abstracto>.

tesis estratégicas se alejan no sólo de las ortodoxias del “marxismo vulgar” (en buena hora), sino fundamentalmente del materialismo histórico y de su filosofía de la praxis. Compartimos así parte del diagnóstico (la metamorfosis de la clase obrera, la tercerización del asalariado y la fuerte disminución de sus componentes industriales como fenómenos profundos), pero no sus conclusiones estratégicas: pensar las alternativas poscapitalistas obliga a cierto “optimismo de la voluntad” y a ver, bajo la superficie, los sectores de trabajadores en lucha en la última década y sus potenciales alianzas con las amplias franjas de los grupos medios precarizados, y jóvenes diplomados urbanos, puentes que podrían representar una base social sólida para resistencias al neoliberalismo en el siglo XXI, como ya está ocurriendo en otros países latinoamericanos y del mundo (Therborn, 2014). Sin tales presupuestos, el riesgo es apuntar simplemente a nuevos pactos sociales reformistas dentro el sistema institucional, incluso con los grupos dominantes, constatando desde un pesimismo “razonable” la imposibilidad estructural del cambio (casi desaparición del movimiento obrero, individualismo de los sectores intermedios, derrota de las izquierdas), añorando así el periodo anterior al golpe de Estado.

Como lo apunta Ricardo Antunes, con la crisis de la clase obrera tradicional e industrial nació la figura de una *clase-que-vive-del-trabajo*, con altos niveles de *complejización, fragmentación y tercerización*. Los procesos de reestructuración productiva de las últimas décadas han conllevado una dinámica de “flexiprecarización”, acompañada de una fuerte inestabilidad laboral y trabajo informal que se constituyen tanto desde el proceso de producción como en el proceso de trabajo, con sus cambios tecnológicos y diversas innovaciones flexibilizadoras. Por esto mismo, “no se trata de un efecto transitorio o no deseado”, que se podría corregir, sino de ajustes de fondo del capital sobre el trabajo destinados a recomponer las tasas de ganancia y controlar mejor la mano de obra (Aguar, 2009). Estas diferentes modificaciones afectan no sólo la *materialidad* del asalariado, sino que tienen profundas repercusiones en su subjetividad, en su cultura, como también en la relación íntima entre estos niveles y “su *forma de ser*”, modificando “el universo de la conciencia, de la subjetividad de los trabajadores, de sus formas de representación, de las cuales los sindicatos son una expresión” (Antunes, 2003). Pero no por eso se borró el lugar central del trabajo en el capitalismo latinoamericano, ni tampoco el elemento estructurante del conflicto capital/trabajo.

Por ejemplo, en el caso de Argentina, Adrián Piva muestra que más que “fin de la clase obrera”, hay que subrayar su creciente desorganización, lo que ha significado una pérdida de peso social de las acciones de clase dentro del conjunto de las luchas sociales y la fragmentación de las acciones del proletariado: esta dinámica va acompañada de la casi desaparición de la noción de clases sociales de las categorías de análisis académicos. No obstante, desde hace algunos años, la clase obrera argentina supo salir con fuerza del “país invisible” reencontrando el camino de las luchas combativas, e incluso de la autogestión obrera (Piva, 2011). En Chile, la potencia del dominio del capital oligopólico es ahora una experiencia cotidiana para millones de trabajadores. Estudios de la Dirección del Trabajo, en particular de Magdalena Echeverría, demuestran la dimensión de la explosiva precariedad y de los procesos de subcontratación. De hecho, el fin de la dictadura no significó un cambio sustancial en la reglamentación y externalización de actividades económicas. La ley de subcontratación, que finalmente se aprobó en 2007, distingue entre la subcontratación laboral y el suministro de trabajadores por parte de una empresa intermediaria, pero en ambas figuras se trata de relaciones triangulares, en las cuales los trabajadores se encuentran en una situación de fuerte dependencia y vulnerabilidad: el porcentaje de las firmas que hacen uso de la subcontratación en Chile es enorme y se ha movido en los últimos años entre más del 50%, en su punto más alto, y un poco más del 30% (Echeverría, 2010). Según la Encuesta Laboral (Encla) de 2011, 38% de las empresas usan este sistema y la cuarta parte de las empresas que subcontratan encargan trabajos que forman parte de su giro principal.³ Desde el año 2010, 7 de cada 10 empleos creados son tercerizados, un fenómeno que actúa de manera diferenciada por sector, y también desde una perspectiva de género: si 55,7% de los hombres son tercerizados, esta cifra se eleva a 79,6% en el caso de las mujeres (Galdámez, Aedo, 2014).

Por otra parte, según cálculos de la Fundación Sol, en los últimos 20 años, la productividad del trabajo (PIB dividido por horas trabajadas) ha aumentado en un 90%, pero las remuneraciones reales han crecido sólo en un 20%, lo que significa que existe un alto excedente productivo no remunerado (con un 70% que fue ganancia directa del empresariado). Este

³ La Encla es la principal y más completa encuesta sobre condiciones de trabajo y relaciones laborales que se realiza en Chile, la última es de 2011 (Encla, 2011).

contraste creciente —desde 1998— entre productividad y salarios reales muestra concretamente la dimensión de una nueva ofensiva empresarial contra el trabajo, en contexto de neoliberalismo maduro (ver Gráfico 2).

Gráfico 2 | Evolución de los salarios y de la productividad 1990-2009.
Excendente productivo no remunerado



Fuente: Narbona, Páez, 2014.

Esto es tan claro que las remuneraciones de los asalariados, que en promedio se habían elevado un 4,9% anual entre 1990 y 1995, aumentaron sólo en un 1,7% entre 1999 y 2005; mientras tanto el 60% de las familias chilenas se endeudaba. En la actualidad, 50% de los asalariados privados recibe un ingreso menor a 455 dólares por su ocupación principal (encuesta Casen 2011), cuando en 2011, los sueldos de los gerentes generales de las grandes empresas subieron más del 15% real (Narbona, Páez, 2014). No obstante esta situación, diversas encuestas muestran que la clase continúa siendo un aspecto central en la configuración de orientaciones ideológicas antagónicas, lo cual explica el repunte de los conflictos laborales desde el 2006-2007 y podría ser la fuente de importantes conflictos políticos en el futuro y de un rearme del movimiento obrero, “encontrando lo que nunca fue perdido”: la conciencia de clase. Es más, las investigaciones ya citadas de Pablo Pérez refutan la idea según la cual la base del descontento sociopolítico actual estaría situado en los segmentos intermedios y ubica en los trabajadores este sentir que viene y crece “desde abajo” en el Chile de hoy. Según el doctorante de la Universidad de California:

No está claro por qué este malestar tendría que ser definido como de “clase media” y no de “clase trabajadora” o al menos “de clase media y de clase trabajadora”. Esta clase trabajadora no sólo es la mayoritaria, sino que es la que experimenta las condiciones más precarias de empleo. A modo de ejemplo, datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo y Salud de 2010 muestran que mientras el 5% de los profesionales expertos tiene un trabajo de temporada o estacional, dicho porcentaje es de casi 5 veces más (24%) para el caso de los trabajadores no calificados. De modo similar, la encuesta muestra que mientras cerca del 90% de los profesionales cotiza en algún sistema previsional, sólo el 65% de los trabajadores no calificados lo hace (dicho porcentaje es incluso menor, llegando a menos de 15%, para el caso de los trabajadores no calificados que trabajan como autoempleados en el sector informal) (Pérez, 2015a).

Esta condición objetiva es confirmada por el estado subjetivo de los trabajadores. Varias encuestas y un amplio estudio empírico confirman que el tan trillado “malestar” está mucho más presente dentro de las filas de la clase trabajadora calificada y no calificada, que en el seno de los grupos medios altos: las respuestas más críticas a la manera en que se estructura la desigualdad en Chile se concentran de manera notable en la clase trabajadora (especialmente en torno a su segmento no calificado), pero también en los sectores de “cuello blanco” los cuales, a pesar de los tópicos sobre estos trabajadores chilenos, muestran también una marcada conciencia de clase y de su posición subordinada en la estructura productiva.⁴ Sin embargo, como en varios países de la región, es también cierto que el movimiento obrero salió de la dictadura cívico-militar deshecho y si bien los sindicalistas que lograron sobrevivir al terrorismo de Estado recapturaron parcelas en su capacidad de luchar, organizar y negociar a partir de 1990, fue dentro de los estrechos márgenes de la transición pactada. Para el historiador estadounidense Paul Drake:

Desde un punto de vista, Pinochet tuvo éxito en su determinación de eliminar cualquier alternativa al capitalismo del mercado y cualquier

⁴ Así, por ejemplo, la inmensa mayoría de los trabajadores calificados y no calificados (alrededor del 75%) afirma que ganan menos o mucho menos de lo que merecen (solo 48% de los gerentes y de 60% de los expertos piensan lo mismo). Para un estudio más profundo de estos datos y encuestas sobre la conformación de la conciencia de clase en régimen neoliberal maduro, consultar Pérez, 2014 y 2015b.

posibilidad de un proyecto socialista de los trabajadores y sus partidarios izquierdistas (Drake, 2003).

El verdadero *pilar* del modelo económico, social y político instaurado desde mitad de los 70 —e incólume en sus aspectos fundamentales hasta hoy— fue lograr mantener niveles extremadamente intensos de explotación del trabajo con una tasa de extracción de plusvalía al alza, en particular desde finales de los 90. Especialmente dañinos en este sentido fueron el Plan Laboral (1979) y el nuevo Código del Trabajo, que consagraron un modelo laboral altamente asimétrico y favorable para el reforzamiento del poder (casi total) del empresariado y del capital por sobre el trabajo. El *Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2014* de la Universidad Diego Portales describe el panorama de los derechos laborales en el país, como “bastante desolador”:

principalmente por la escasa y en algunos casos nula intervención del Estado para los efectos de dar una adecuada protección frente a los actos ejercidos por empleadores tendientes a mermar o anular el derecho de huelga, y por el tratamiento que recibe el ejercicio de este derecho por parte de los medios de comunicación social: resaltando situaciones puntuales de violencia e invisibilizando el conflicto laboral de fondo que está detrás (UDP, 2014).

Citemos en particular: el resquicio legal del “multirut”⁵ (recientemente reformado pero no del todo anulado) que permite impedir una negociación colectiva unitaria de trabajadores incluso al interior de una misma empresa; la exagerada tramitación burocrática que requiere un proceso de huelga y su ilegalidad fuera de un largo proceso de negociación colectiva; el impedimento para negociar sindicalmente aspectos relativos a la organización y dirección del proceso de trabajo; la subcontratación permitida en todas las ramas de la economía; el derecho a reemplazo de los trabajadores en huelga y al *lockout* por parte de los empresarios; el relegamiento de la negociación colectiva a nivel de unidad productiva (y no de rama); la ilegalidad de la negociación colectiva y de la huelga en el sector público o municipal, etc. La gran mayoría de estas medidas prevalecen hasta el día de

⁵ Permite a una empresa única declarar varias razones sociales y así dividir trabajadores o trabar la creación de sindicatos. Supermercado como “Tottus” del grupo Cencosud lograron tener hasta más de 36 razones sociales en Chile (cifras 2014)...

hoy, edificando unos de los códigos laborales más regresivo e hiperregulado del mundo, a pesar de las reformas realizadas en tiempos posautoritarios (Narbona, 2014). La gran reforma laboral anunciada por el gobierno de Bachelet, y denunciada como “reforma sindical” por la derecha y el empresariado, representa algunos tímidos avances esperados por los asalariados, pero sobre todo, está acompañada de no pocas ambigüedades y numerosos retrocesos... Dentro de lo que podrían ser avances destacan la titularidad sindical para negociar colectivamente, la rebaja de 4 a 3 años del máximo de vigencia de los instrumentos colectivos y la propiedad de los beneficios de la negociación, pero globalmente y estructuralmente, esta reforma mantiene el legado del Plan Laboral redactado por José Piñera en 1978. Además, el contenido del proyecto muestra un gobierno obsesionado por conseguir aun más *paz social* y un “contrato social” entre las clases para implementar lo que denomina “colaboración estratégica” que permitiría “a las empresas apoyarse en los sindicatos para poner en práctica una gestión satisfactoria de los recursos humanos”:⁶ es decir en el escenario chileno, darle aun más poder al gran empresariado...

La inmensa debilidad sindical es también validada por la confirmación de la imposibilidad de negociar más allá de la empresa individual, vetando toda perspectiva para las y los asalariados de una articulación en función de ramas de la producción, de la pertenencia a un mismo holding, o a un mismo territorio. También introduce la concepción insólita de “huelga pacífica” o de “servicio mínimo” e incluso de *reemplazo interno* de los trabajadores en huelga, otras maneras de negar el ejercicio del derecho pleno a huelga como es reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT); legitima la prohibición de negociación y huelga en amplios sectores del mundo del trabajo (públicos y fiscales en particular), confirma el exceso de tutela administrativa en los sectores que pueden negociar, introduce la noción de “flexibilidad pactada”, etc.⁷ Además, la nueva ley plantea que la

⁶ Ministerio Secretaría General de la Presidencia 2014 “Mensaje de S.E. La Presidenta de la República con el que se inicia proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales, introduciendo modificaciones al Código del Trabajo” (Santiago) 29 de diciembre.

⁷ Sobre estos aspectos, ver los diferentes análisis publicados por el periódico *El Desconcierto* (Santiago): <<http://eldesconcierto.cl>> o en *Rebelión* (Madrid): <www.rebellion.org>.

empresa mantiene su derecho a *lockout*, es decir, a cerrar en caso de huelga, y por lo tanto a suspender el contrato de trabajo de sus empleados.

En su intervención, a principios de marzo 2015, en la comisión “trabajo” de la Cámara de diputados, el jurista laboralista de la Universidad Diego Portales José Luis Ugarte no dudó en subrayar después de un detallado e informado análisis que, finalmente, el proyecto presentado por el gobierno, en caso que no fuese radicalmente modificado por el Parlamento (lo que finalmente no ocurrió), representaría una “actualización” y “consolidación” del plan laboral de la dictadura, pero en ningún caso un progreso democrático para los trabajadores. Una opinión compartida por varios especialistas del tema y no pocos sindicalistas. El mismo académico escribía algunos meses antes, a propósito del estado del derecho a negociación colectiva en Chile y de la ausencia del derecho a organización por rama:

en la reforma del Gobierno, no hay espacio para el 70% de los trabajadores chilenos que laboran en empresas donde no se pueden formar sindicatos –porque no hay 8 trabajadores–, cuya única esperanza es que sus condiciones de trabajo fueran negociadas en el nivel de rama o sector de producción. Seguiremos siendo, entonces, el país que da vergüenza en materia de derechos colectivos en la propia OCDE: mientras el 60% promedio negocia colectivamente en los países que la integran, en Chile sólo el 8%. La dudas que este proyecto genera son obvias: ¿era esta la reforma laboral que se les había ofrecido a los trabajadores chilenos? ¿Debemos conformarnos con que la sociedad más igualitaria de la Nueva Mayoría no incluye el trabajo? ¿Para este capitalismo sin equilibrios era la mayoría parlamentaria para Bachelet? Algo ya sabemos al menos. En la cocina de las reformas laborales no hay nada dulce para los trabajadores. Solo sabores amargos (Ugarte, 2014).

En este plano también el actual gobierno se inscribe en la continuidad de la clase dominante cívico-empresarial neoliberal y de dos décadas de gobierno de la Concertación:

Las diversas etapas históricas del nuevo régimen de acumulación, tienen un hilo común que es casi indiferente –pero profundo– al discurso político que intenta ser diferenciador de las políticas de gobierno intraconcertacionistas, ya sea por los democratacristianos y socialistas.

Como se analizó fueron no sólo manos amarradas, sino que también impulsores técnicos y normativos de profundización de las desiguales condiciones políticas de las clases subalternas para organizar y decidir sobre su vida material y política (Narbona, Páez, 2014).

Así se puede comprender el rol histórico jugado por el gobierno (en particular por el Partido Socialista) y la gran moderación de la CUT (la multisindical más grande hasta el día de hoy, dirigida entonces también por la Concertación) durante los llamados “Acuerdos marco tripartitos” (1991-1993), con los que se esperaba crear una instancia de diálogo y acuerdos con el empresariado, de modo que los primeros años de la transición transcurrieran casi sin movilizaciones y con un movimiento obrero que operaba esencialmente como fuerza auxiliar del nuevo bloque dominante (Osorio, 2013). Hasta el día de hoy, el movimiento sindical sigue golpeado y atónito, pero –contra vientos y mareas– algunas fracciones de trabajadores y dirigentes buscan los caminos de la reorganización clasista en un contexto sumamente adverso que articula la ofensiva del capital contra el trabajo, las comunidades y la naturaleza.

¿El retorno del movimiento obrero? Recomposiciones sindicales limitadas, luchas estratégicas emblemáticas y saqueo extractivista de los recursos naturales

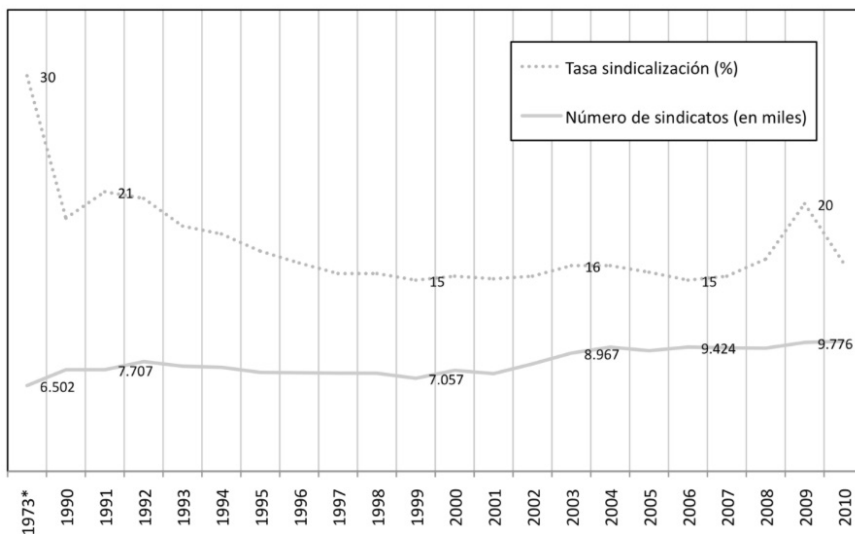
Esta situación reforzó la tendencia a la baja de la sindicalización: usando un modo de cálculo “optimista”, el porcentaje de la fuerza de trabajo sindicalizada (de los asalariados del sector privado), que desde comienzos de los 80 se recuperaba lentamente, cayó desde un pico de 21% en 1992 hasta un magro 15% hacia el año 2000 (ver Gráfico 3), mientras que el porcentaje de los trabajadores involucrados en negociaciones colectivas también descendió en términos relativos de un 7,6% a un 5,9% (Aravena, Núñez, 2011).

El corolario de todo esto fue un alejamiento de crecientes sectores de trabajadores del sindicalismo representado por la CUT, central que intentó a partir del 2003 recuperar legitimidad con una postura más confrontacional, cuando ya no contaba con la fuerza necesaria, ni la representatividad¹ para golpear la mesa. Los sectores con perspectivas de transformaciones más radicales, a su vez, se replegaron en sindicatos y proyectos de multisindicales que no lograron salir del marasmo, excepto en sectores como los trabajadores de la salud municipal y el Colegio de profesores, que lograron importantes conquistas durante el gobierno de Patricio Aylwin (1990–1994). Las críticas a la directiva de la CUT, su burocratización, falta de democracia interna y ausencia de autonomía explican también la aceleración de la atomización sindical, e incluso la creación de pequeñas centrales concurrentes, incluso más “moderadas” como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el surgimiento de la Central Autónoma de Trabajadores (CAT) o la creación de corrientes críticas como la Confederación General de Trabajadores (CGT) (Frías, 2008). No obstante, la división de la “elite sindical” en varios modelos de acción sindical, los 2000 son años de lenta recuperación, mayor pluralismo en las formas de luchas, al mismo tiempo que la heterogeneidad

¹ La CUT representaba sólo 6% de la PEA total en 2013 y ha perdido gran parte de su influencia en el sector privado, contando con una sobrerrepresentación de organizaciones del sector fiscal y municipal, sectores no obstante muy combativos y organizados.

sindical se radicaliza (Gutiérrez, 2013). Así, los inicios del siglo XXI corresponden también a un lento crecimiento, tanto de la tasa de sindicalización, como del número de sindicatos (ver Gráfico 3) aunque con vaivenes y sin nunca volver a alcanzar la cifra de más de 30% de sindicalización de 1973.

Gráfico 3 | Evolución de la tasa de sindicalización (en % de la PEA) y número de sindicatos en Chile – 1990-2010²



(Gutiérrez, 2013).

Al mismo tiempo que otros actores sociales, el movimiento sindical recupera asimismo cierto nivel de incidencia y organización, pero partiendo de un piso bajo: la organización sindical es una institución con cierta presencia sólo en las grandes empresas, segmento en el cual casi la mitad de las unidades

² La tasa de sindicalización presentada aquí corresponde al número total de asalariados sindicalizados del sector privado sobre el total de asalariados ocupados del sector, es decir no incluye a los trabajadores independientes, temporeros y públicos. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tasa actual de sindicalización (conjunto del sector privado) es de un poco más del 11% (12,9% hombres y 7,5% mujeres). Y superaría el 16% si se incluyen tanto los sindicatos del privado como las asociaciones de funcionarios del sector público.

productivas tiene sindicato (48%). En cambio, en las empresas de menor tamaño, que constituyen la mayoría de las unidades empresariales del país, el sindicalismo es extremadamente minoritario. En efecto, sólo el 4,5% de las pequeñas empresas y el 1,6% de las microempresas tienen trabajadores sindicalizados (Encla, 2011).

A pesar de estas difíciles condiciones, a partir del 2006-2007, los conflictos de clases de los trabajadores, aunque todavía con un formato y una dimensión muy acotados, vuelven a emerger claramente. Esta revitalización parcial se traduce en el número de huelgas, tanto legales, como ilegales: en los últimos años, las ilegales superan constantemente a las de tipo legal, y esta brecha tiende a aumentar. Según los estudios de Armstrong y Ávila, en 2009, sólo 22 mil trabajadores (sobre una población activa de 8 millones de personas) participaron en huelgas legales, cuando son más de un millón 500 mil los que se vieron involucrados en conflictos considerados ilegales (Armstrong, Ávila, 2011). Por ejemplo, en el primer trimestre de 2014 se podían detectar 48 huelgas a nivel nacional, de las cuales casi la mitad eran ilegales, involucrando a más de 15.400 asalariados.³ Esas estadísticas confirman varios fenómenos. Primero, una conflictividad laboral creciente, aunque todavía atomizada, en particular a partir del primer mandato del gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010). Segundo, la durable segmentación del movimiento sindical entre dos campos heterogéneos: por una parte, un polo “integrado”, minoritario, compuesto por las fracciones del asalariado con contratos más estables, pertenecientes a sectores tradicionales o estratégicos de la economía, y con mayor posibilidad de negociación colectiva; por otra parte, la gran masa de trabajadores rurales y urbanos altamente precarizados, con salarios muy bajos, en sectores más feminizados, como por ejemplo la gran distribución (*retail*), agricultura o los servicios. Las recientes luchas en los *call-center*, en cadenas de farmacias, en empresas de distribución (conductores y ayudantes de repartición de “Coca-Cola”) o en grandes tiendas y supermercados (creación de la red sindical Cencosud) muestran que, a pesar de la precariedad, las violentas prácticas antisindicales y su menor visibilidad mediática, la organización combativa es posible, incluso en espacios que fueron durante mucho tiempo verdaderos desiertos sindicales. Hay que

³ Cifras compiladas por el Observatorio de Huelgas Laborales (OHL) y sistematizadas por el Centro de Investigación Político Social del Trabajo: <www.cipstra.cl>.

añadir a esto las numerosas luchas de trabajadores fiscales (hospitales, ministerios, municipios, etc.) y las movilizaciones de profesores, con una nueva generación (como el MUD, Movimiento por la Unidad Docente) peleando incluso a nivel interno para recuperar un sindicalismo más democrático e independiente frente a cúpulas burocráticas, como es el caso del Colegio de profesores. Empero, tal vez por sobre todo, son algunos “sectores obreros estratégicos” –tal como los definió John Womack–, con mayor capacidad de bloquear la economía a pesar de su carácter minoritario, los que confirman la ubicación central del trabajo en el neoliberalismo maduro y su gran potencialidad política crítica (Womack, 2007).

Del total de los sectores o ramas de la economía, las que más peso tienen en el total del PIB 2009 son: la minería (representa el 16,4% del PIB⁴), los servicios financieros (representa el 15,9% del PIB) y la industria (representa el 12,7% del PIB). Puntualizar esto, es útil para aproximarnos a identificar las posiciones estratégicas en las que descansan y pueden ser afectadas las relaciones sociales entre el capital y el trabajo. En este sentido, las principales estructuras donde se posiciona estratégicamente la clase obrera en Chile está dada por el peso relativo de cada rama o sector de la economía, por su peso en la economía nacional, más que por el número de trabajadores. Por ejemplo, es claro que la minería, y el cobre en específico, sigue siendo “el sueldo de Chile”, sin embargo, ocupa una proporción insignificante de trabajadores (Aguar, 2010).⁵

En la última década, algunas de estas fracciones de asalariados, intensamente tocados por procesos de subcontratación, hicieron verdaderamente temblar al gran empresariado chileno y transnacional. Lo que los universitarios Núñez y Aravena llamaron el “renacer de la huelga obrera” (Aravena, Núñez, 2009) ha sido simbolizado, entre otros, por la gran movilización de los trabajadores subcontratados de Codelco. La fundación de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), bajo la dirección del entonces militante comunista Cristián Cuevas, la muy combativa huelga del año 2007 de gran parte de los 25 mil subcontratados de Codelco, combinando paralización, cortes de ruta,

⁴ Estos porcentajes varían de acuerdo a varios factores: precio internacional de los productos, las crisis económicas, etc. Por ejemplo, en 2007, la minería representaba el 24,4% del PIB.

⁵ Ver estructura del PIB en Anexo 1.

enfrentamientos con la policía y negociación con el gobierno, permitieron arrancar importantes beneficios para los mineros. En regiones y en el sector privado, los conflictos y huelgas en empresas forestales entre marzo y mayo de 2007 (forestal Arauco del holding Copec) o la “huelga larga” de miles de obreras de empresas salmoneras en 2008, sacudieron al país, aunque no fueron siempre victoriosas pero sí sistemáticamente criminalizadas. Este despertar ha sido acompañado en un segundo tiempo por nuevas resistencias laborales: siendo la más impactante, la larga movilización (2011-2014) de los trabajadores portuarios, con flujos y reflujos, victorias y represiones, que lograron forjar una Unión Portuaria, sin existencia legal pero con un inmenso poder real. Coordinando huelgas “solidarias” en todo el territorio y paralización nacional de los puertos, impusieron una agenda legislativa a los dos gobiernos de turno (el de Piñera y segundo gobierno de Bachelet), el reconocimiento de parte de sus reivindicaciones (con la llamada “ley corta” portuaria de 2014) y, sobre todo, sentaron en la mesa de negociación al empresariado más potente del país, por encima de las empresas intermediarias subcontratistas.⁶

Estos movimientos tienen características distintas a las del sindicalismo tradicional. No los unen ni los oficios ni la empresa a la que pertenecen, sino que precisamente su transitoriedad, lo cual los dispone a actuar colectivamente en torno a intereses más generales que los propios e inmediatos. En estas nuevas organizaciones la afiliación se mantiene con independencia de que los trabajadores estén o no empleados o si trabajan en la misma empresa, faena o proyecto. En el caso de los portuarios la afiliación se conserva a pesar de que los contratos con las empresas de estiba tienen una duración de 8 horas y nada asegura que al día, semana o mes siguientes puedan ser contratados de nuevo. La segunda característica y dificultad que los diferencia del sindicalismo tradicional es que para poder negociar su acción consiste, ahora sí y de hecho, en “levantar el velo” y en “forzar a que la contraparte patronal real se constituya como tal”. Los subcontratados para realmente aspirar a negociar tienen ante todo que preocuparse de obligar a que “el empleador real aparezca, muestre la cara y acepte negociar”. Y hoy en día el verdadero empleador no está necesariamente en la misma rama

⁶ Ver los diferentes reportajes sobre este ciclo de luchas portuarias realizados por el periódico *Resumen* (Concepción): <<http://resumen.cl>>.

de actividad, sino en el holding o el grupo económico y/o la empresa principal mandante (Echeverría, 2010: 20).

Ese surgimiento, desde las entrañas mismas del trabajo flexibilizado-precario, facilitó también la aparición de estrategias sindicales en otros ámbitos, incluyendo al sector público (hospitales, profesores, empleados municipales) intentado utilizar una variada gama de repertorios de luchas, redes de apoyo, *dentro* pero también *fuera* de la institucionalidad laboral. Se puede afirmar que estos conflictos sindicales anunciaron el nuevo ciclo de luchas más amplias que irrumpió fuertemente a partir de 2011, y abre la discusión sobre la constitución de un sindicalismo clasista en condiciones de neoliberalismo maduro. Ahora bien, hay que reconocer que los obstáculos son muy numerosos para la recomposición de un sindicalismo de este tipo. Ya hemos explicado la dimensión de las dificultades y atomización, que enfrentan los asalariados. Se podría citar también la existencia de generaciones enteras de sindicalistas formados al alero de una institucionalidad restrictiva, numerosas formas clientelares en las organizaciones, la débil feminización de las direcciones sindicales⁷ y la presencia de lo que Francisca Gutiérrez denomina “sindicalismo social”, es decir un sindicalismo integrado a la empresa, que rechaza toda forma de movilización del colectivo –huelga, manifestación, etc.– por considerarla una “manifestación política innecesaria” y “prefiere solucionar los problemas de los trabajadores uno a uno, a través de un diálogo directo e informal con la directiva de la empresa” (Gutiérrez, 2013). Dentro del debate actual de los sectores del “sindicalismo político” están, en particular, las interrogantes sobre el liderazgo que tendría que encaminar la CUT: la multisindical es considerada por numerosos dirigentes como una palanca indispensable para la unidad de la clase y una herramienta que habría que reconquistar desde otras bases, pensando en la otrora gloriosa CUT (Central Única de Trabajadores) de los tiempos de Clotario Blest en los años 50 y 60. Al contrario, otras fracciones pregonan la construcción de un “nuevo sindicalismo clasista”, autónomo de la CUT y de sus maniobras partidarias. Este debate no puede ser sólo sindical ya que está sumamente ligado a perspectivas políticas sobre la coyuntura nacional. A pesar de su debilitamiento, la CUT sigue siendo la principal central y permanece bajo la conducción mayoritaria de fuerzas políticas afines al gobierno.

⁷ Sólo 22,3% de los sindicatos tenían mujeres con cargos directivos en 2011 (Encla, 2011).

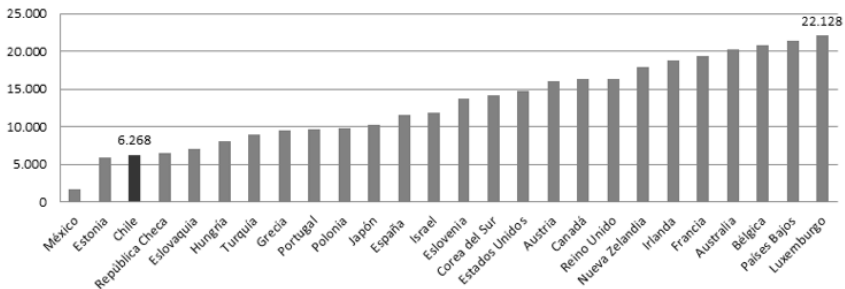
Así, Bárbara Figueroa, dirigente del Partido Comunista y hoy presidenta de la Central (después de años de hegemonía de Arturo Martínez, militante socialista cercano a Bachelet, ahora vicepresidente), escribía en julio de 2014:

Estamos conscientes de nuestro papel en este ciclo político, los trabajadores estamos avanzando en estos años lo que no se pudo en los últimos 40, desatando las últimas amarras de un modelo neoliberal que se agotó. Estamos en la ruta de construir un nuevo modelo de desarrollo, donde el trabajo y no el capital esté al centro (Figueroa, 2014).

Esta afirmación se realizó 24 horas después del último acuerdo sobre salario mínimo y reformas laborales con el actual gobierno de Bachelet. El monto acordado (225 mil pesos en 2014 para alcanzar 250 mil pesos –450 dólares– en 2016), como la agenda laboral de la ministra del Trabajo fueron presentados por la CUT como un hito histórico que “empareja la cancha” entre trabajadores y empresarios. Sin embargo, los resultados de la reciente reforma produjeron cierto descontento en un porcentaje no menor de dirigentes en todo el país, incluyendo en la dirección de la CUT. Fernando Kursan, dirigente nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) es representativo de esa molestia:

Está cuestionada la autonomía de la CUT y la del movimiento sindical. Parece que la Central estuviera mandatada por el Programa de Gobierno y la mayoría de los dirigentes disintimos de esa postura. No están escuchando a los trabajadores sino que a los partidos políticos de la Nueva Mayoría (Confusam, 2014).

Gráfico 4 | Salarios mínimos OCDE (en Usd anuales PPA 2013)



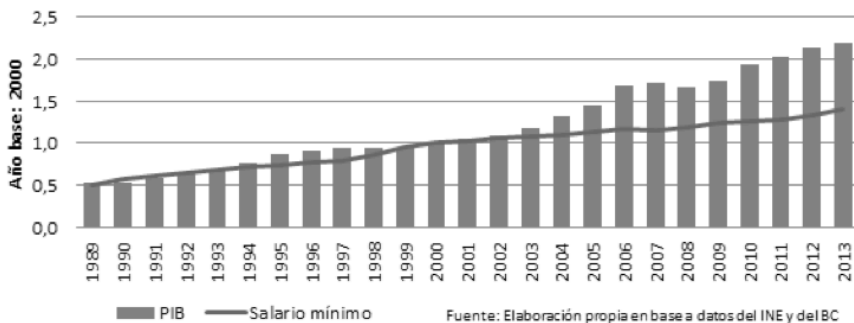
Fuente: elaboración propia en base a datos de la OCDE

Fuente: Elaboración de Sebastián Osorio y Gabriel Rivas (Osorio y Rivas, 2014).

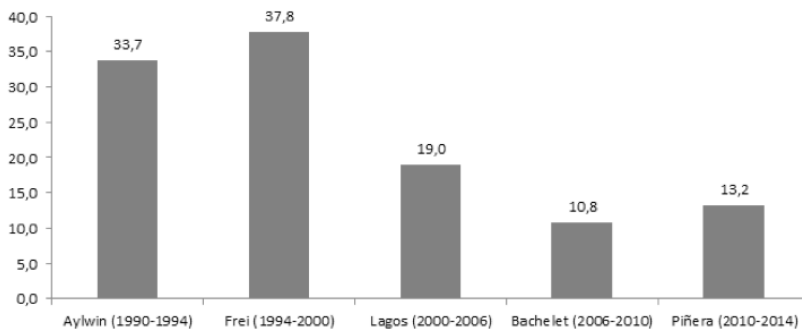
No cabe duda que si uno analiza con distancia el último acuerdo salarial, Chile queda muy por detrás de la inmensa mayoría de los países de la OCDE y el monto acordado representa sólo un aumento del 6% en términos reales. O sea, una suma cercana a la obtenida durante el vilipendiado gobierno de Piñera y que hace que, desde 2002, los salarios ni siquiera sigan el crecimiento del PIB (ver Gráficos 4, 5 y 6). Como lo anotaban en 2014 dos analistas del Centro de Investigación Político Social del Trabajo (Cipstra):

Las deudas pendientes de la Concertación en cuanto a los cambios en el Código del Trabajo, lejos de invitar a la CUT a firmar más cheques en blanco y declaraciones de buena crianza, debieran derivar en un rescate de la política sindical que mejores resultados ha dado desde el retorno a la democracia: un sindicalismo con un proyecto propio que no dependa de los gobiernos de turno, enraizado en la discusión democrática e inclusiva de las amplias bases de trabajadores, y con disposición a la lucha directa contra la institucionalidad empresarial y sus representantes. Y este imperativo cobra mayor fuerza en momentos en que la Nueva Mayoría reedita con el proyecto de Multirut y Reforma Tributaria la vieja política de los consensos (Osorio, Rivas 2014).

Gráfico 5 | Índice de crecimiento del PIB y del salario mínimo 1989-2013



Fuente: Elaboración de Sebastián Osorio y Gabriel Rivas (Osorio y Rivas, 2014).

Gráfico 6 | Variación del salario mínimo real por período presidencial 1990 a 2014 (en %)

Fuente: Elaboración de Sebastián Osorio y Gabriel Rivas (Osorio y Rivas, 2014).

Otro tremendo desafío para las organizaciones de trabajadores es lograr enfrentar la flexibilización del capital en su doble dimensión: como flexibilidad laboral y como flexibilidad *territorial* basada en una estrategia megaextractivista y rentista, entendiendo aquí el extractivismo según la definición –ya clásica– del uruguayo Eduardo Gudynas o sea “un modo de apropiación de la naturaleza que se caracteriza por una extracción de grandes volúmenes o intensiva, que son esencialmente destinados a la exportación como materias primas, o como productos de escaso procesamiento” (Gudynas, 2013). En Chile, esta depredación de recursos y de riquezas naturales por empresas nacionales y transnacionales, también denominada por Harvey estrategia de “acumulación por desposesión”, alimenta las llamadas “zonas de sacrificio” de norte a sur del país, arrasando con la tierra, las comunidades humanas y el medioambiente, generando numerosas resistencias y no poca desesperanza social.⁸ De hecho, podemos afirmar que el “consenso de los Commodities” (Svampa, 2012) y la agenda extractivista representan el pilar de la economía chilena: extracción minera (cobre, oro, plata, litio, etc.), monocultivo forestal,

⁸ Ver el interesante film documental *El modelo chileno* (Agallón producción, 2014) Serie “América Latina piensa”, 41’. En: <www.youtube.com/watch?v=LHDze7VsvhA>.

empresas salmoneras y pesqueras, agroindustria conforman la parte esencial de las exportaciones y del PIB, y son a la vez controlados por los principales grupos monopólicos de la economía. Como lo ha recordado en foros y seminarios Lucio Cuenca, director del Observatorio de Conflictos Ambientales,⁹ según datos de la Cepal, de cada 100 dólares que Chile exporta, 90 corresponde a materias primas, lo que hace del modelo chileno una economía altamente dependiente, rentista e insostenible... pero muy rentables para unos pocos. Si tomamos sólo la producción minera, ésta equivale al 17,4% del PIB (2013), de los cuales el 16% corresponde a las exportaciones de cobre. Entre 2006 y 2011, las grandes compañías mineras extranjeras se han llevado del país más de 160 mil millones de dólares en ganancias, gracias a un sistema tributario totalmente favorable y ridículamente bajo, ya que no se cobran *royalties*, contrariamente a la mayoría de los países donde existe minería de cobre (Pérez Soto, 2013).¹⁰ Es más,

a diferencia de otros países, en donde el extractivismo es parte de un modelo económico, en Chile, es pilar de la política pública, está arraigado en la Constitución, está expresado en ella, y eso hace una distinción muy importante. Por eso Chile es “el modelo del modelo”, porque por ejemplo, la manera de gestionar el extractivismo minero, la privatización del agua y la protección al desarrollo, están establecidas en la Constitución. No es asunto de una ley que pueda cambiarse de un parlamento a otro. Las bases están en la carta fundamental del país, y podemos ver cómo esto se ha ido profundizando, porque acá la promesa neoliberal de los años 80, es que este modelo centrado en la explotación de los recursos naturales de manera intensiva, pasaba luego a una segunda fase exportadora, donde se incorporaba el procesamiento de las materias primas: esta promesa tuvo continuidad en la transición a la democracia de los 90, pero nunca se concretó... (Cuenca, 2014: 34).

Estas actividades depredadoras son el meollo del “metabolismo neoliberal”, subordinando a la vez sociedad y naturaleza a la fría racionalidad del capital (La Savia, 2014). En su voracidad destructiva necesitan cada vez más energía

⁹ < <http://olca.cl> >.

¹⁰ Sobre este mismo tema, consultar los contundentes estudios de Julián Alcayaga, economista y defensor de la renacionalización del cobre, en <www.defensadelcobre.cl>.

eléctrica, control de territorios e inmensas cantidades de agua. De ahí, los niveles de privatización del agua –sin precedentes en el mundo–, gracias al código promulgado en dictadura (1981) que creó un sistema de derechos de aprovechamiento del líquido vital, derechos entregados de manera gratuita y a perpetuidad mediante la separación del dominio del agua del de la tierra y a la figura de derechos “consuntivos” y “no consuntivos”, facilitando los negocios del “mercado del agua” (Mondaca, 2014). Así, en varias zonas del centro y norte del país, donde se viven situaciones dramáticas de sequía, la propiedad del agua está en manos de grandes empresarios.

Esto ha provocado el abandono de miles de hectáreas de pequeños agricultores y serios problemas de abastecimiento en numerosas comunidades rurales. También ha permitido la irrupción de especuladores que han obtenido millonarias utilidades con la venta del agua que el Estado les entregó gratuitamente (Arellano, 2014).

El régimen de acumulación flexible extractivo en vigor recuerda hasta qué punto la estrategia de las multinacionales y/o de los oligopolios locales se inscribe en una fuerte tensión antagónica con los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y populares, como también en el asedio a sus territorios y medioambiente. Es particularmente el caso de la industria forestal (aunque lo mismo se podría decir de la ley de pesca y de la privatización del mar... En el sur del país, las plantas de celulosa, toda la infraestructura vial y portuaria están al servicio de megaplantaciones de pinos y eucaliptos: un proceso iniciado en dictadura (Decreto ley 701) y consolidado en democracia que ha significado “plantar pobreza” gracias a jugosos subsidios del Estado, la destrucción del bosque nativo en extensiones gigantescas pero también seguir con el despojo de los territorios del pueblo mapuche, pueblo sometido a un terrorismo de Estado permanente en nombre del “desarrollo forestal”.¹¹ En el seno de este conflicto capital/naturaleza y capital/comunidades han surgido varias de las resistencias desde abajo al neoliberalismo criollo y latinoamericano, de la última década.

¹¹ Ver el excelente film documental del equipo periodístico y audiovisual Resumen, *Plantar pobreza. El negocio forestal en Chile*, Concepción, 2014. En: <www.youtube.com/watch?v=A42dHCxuj1wZ>.

Los territorios son hoy día un lugar de disputa, ya que el capitalismo se ha volcado en los últimos años a la acumulación y explotación de recursos como el agua, los recursos pesqueros, minerales y un sinnúmero de riquezas naturales, lo que ha generado una serie de conflictos detonados por la presencia de grandes capitales en territorios que antes no le eran apetecidos (Galdámez, Aedo, 2014).

El papel de colectivos ecologistas y de habitantes en contra de múltiples megaproyectos destructivos del medioambiente ha marcado la dinámica del movimiento social del país en los últimos años: del proyecto de represas hidroeléctricas en Aysén al valle del Huasco contra la minera Pascua Lama de la transnacional Barrick Gold, pasando por la tozuda resistencia del pueblo de Caimanes frente al grupo Lucksic o por la de los pobladores de Freirina contra la empresa de cerdos Agrosuper. También ha significado el despunte de numerosos colectivos ecologistas más o menos radicales y de agrupaciones como el “Movimiento por la Defensa del Acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente” (Modatima).

En este contexto, que se podría calificar de “extractivo-territorial”, el hecho que todavía el sindicalismo se limite —en la mayoría de los casos— a reivindicaciones sectoriales o corporativistas sin buscar el vínculo entre sus movilizaciones y los múltiples conflictos socioambientales debilita el impacto de las luchas de los y las de abajo. Trabajadores y sindicatos se quedan así sin la posibilidad de una mayor comprensión de la fuerza transformadora que significaría articular, con mayor claridad, sus luchas desde el trabajo con las resistencias de las comunidades de pobladores movilizados, comunidades de las cuales estos mismos asalariados hacen parte en muchos casos. Este vínculo mancomunado trabajo-territorio, sindicalismo-movimientos, asalariados-pobladores desde la independencia de clase y el respeto de la autonomía de cada actor, representa una de las claves del periodo. Sin los asalariados organizados, las resistencias ecoterritoriales, indígenas y barriales no pueden superar el modelo, aunque demostraron su gran capacidad de movilización e incluso de conquistar victorias notables frente al Estado o a grandes empresas extractivas (como el caso de HidroAysén). A su vez, sin los otros movimientos populares y las comunidades en luchas, el movimiento obrero está condenado a seguir hundido en la fragmentación y a reivindicar solo para algunas fracciones asalariadas cuotas de mejoras parciales. Por todas estas razones, es imprescindible entender en su complejidad el escenario actual, tanto en el plano político como en términos del “despertar” de los movimientos sociales.

Ciudadanía “neoliberalizada”, crisis del sistema político y politización de los conflictos sociales

El gobierno empresarial –con entonaciones berlusconianas– de Sebastián Piñera (2010-2014), primer gobierno de derecha democráticamente electo desde 1958, significó –en un primer momento– un signo de posible renovación política y una clara inflexión en la larga historia de la *in-transición* democrática chilena: algunos analistas no dudaron en hablar de “segunda transición”. El presidente Piñera siempre pensó gobernar para los suyos y prometió administrar el Estado como gestiona sus empresas, cuya cotización en bolsa conoció un alza notable después del anuncio de su elección (Fazio, 2010). A la cabeza de una fortuna de más de mil millones de dólares y situado en el puesto 701 de la clasificación Forbes de las personas más ricas del mundo, Piñera pretendió encarnar una “nueva derecha”, más liberal, moderna y “humanista”. Su primer gabinete ministerial parecía un verdadero consejo de administración proveniente directamente desde los directorios empresariales: el presidente insistió mucho en su voluntad de formar un “gobierno de los mejores”. Pero, más allá de los ajustes institucionales, una de las principales características de su mandato fue la sorpresiva irrupción de imponentes movimientos sociales,¹ en particular el estudiantil que terminaron por afectar profundamente la imagen del primer mandatario. El declive de la popularidad del presidente Piñera fue acelerado, traduciéndose en la más baja aprobación para un gobernante desde 1990 (26% en junio de 2011), pero también afectó a la oposición concertacionista, contando sólo con un respaldo del 17% y una desaprobación del 46% (Gaudichaud, 2010). Así, la reciente experiencia chilena se ha caracterizado por la masividad de las movilizaciones callejeras y el amplio descontento expresado por estudiantes, organizaciones sociales y ciudadanos “de a pie”, quienes exigieron

¹ Utilizamos aquí como definición mínima del concepto de movimiento social, considerado como “poder en movimiento”, la propuesta de Sidney Tarrow: “Desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades” (Tarrow, 1994).

una “educación gratuita, pública y de calidad”, y soluciones frente al endeudamiento insostenible de millones de personas. En la capital chilena, como en regiones, no sólo los jóvenes se movilizaron sino que fueron muchos otros actores quienes hicieron sentir su rechazo y demandas en las calles (Mira, 2011). Ya insistimos sobre el papel ineludible de los trabajadores y en la fuerza de múltiples resistencias socioambientales, pero hay que recordar también el histórico levantamiento popular de la provincia patagónica de Magallanes (que se inició a fines de 2010 e inicios del 2011 en torno al precio del gas a través de una Asamblea Ciudadana), las importantes luchas urbanas del movimiento de los pobladores por la vivienda, la salud y el derecho a la ciudad (Mativet, Sgranyes, 2010), o las movilizaciones por el derecho a la diversidad sexual (LGTB), y, obviamente, la indomable resistencia del pueblo mapuche que, en 2010-2011, llegó a niveles récord, luego de la huelga de hambre de varios presos políticos.

Después de 20 años de bajos niveles de conflicto y de un movimiento social anémico (con excepción de las luchas del pueblo mapuche), lo novedoso estriba en que estas acciones contestatarias tendieron a masificarse e impactar el campo político gubernamental y partidario, y al conjunto de la opinión pública. Pero, ¿cómo leer esta emergencia disruptiva, después de décadas de autorregulación, control represivo e ilusión de modernización neoliberal?

Durante los años 90, primaron los discursos del miedo y el clivaje autoritarismo-democracia, y un lenguaje mediático que deslegitimaba sistemáticamente todos los conflictos sociales relevantes en nombre de los consensos. Al mismo tiempo, se impuso la imagen del éxito de la sociedad del emprendimiento generalizado, alimentado por la buena situación macroeconómica. Y aunque había conciencia en amplias fracciones de la población que esta bonanza era fundamentalmente producto de la explotación de su fuerza de trabajo —o sea de la dominación del trabajo vivo de millones de chilenos— y que se construía en base a una extracción férrea de los recursos nacionales y naturales, todavía reinaba cierto derrotismo en el seno de las organizaciones sociales y un gran control político de sus principales líderes. No obstante, varios signos precursores anunciaban la disconformidad de las y los chilenos frente al modelo. Un informe del PNUD sobre Desarrollo Humano, muy citado desde ese entonces, subrayaba en 1998 “las paradojas de la modernización chilena”. Siguiendo un típico lenguaje ONUiano y sin esconder

cierta fascinación por el capitalismo *made in Chile*, el texto notaba con resquemor que el desarrollo chileno traía *juntos* crecimiento del “nivel de vida” y malestar en el “modo de vida”, como también una “trama social” que si bien había avanzado en aspectos cuantitativos, presentaba una consistente “inseguridad humana” provocada por la precariedad del empleo, los bajos salarios, la falta de previsión social, etc.

Se ha mantenido una alta tasa de crecimiento. Han aumentado los salarios reales. Ha bajado la inflación y la cesantía a niveles históricos. Han aumentado también, en forma impresionante, el monto, la variedad y los destinatarios de las exportaciones. En suma, Chile, en los últimos diez años, ha más que duplicado su nivel de ingresos *per cápita*. Junto a ello, disminuye la pobreza en forma constante a la vez que aumenta el Desarrollo Humano. (...) Sin embargo, junto a estos logros y avances importantes coexisten grados más o menos significativos de desconfianza tanto en las relaciones interpersonales como en las relaciones de las personas con los sistemas de salud, previsión, educación y trabajo. El malestar existente hace pensar que los mecanismos de seguridad que ofrece el actual “modelo de modernización” resultan insuficientes (PNUD, 1998).

Frente a la fría individuación modernizadora neoliberal, el PNUD reconocía, mal que mal, la angustia de los trabajadores y del pueblo frente a condiciones de vida propios de lo que Lipovetsky celebró con entusiasmo como “era del vacío” o que David Harvey calificó –para denunciarlo– como “condición de la posmodernidad” (Lipovetsky, 1983; Harvey 1992). Es evidente que este malestar es mucho más que un “sentimiento” o una representación subjetiva. Se asienta en la enajenación del trabajo y violentas realidades concretas, como el patriarcado y las opresiones de género, las desigualdades materiales y territoriales, una intensa segregación socioespacial, la precariedad de las viviendas y del transporte, etc. Los escritos del francés Robert Castel muestran que no es, en ningún caso, un proceso específico de la sociedad chilena ya que lo encontramos en varias sociedades del capitalismo globalizado (Castel, 2004).

No obstante, estas dimensiones opresivas parecen adquirir en Chile caracteres más “extremos” y brutales. Se traducen igualmente en los altos niveles de estrés: de acuerdo a las estadísticas, Chile es el primer país en América Latina en el consumo *per cápita* de ansiolíticos y el cuarto a nivel

mundial. El *ethos neoliberal* que invadió la sociedad significó un modelo cultural segregador, a menudo violento, donde los repertorios de valores sustentan o legitiman de manera consciente o indirecta el orden social desigual. Trabajos de antropología social grafican la presencia de tal matriz cultural (Mayol, Azócar, Azócar, 2013). La construcción del sujeto neoliberal sería la de seres más competitivos, solitarios y desconfiados que antes. Al mismo tiempo, como lo ha sugerido la obra del filósofo freudiano-marxista Herbert Marcuse, se fundamenta también en algunas “retribuciones” y placeres hedonistas de corto aliento, alivios artificiales entregados por un sistema de consumo “que todo lo consume”, incentivado por la nueva tiranía de las apariencias, las marcas, la publicidad televisiva de masas, la presencia de los *malls* como nuevos templos de la sociedad,² de los fármacos para aliviar depresiones y angustias, etc. (Moulian, 1998: 53-54). Sin embargo, toda acepción “pura” de la noción de un supuesto triunfo del “individuo neoliberal” es engañosa, como bien lo muestran las encuestas de Kathya Araujo y Danilo Martucelli. Así, frente a la desprotección social e institucional generalizadas, la población logra defenderse, mal que mal, buscando el desarrollo de una subjetividad colectiva “por abajo” y nuevas formas de solidaridad, gracias a la creación de redes de protección familiares, vecinales e interpersonales informales (Araujo, Martucelli, 2013). Un hecho que se puede constatar a diario por quien vive en un barrio popular y que no es menor si se piensa en las alternativas posibles a este sistema.

Hasta mediados de los años 2000, si bien había conciencia de las injusticias o descontento social, éste no se tradujo necesariamente en politización en torno a la reivindicación de derechos o en organización colectiva, ya que el modelo del mercado heredado, las instituciones de la “democracia de los acuerdos” y el recuerdo de la dictadura tuvieron precisamente como efectos básicos dificultar o marginar toda expresión del disenso colectivo para redireccionarlo hacia frustraciones individuales. Juan Carlos Gómez Leyton ha desarrollado esta temática desde la ciencia política, afirmando la existencia de una *politicidad neoliberal*. Se modificaría así, con el paso del tiempo, la figura del *ciudadano-credit-card* de Moulian en la de un *ciudadano propietario-patrimonial* y *ciudadano consumidor-usuario*. Un ciudadano replegado en

² Chile es el país con más supermercados y centros comerciales por habitantes de A.Latina.

espacios familiares y de consumo, alejado de la *polis* y de sus debates, reacio a la acción colectiva, tanto al conflicto, como al voto, correlato obligado de la *sociedad neoliberal*. O sea una construcción en desmedro del *ciudadano colectivo-participativo*, organizado y clasista, que existió en Chile en los años 60 y 70. En tales condiciones, “la política queda encapsulada en los partidos políticos conformes con el sistema, los cuales monopolizan la dirección política de la sociedad” (Gómez Leyton, 2010: 353). Un proceso que se mantiene vigente hoy en día. Como lo grafican claramente las cifras del Servicio electoral en los Cuadros 3 y 4, la proporción de la población mayor de 18 años no inscrita en el padrón electoral pasó del 11,1% a más del 30% en 2009; por otra parte, la tasa de abstención de los ciudadanos que sí hicieron el esfuerzo de inscribirse (hasta 2012, existía un sistema de inscripción voluntaria con participación obligatoria), salta en el transcurso de esas dos mismas décadas de 7,6% a más de 16%.

Cuadro 3 | Evolución de la inscripción electoral

Elección presidencial año	Población mayor de 18 años	Inscritos	No inscritos	% no inscritos
1989	8.499.972	7.557.537	942.435	11,1%
1993	9.052.632	8.085.493	967.193	10,7%
1999	10.126.098	8.084.476	2.041.622	20,2%
2005	11.322.769	8.220.897	3.101.872	27,4%
2009	11.965.990	8.285.186	3.680.804	30,7%

Fuente: Elaboración de J.C. Gómez Leyton, en base a datos del Servel (Gómez L., 2010).

Es un hecho que después de la importante participación en el plebiscito de 1988, y de la victoria del “No” a Pinochet,³ comenzó a cundir la desilusión y la desafección política, especialmente en la nueva generación posplebiscito. Chile se encuentra en el último lugar de las Américas en términos de

³ Luego de más de 15 años de dictadura militar, el 96,6% de las personas en edad de votar se inscribió en los registros electorales y, de ellas, el 89,1% acudió a las urnas para pronunciarse: el “no” a Pinochet terminó por imponerse con el 55,99% de los votos (el “sí” obtuvo 44,01%).

participación electoral de los adultos de menos de 37 años, superando incluso a aquellos países que tienen un sistema de voto voluntario, como Venezuela o Colombia (Toro, 2008). Pero esta baja participación puede ser también leída –por lo menos en parte– como una rebeldía frente al sistema, a la “casta política” y sus privilegios, a un mundo de los partidos cruzado en permanencia por múltiples y sonados escándalos de elusión fiscal, financiamientos ocultos o ilícitos, sobornos empresariales, intercambios de favores, etc.

Cuadro 4 | Abstención general (incluidos votos nulos y blancos)

Elección presidencial año	Votos válidamente emitidos	Total de votantes	Total de inscritos padrón electoral	Ciudadanos no participantes	% de ciudadanos no participantes
1989	6.979.859	7.158.727	7.557.537	577.678	7,6%
1993	6.968.950	7.376.691	8.085.493	1.116.543	13,8%
1999	7.178.727	7.326.753	8.084.476	905.749	11,2%
2005	6.959.413	7.162.345	8.220.897	1.261.484	15,3%
2009	6.942.601	7.186.344	8.285.186	1.342.585	16,2%

Fuente: elaboración de J.C. Gómez Leyton, en base a datos del Servel (Gómez L., 2010).

En el seno de este panorama de rechazo creciente de la institucionalidad y de bajos salarios, un arma ha sido fundamental para mantener, mal que mal, la *gubernamentalidad neoliberal* y niveles de consumo interno artificialmente altos: la introducción de herramientas crediticias y la explosión del endeudamiento privado.⁴ Según cálculos del Banco Central, la deuda de los hogares creció a una tasa promedio de 12,8% real anual entre el 2000 y el 2009, lo que ha significado un aumento de la relación deuda/ingreso de 35,4% a 59,9% en dicho período. La deuda concierne cerca del 60% de las familias y 47% de los jóvenes entre 25 y 29 años, lo que representa el 40% del PIB.⁵ El filósofo italiano Maurizio Lazzarato ha evocado cómo la *fábrica del hombre endeudado* es uno de los paradigmas del tiempo económico global

⁴ Entre 1997 y 2010, las tarjetas de crédito de las grandes tiendas se han disparado desde 1,3 millones a 7 millones, según la Cámara de Comercio de Santiago. Y las tarjetas de crédito bancarias aumentaron en 43% solo en cuatro años (Gómez Leyton, 2010: 362).

⁵ Más análisis en el sitio web del Banco Central: <www.bcentral.cl>.

y el correlato obligado de la flexiprecariedad del trabajo: desde los años 80, el *Homo debitor* sustituyó al *Homo economicus*, generando nuevas formas de dependencia y esclavitud moderna, con el aval del Estado neoliberal. El ciudadano ya no tiene derecho a la vivienda, tiene “derecho” a contratar créditos inmobiliarios, no tiene derecho a la educación, tiene “derecho” a pagar un diplomado universitario, etc. y, para obtenerlos, necesita trabajar aun más y más, vendiendo su única propiedad: su fuerza de trabajo (Lazzarato, 2011).

Siendo el crédito una función obligatoria de la vida actual y operando este en la lógica de la falta de libertad de los individuos frente a la enorme libertad del capital, lo que se configura es una relación muy dispar de poder y un factor más. El crédito se torna usurpación futura, contradicción en los intereses de clase convertidos en especulación financiera. No es un asunto menor. Las clases sociales y sus contradicciones en el momento productivo (empresario-trabajador) se amplían y llegan al punto del consumo, donde hay una nueva oportunidad de usurpación y de toma de control sobre el destino de quien ocupa la posición más alejada del capital en la sociedad (Mayol, 2012: 119).

En este ámbito, como en muchos otros, Chile también fue laboratorio. Y como lo destaca en una extensa evaluación crítica el físico y filósofo chileno Carlos Pérez, es el mismo Estado subsidiario el que acompaña este proceso de mercantilización de todos los derechos sociales:

El gran asunto ahora, en general, es la completa funcionalización del Estado respecto del interés de los empresarios privados. Más allá de la privatización que recurre al expediente simple y brutal de vender a precio regalado los bienes acumulados por todos, se trata ahora de la introducción de la lógica de gestión de las empresas privadas en la gestión de los servicios públicos, acompañada de un masivo sesgo que lleva a que el Estado privilegie, e incluso financie directamente, a las empresas privadas en detrimento de sus propios servicios. Un régimen en que el gran capital logra convertir en áreas de negocios a los servicios, que se consideraron tradicionalmente como derechos sociales, que tenían que ser proveídos y garantizados por el Estado. En la mercantilización de los servicios, que resulta de estas políticas, el costo es descargado progresivamente sobre los usuarios, el Estado autoriza y avala el lucro con bienes esenciales, e incluso aporta directa e indirectamente los capitales que requieren los privados para implementar sus negocios. Esto resulta

particularmente claro en cuatro áreas extremadamente sensibles para los ciudadanos comunes: el transporte público, la educación, la salud y la industria alimentaria (Pérez Soto, 2013).

Esta afirmación se vuelve flagrante con el sistema educativo, sistema que el dictador terminó de conformar legalmente el 10 de marzo de 1990, con la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), un día antes de entregar el mando al presidente Aylwin. La LOCE avaló el principio de subsidiariedad en la educación y la existencia de un inmenso mercado educacional basado en el principio de la demanda y de la “libertad de enseñanza”. Y eso en todos los niveles: colegios y liceos privados o “particulares subvencionados” (por el Estado), administrados por “sostenedores”, que lucran de diversas maneras y que suplen parcialmente una degradada educación municipal básica y media, destinada a los más humildes. En el plano de la educación superior, se favoreció la multiplicación de universidades-empresas que pueblan las calles de Santiago y de todo el país, en búsqueda de estudiantes-clientes. Aunque formalmente la ley impide el lucro, la creación de estos establecimientos se transformó en un gigantesco negocio para los grupos económicos nacionales y extranjeros. Chile es, con Corea del Sur, el país del mundo donde estudiar cuesta más caro en términos relativos: una carrera universitaria cuesta unos 500 dólares mensuales como promedio donde el sueldo mínimo es de alrededor de 400 dólares (Mönckeberg, 2007). La masificación –real y acelerada– del nivel de diplomas de los chilenos se forjó a la par con un mercado educacional desmedido, de baja calidad y gracias al endeudamiento de miles de jóvenes y familias. Hasta el golpe de 1973, la educación pública chilena era reconocida por su calidad y gratuidad. Actualmente, el Estado sólo dedica el 4,4% del PIB a la educación (cifras más baja de la OCDE), bien lejos del 7% recomendado por la Unesco, mientras que sólo el 16% del sistema educativo superior es financiado por fuentes públicas (el resto lo asumen las familias de los estudiantes).⁶ En estas condiciones, el 70% de los estudiantes tiene que endeudarse y el 65% de ellos interrumpe sus estudios por razones financieras. Como lo explica la investigación doctoral de

⁶ El actual sistema universitario chileno es el único en el mundo que financia de la misma forma tanto a instituciones públicas como privadas: el Estado invierte 2,5 veces más dinero en instituciones privadas que el promedio de los países desarrollados agrupados en la OCDE.

Oscar Vivallo, el sistema educativo funciona en base a una exclusión graduada y diferenciada, pero nunca total: la ilusión consiste en que la inclusión vía el sistema de mercado de la educación sea vista como “expedita”, mediante el endeudamiento, permitiendo el ascenso de los excluidos hacia posiciones sociales consideradas como más integradas (pero subordinadas). Esta *inclusión diferenciada* permite la creación de subjetividades individuales que constituyen *in fine* una potente herramienta de control social, *status quo* y dominación política. Crea ilusión de movilidad ascensional, cuando las cifras demuestran –al contrario– la correlación casi perfecta entre ingresos económicos y acceso a la universidad (ver Anexo 3 y Vivallo, 2013).

Empero, en 2011, la fuerza del topo de la historia empezó a cuestionar, otra vez, la gran solidez aparente de este andamiaje. Es justamente esta ilusión meritocrática lo que se agrietó y terminó por lanzar a estos nuevos sectores medios y capas populares, ligados a la expansión del sistema educativo privado, a inundar las calles y a ampliar significativamente el *espacio de los movimientos sociales*,⁷ con hasta más de un millón de personas manifestando, marchando, denunciando, clamando por una “educación pública, gratuita y de calidad”. Eran, en su mayoría, asalariados y sus hijos, no desde sus puestos laborales por cierto, pero entendiendo que los avances de esos movimientos podían significar también mejorar las condiciones de acción colectiva de los trabajadores y sus condiciones de vida inmediatas para ellos y sus familias. Poco a poco, esas reivindicaciones hasta el momento impensables se instalaron en el discurso de los actores movilizados y también en los medios: (re)nacionalización del cobre, Asamblea Constituyente, “No más AFP”, entre otras. El sociólogo Alberto Mayol y su equipo han investigado los ejes explicativos de esta politización hasta ese momento estancada en los intestinos del Chile neoliberal.

Entre 1990 y 2011 se constituyó una subjetividad que toleró un incremento significativo de malestar sin mayores expresiones políticas del mismo. Una sociedad despolitizada privatizó los problemas públicos y los asumió a nivel individual. En ese marco, el disenso de los

⁷ El espacio de los movimientos sociales es “un ámbito de prácticas y de sentidos relativamente autónomo en el mundo social”, dotado de lógicas, referencias, prácticas propias y en las cuales las diferentes organizaciones protestatarias, agentes y causas “están unidas por relaciones, de intensidad y naturaleza variables” (Mathieu, 2012).

ciudadanos con el orden político al cual debían responder, no sólo no tuvo nunca representación institucional, sino que más bien fue la institucionalidad su principal obstáculo. Las instituciones funcionaron como dique de contención del malestar y protegieron así a la clase política. La latencia del malestar tuvo su final, o al menos una suspensión significativa, durante 2011, a partir de un proceso de movilización social de gran envergadura que ancló la energía del malestar en los problemas de la educación chilena. La ilegitimidad anterior de la protesta pública invirtió su signo y el acto de protesta pasó a ser parte fundamental del modo en que las demandas ciudadanas lograron, legítimamente, escalar hacia las autoridades, mientras éstas reducían su ya menguada aprobación (Azócar, Mayol, 2011).

Este sorprendente despertar, que podríamos calificar de “bifurcación intempestiva” siguiendo al filósofo Daniel Bensaïd, tiene, por cierto, raíces históricas y orígenes de variadas índoles. Muchas son las encuestas de opinión que recalcan que lo que surge en 2011-2012 es algo que viene de mucho antes: baja confianza en la equidad del Estado, repudio creciente frente a las colusiones entre grupos económicos (con el caso simbólico de empresa La Polar en 2011, cartel de los pollos y de las farmacias), menor aceptación de la constante discriminación étnica o sexual, rechazo a los evidentes conflictos de interés entre elites políticas y gran empresariado, etc. Sondeos del año 2001, así como también una encuesta de la Universidad Diego Portales de 2008, ya habían revelado el abismo existente entre una clase dominante sorda, que seguía alabando el libre mercado y una población que en sus respuestas reclamaba, muy mayoritariamente, más Estado y servicios públicos, la creación de empleos estables, mayor regulación económica, reducción de la brecha en la distribución de ingresos (Zrari, 2012). Recordemos también que los secundarios y estudiantes han sido, durante todo el siglo XX, un sector dinámico de las luchas sociales. Pero los actores en lucha de los años 2000 son nuevos agentes sociales, distintos del periodo nacional-desarrollista y producto de la nueva fisonomía neoliberal madura. Más recientemente, en 2006, la “rebelión de los pingüinos” ya había cuestionado la LOCE, como también el sistema de selección universitaria, obligando al primer gobierno de Bachelet a intentar una maniobra institucional para calmar a “la calle”. Al final de cuentas, desde fines de los 90, se ha ido produciendo

una *acumulación molecular de conflictos parciales*, muy dispersos, con una aceleración desde 2006-2007.

¿Cuáles son los otros factores que explican este salto cualitativo y cuantitativo? Podemos citar la situación económica de los estudiantes durante un periodo de crecimiento profundamente desigual, pero con perspectivas de ascensión social individual más desfavorables que durante la década anterior. Además, en 2011, 40% de los jóvenes acceden a la enseñanza superior, un hecho inédito, masificando la preocupación de las familias y su apoyo a las reivindicaciones. Por otra parte, si retomamos la sociología de las políticas de conflicto, la llegada del gobierno de derecha de Sebastián Piñera representó también una “estructura de oportunidades políticas”⁸ para la movilización. Si bien el movimiento nunca tuvo como base demandas “antisistémicas”, ni siquiera antineoliberales, comenzó a instalar la idea del “no al lucro” como algo comúnmente aceptado, exigiendo la desmunicipalización de la educación secundaria, mejor calidad de enseñanza, democratización de los mecanismos de acceso a la educación superior, limitación de los beneficios de los sostenedores e inversores privados (Barozet, 2011). El sociólogo italiano Alberto Melucci denomina los movimientos sociales como “agencias de significación colectiva” que apelan a la solidaridad colectiva, crean un marco de interpretación compartido frente a sentimientos de injusticia y facilitan la capacidad de sus miembros para definir un sentido del *nosotros* que cuestiona el orden social dominante (Melucci, 1999). Es precisamente lo que ocurrió con el movimiento social por la educación. En el *flujo de conflictos*⁹ que se inicia en mayo de 2011 y que entra en recesión en marzo de 2012, el movimiento estudiantil se hizo vocero de múltiples demandas acumuladas:

desde las entrañas del mismo sistema educacional, no sólo alzó la voz con respecto a un problema que le afectaba como grupo particular de

⁸ La *Estructura de Oportunidades Políticas* (EOP) alude a dimensiones de contexto, de índole esencialmente coyuntural, pero también de carácter más permanente que, combinadas, generan un nuevo cuadro político que incentiva la acción colectiva. En su definición de la EOP, Charles Tilly y Sydney Tarrow piensan en particular en la interacción entre actores sociales, sus percepciones de la coyuntura política o de las acciones del gobierno de turno (Tarrow, 2008).

⁹ Un “flujo de conflictos” representa una serie de momentos de reivindicaciones colectivas y episodios de interacción conflictuales y protestatarias, ligados entre ellos y que el investigador aísla para estudiarlos (Tilly, Tarrow, 2008).

la sociedad, sino que logró hacer de esa demanda un sentir universal de toda una población que veía resquebrajadas aquellas promesas de una “alegría venidera” (Azócar, 2013: 115).

Estas luchas de los jóvenes –apoyadas masivamente por más del 70% de la opinión pública en su momento más álgido– trizaron el “sentido común” neoliberal y retomaron formas de organización y repertorios de acción más horizontales, autogestionarios y democráticos. Tomas de liceos, colegios y universidades, actos culturales “alternativos”, *flash-mob* y “besatones”, vocerías controladas en asambleas, cacerolazos y marchas multitudinarias festivas. Una radicalidad democrática presente también en los otros movimientos sociales. No se trata aquí de recrear la cronología de acontecimientos reportada en otros textos (Gaudichaud, 2011; Fleet, 2011), pero es esencial recordar que estas resistencias provocaron un trasvase de la política desde los espacios institucionales hacia la sociedad misma: entre los sectores más activos y radicales (como por ejemplo la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES), comenzaron a circular ideas como la defensa del “control comunitario”, del “poder popular territorial” pensado como contrafuerte a visiones estadocéntricas o a los riesgos de las instrumentalizaciones partidarias, todavía fuertemente ancladas en las organizaciones del sindicalismo estudiantil y en la Confederación de Estudiantes de Chile, Confech (Agacino, 2013b).¹⁰ Ese “despertar de la sociedad” ha acelerado un proceso de desgaste de la democracia neoliberal protegida y la imagen de las dos coaliciones que dominan la política del país (Garcés, 2012). Es este proceso el que Alberto Mayol propuso entender en varios artículos y libros, como *derrumbe del modelo* e impugnación de la economía de mercado, aunque reconociendo que podría ser un proceso de mediano plazo, pero sin chance de retorno, ni de estabilización (Mayol, 2012).

No cabe duda que desde 2011 se evidencia, una *crisis creciente de legitimidad*¹¹ y la *fisura parcial* de la hegemonía del neoliberalismo chileno. No

¹⁰ Así la Confech, a través de sus principales dirigentes era fuertemente vinculada a diversos partidos, tal como Camila Vallejo, figura carismática altamente mediatizada y militante del Partido Comunista, o Giorgio Jackson, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (y cercano a la Concertación).

¹¹ El sociólogo Nicolás Fleet recuerda que “en los términos de Max Weber, quien acuñó el concepto, una crisis de legitimidad plantea una fractura en el esquema de dominación en su conjunto, producida por un grupo social emergente que modifica la identidad de

obstante, la complejidad del escenario aún abierto no permite afirmar que el modelo esté a punto de “derrumbarse”, una aseveración que discutiremos en la conclusión. Terminar hoy con la educación de mercado en Chile sería atacar la estructura misma del modelo neoliberal maduro. Y, sin duda, se requiere disponer de una relación de fuerza anticapitalista mucho mayor y amplia a la de los estudiantes. A pesar de su gran creatividad, masividad y en ausencia de alternativas políticas partidarias globales, sin poder incidir directamente en el antagonismo capital/trabajo y sin aliados estables en el espacio de los movimientos sindicales (en particular desde la CUT), y después de una ardua “guerra de posición” con el ejecutivo, esas movilizaciones explosivas tendieron a decrecer, a medida que se acercaban las elecciones presidenciales, pero sin por ello haber sido derrotadas, abriendo paso a tres paros nacionales por la educación, empujando al ministro Lavín a la dimisión y obligando el anuncio de tímidas medidas gubernamentales para enfrentar el tema de las deudas (*Herreros, 2012*).

Dentro de todo lo novedoso del periodo es precisamente esta politización de la sociedad, fenómeno mayor, que ha desplazado las fronteras de lo real y de lo posible, que ha impactado las clases dominantes, descolocando un tiempo a una de las derechas más conservadoras de América del Sur. En marzo de 2014, el senador y dirigente de Renovación Nacional Andrés Allamand no escondía su incomodidad frente a estos tiempos revueltos y al hecho que todas las “verdades” instaladas en el paisaje ideológico, durante decenios, por la casta política podían ser ahora cuestionadas por la opinión pública:

Recuerda que hace cuatro años la legitimidad de la Constitución estaba zanjada; el emprendimiento privado en educación no se discutía; el sistema previsional basado en capitalización individual estaba legitimado por la propia Concertación; el concepto de soluciones privadas a los problemas públicos se encontraba vigente. Todas “certezas” que hoy están en tela de juicio.¹²

la sociedad a la vez que presiona por mayor participación en la distribución del poder (y a través del poder, del producto económico) y reconocimiento social, conduciendo a la apertura de este esquema, o sea su democratización, o bien a su cierre, es decir exclusión” (*Fleet, 2011*).

¹² *El Mercurio* (Santiago) 30 de marzo de 2014.

Esta dimensión y despliegue de la politización es correctamente destacada como un dato central de la sociedad chilena actual por el informe sobre desarrollo humano en Chile del PNUD 2015:

Las señales de la politización son diversas y es relevante enfatizar este hecho: no se limita a un único espacio de la sociedad, sino que se expresa en diversos planos de lo social: como ampliación de la discusión pública, como aumento de la conflictividad y la movilización social, como involucramiento ciudadano. [...] Una de las señales más evidentes del proceso de politización que experimenta la sociedad chilena es la incidencia creciente que adquieren los movimientos sociales a la hora de incorporar temas y demandas a la discusión pública. Una manera en que esto se expresa es el aumento de las acciones de protesta y del número de personas involucradas en ellas. Lo han observado tanto la opinión pública en general como las elites; en ambos grupos una mayoría reconoce que en la actualidad hay más conflictos que cinco años atrás. Por ello no es de extrañar que las diversas formas en que las movilizaciones sociales ocupan el espacio público se vuelvan una experiencia recurrente en su vida cotidiana. Asimismo, la opinión acerca de la legitimidad de esas manifestaciones, si bien no es mayoritaria, viene creciendo en el tiempo (PNUD, 2015: 15-16).

Otra enseñanza esencial que deja este importante informe es que para entender dónde se encuentra el Chile de hoy es necesario volver a distinguir (siguiendo a Chantal Mouffe, Norbert Lechner o Jacques Rancière entre otros) *la política* de *lo político*: lo primero se refiere a una visión restringida centrada en la administración estatal, en la gestión y deliberación pública, o sea la cara institucional de lo político, cuando lo segundo atañe al amplio campo de la autodeterminación de la sociedad en su conjunto, a lo susceptible de ser debatido y decidido colectivamente, entre otros desde el movimiento popular y su conflictividad. Según el PNUD es precisamente desde lo político que se vive un proceso de politización en Chile, en particular dentro de los jóvenes, lo que no impide una fuerte crítica y desconfianza hacia la política estatal y su estrechez institucional. Visto así, podemos entender que la ciudadanía neoliberalizada de los 90 y dos mil está también en retroceso, abriendo espacio al disenso y politización “desde abajo” en contra de los consensos y control partidarios “desde arriba”, creando nuevos procesos de subjetivación política popular. Pero no por eso, los movimientos sociales

han logrado todavía conquistar una hegemonía en la sociedad civil y pueden pretender representar un descontento masivo pero aún difuso. Las encuestas de opinión demuestran que subsiste el fuerte hiato entre una minoría de militantes-activistas y una gran mayoría de ciudadanos-trabajadores perplejos sobre los caminos a seguir para enfrentar el futuro:

la imagen de los movimientos sociales en la opinión pública muestra ambivalencias importantes. Las personas les reconocen el mérito de haber puesto los temas en debate y haber forzado a las elites a reaccionar. Sin embargo, cuando hablan de eso, por ejemplo en las conversaciones grupales que conforman la base empírica de este Informe, se refieren siempre a los movimientos como un “ellos” que es visto operando en una esfera distinta y aparte de la propia ciudadanía. Junto a lo anterior, consultadas sobre su evaluación de las manifestaciones del último tiempo, solo un tercio de las personas opina que han sido positivas para el país (PNUD, 2015: 44).

Para terminar de comprender la coyuntura y antes de concluir, esbozaremos un breve comentario sobre el gobierno y el nuevo ciclo institucional, ya que si bien en el momento en que escribimos este texto la presidenta Bachelet no termina su segunda mandato, se pueden trazar algunas líneas de fondo que parecen caracterizarlo.

Breve comentario sobre el gobierno de Bachelet: progresismo transformista, nuevo ciclo político y continuidad de una hegemonía

En 2014, hemos entregado un análisis detallado de la última campaña presidencial y propuesto para el debate algunas hipótesis sobre el “alma” del gobierno de la “Nueva Mayoría” (Gaudichaud, 2014a). Sería redundante volver a esta problematización crítica, aunque podemos resumir los puntos centrales de este texto, intentar ver cómo ha evolucionado el panorama en este plano y en qué medida nuestras hipótesis de trabajo parecen confirmarse.

Primero, al analizar la tasa de participación electoral y los niveles de abstención, es innegable que la fuerza de los movimientos sociales del 2011-2012 no significaron mecánicamente la adhesión a la campaña electoral, al contrario, aun cuando la ciudadanía que vota en 2013 es una ciudadanía que ha sido profundamente removida y politizada por este ciclo de luchas, como acabamos de explicarlo. De manera evidente, la cifras recuerdan que la mayoría electoral *real* del país es abstencionista: sólo cuatro de diez chilenos optó por votar en segunda vuelta de la elección presidencial, la menor cifra desde 1990, esto es alrededor del 51% del electorado en las presidenciales y parlamentarias del 17 de noviembre de 2013 y 58% en la segunda vuelta realizada el mes siguiente. En rigor, se puede afirmar que la presidenta Bachelet fue elegida con un reducido 25% de los electores (cuando los medios anunciaban su victoria en primera vuelta), pero además se podría constatar que incluso perdió 120 mil votos en comparación con el 2005. En las parlamentarias, el fenómeno es aún más marcado: los candidatos de la Nueva Mayoría representan sólo a un 21% del electorado, y los de la Alianza por Chile a un escaso 16%.¹ No obstante, la coyuntura de fuertes movilizaciones y en particular en los estratos jóvenes, tradicionalmente abstencionistas, permite anticipar que dentro de los cambios actuales se va ampliando el denominado “partido de los no electores”:

¹ Para revisar parte de los resultados oficiales, consultar el sitio web del Servicio Electoral (Servel): <www.eleccioneservel.cl>.

Este grupo de ciudadanos son activos políticamente, pero no participan en los actos electorales por distintas y variadas razones, desde el rechazo a los políticos, a los partidos políticos, a la democracia representativa, etc. Su participación en las elecciones se manifiesta en la abstención, en el voto nulo o en blanco. Su decisión electoral es no elegir (Gómez, 2010: 183).

Esta abstención política crítica y activa podría seguir creciendo en los próximos años, a medida que se recomponen el movimiento social y los conflictos de clases. Como ya se sabe, la victoria electoral de Bachelet se hizo en base a la potente construcción mediático-carismática e incluso *mariana* de la presidenta, por encima de los desgastados partidos de la Concertación: la “madre” de la nación, sonriente, protectora y comprensiva, supo forjar un personaje consensual que ha movilizado también desde la solidaridad de género (Doran, 2010), un tema crucial para las elecciones de 2013, como de 2005. Igualmente, la victoria de la coalición oficialista se hace en un contexto de crisis interna de las derechas, después de 4 años de “piñerismo”, como también gracias a su aparente renovación en “Nueva Mayoría”, con la inclusión en particular del Partido Comunista (PC) en el conglomerado gubernamental. El PC, principal fuerza de la izquierda –hasta ahora no “digerido” por la Concertación–, dio un paso adicional hacia la institucionalización y cuenta hoy con 6 parlamentarios, una ministra y varios altos cargos estatales. En la tradicional “Fiesta de los abrazos” de marzo de 2015, el timonel comunista, Guillermo Teillier hacía un balance muy positivo de este paso táctico, que pretende tener “un pie en la calle y otro en el gobierno”. Tercer elemento, el momento electoral logró ser un instante de cierta renovación parlamentaria y de canalización de dirigentes estudiantiles hacia los bancos del Congreso, lo que no es menor e *in fine* demuestra cierta flexibilidad del sistema pensado por Jaime Guzmán. Entraron de esta manera al Parlamento bajo los colores del PC, Camila Vallejo, expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) y vocera de la Confech, electa con un arrasador 40% en la comuna de La Florida (Santiago); Karol Cariola, secretaria general de las Juventudes Comunistas, pero también dos otros mediáticos dirigentes estudiantiles: Giorgio Jackson (Revolución Democrática) con el apoyo de la exConcertación y, por fuera de

los acuerdos del sistema binominal, en una hazaña histórica, Gabriel Boric (Izquierda Autónoma).² Cuarto elemento, se puede interpretar la clara victoria presidencial y parlamentaria de la “Nueva Mayoría” (con una confortable mayoría en el Congreso) como un reflejo indirecto de expectativas de cambio presentes en el electorado. Lidiando con complejos equilibrios internos en su coalición (que va desde los comunistas hasta los demócratacristianos), la flexibilidad discursiva y programática de Bachelet permitió, por primera vez desde 1990, anunciar reformas sustanciales a la agenda de las políticas públicas, escuchar lo que sonaba en las calles y, *a la vez*, dar garantías de gobernabilidad al gran capital (que se tradujo, entre otros, en el éxito de financiamiento de su campaña electoral y el beneplácito de Washington). Bachelet (y su colosal equipo comunicacional) fue constructora de un perfecto *storytelling*. Articulando dominio de la retórica, poder de escenificación y nuevas tecnologías digitales, propuso un relato bastante convincente como para representar algo diferente del continuismo de la agotada y trillada Concertación. Esto a pesar de ser una mujer política proveniente directamente de esta misma coalición, que codirigió tanto desde las altas esferas del Partido Socialista, como también como exministra de Salud, exministra de Defensa y expresidenta de la República (2006 al 2010).

Los anuncios de cambio tuvieron tres ejes principales: en primer lugar, una reforma constitucional “participativa, democrática e institucional”, que requiere un acuerdo en el Congreso con la derecha (para obtener los *quórum*s exigidos), segundo una reforma fiscal, equivalente al 3% del PIB, destinada a tasar “moderadamente” (según reconoció uno de los ministros) los enormes beneficios de las grandes empresas, y, por último, una reforma de la educación que busca terminar con el “copago” y el lucro e ir progresivamente hacia la gratuidad en 6 años.³

Globalmente, durante la campaña, la Nueva Mayoría supo tomar en cuenta el pulso de la sociedad y estos anuncios tuvieron un “rendimiento electoral” muy elevado en un primer momento. Sin embargo, las ambigüedades ya contenidas en el programa, como el prontuario de 20 años de

² También se podría hacer mención de la elección de Iván Fuentes, líder de grandes movilizaciones en el sur del país, como candidato de la Democracia Cristiana.

³ La reforma educativa tendría un costo de unos 8 mil millones de dólares según el programa presidencial, que debía ser financiado integralmente por la reforma tributaria.

Concertación, permitían dudar de la profundidad de las reformas pensadas. Otros signos fueron confirmando lo que venía. Por ejemplo, la composición del primer gabinete y, entre otros, la cartera estratégica del Ministerio de Educación atribuida a un próximo de la mandataria: Nicolás Eyzaguirre, ex alto funcionario del FMI y ministro de Hacienda del gobierno de Lagos, había sido denunciado por organizaciones estudiantiles por su gestión pasada favorable a los bancos (en particular con la creación del “Crédito con Aval del Estado”). Si por el momento no todas las reformas han sido implementadas, su motorización desde las alturas del Parlamento y la búsqueda de consensos en la comisiones con amplios sectores de las derechas prueban que no ha muerto la “política de los acuerdos” del pasado. Algunos oficialistas tuvieron incluso la franqueza de reivindicarlos, como el senador DC, Manuel Antonio Matta (*El Mercurio*, 5 de julio 2014). En lo fundamental, y frente a la crisis de legitimidad, algunos sectores dominantes del empresariado entendieron la importancia de reformas consecuentes para volver a estabilizar el modelo:

El Bloque en el poder está hegemonizado por una alianza entre el capital bancario y el comercial. Dicha “alianza”, si es que podemos llamarla de esa manera, no está en contra de las reformas planteadas por la facción gobernante que conforma el pacto “Nueva Mayoría”; es más: las apoya. Y esta afirmación es tan efectiva que el propio presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad, lo dice cada vez que tiene posibilidad de hacerlo, como sucedió el 11 de mayo pasado en el programa de TVN ‘Estado Nacional’: “Chile debe aprovechar este gran consenso y debe haber una reforma educacional y para eso se requieren más recursos, pero hay reparos constitucionales que deben solucionarse” (Acuña, 2014).

Este hecho no impidió que el gobierno viviera su primer año de mandato bajo una fuerte presión del duopolio mediático, de la derecha (la UDI en particular, todavía principal fuerza política del Parlamento), de las iglesias y de distintos gremios o asociaciones patronales, conduciendo una eficaz campaña de críticas-denuncias de las reformas para poder morigerar e influenciar al máximo las más importantes. Una ofensiva que ha surtido efecto, tanto más cuanto las cúpulas partidarias de la exConcertación son sensibles a la opinión empresarial. Asimismo, como lo reveló el Centro de Investigaciones

Periodísticas, el acuerdo tributario, firmado con la derecha y el Senado por el entonces ministro de Hacienda Alberto Arenas, representa el triunfo de los poderes fácticos, después de haber sido “cocinado” fuera del Parlamento, con representantes de las principales familias de los empresarios y la banca: “Luego vendría el anuncio público transmitido en horario *prime* por los canales de televisión, con la firma de senadores desde la UDI al Partido Socialista” (Skoknic, 2014). El economista, Claudio Agostini, exasesor de la Concertación, asegura que “el acuerdo tributario abre espacios de elusión mayores a los que había” y añade “hay varios grupos de interés que deben estar muy contentos. El lobby y la presión fueron más exitosos de lo que imaginaron” (*El Mostrador*, 10 de julio 2014). Finalmente, la reforma tributaria no recaudará los 8 mil millones de dólares previstos y sólo se espera poder alcanzar un nivel de tributación *nacional total anual* equivalente al 22% del PIB (un porcentaje todavía muy bajo comparado con países del mismo nivel económico) de aquí a... 2018. Si la imposición directa pasa efectivamente de 20% a 25% se acompañará de una sorpresiva disminución para los más altos ingresos individuales. Es más, toda idea de *royalties* sobre los recursos mineros, manera simple de financiar la reforma educacional, ha sido abandonada.

Acerca de este último punto, el fin del lucro, el copago de los estudios por los apoderados y la selección –reivindicaciones centrales del 2011– fueron efectivamente despachados por el Parlamento, con vista a un plazo de 5 años para su aplicación. Una reforma celebrada como histórica por la bancada oficialista. Sin embargo, la desilusión cunde en las direcciones de las organizaciones estudiantiles, hoy en manos de sectores de la izquierda crítica y por esta razón más autónomas frente al Ejecutivo. Mientras tanto, el Observatorio Chileno de Políticas Educativas se pregunta “¿Dónde quedó la reforma universitaria?”, constatando que el proyecto prevé fortalecer tanto el rol de los sostenedores como la subvención estatal al sector privado (Opech, 2014), la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach), Marta Matamala, afirma que el primer año ha sido clarificador de las verdaderas intenciones del gobierno:

Todas las reformas que ha planteado dan luces de lo que efectivamente quiere hacer, hasta dónde quiere avanzar y con quiénes desea trabajar. En 2014 los dejamos hacer, vimos su disposición, calibramos cuánto

pesan la DC y el PC dentro de la Nueva Mayoría, observamos cómo se reagrupa la derecha. En nuestro balance, podemos decir que los dos bloques hegemónicos no nos representan. El gobierno solo ha tomado los titulares de las demandas que los estudiantes hemos enarbolado en estos años, sin asumir el espíritu ni el alcance de lo que estamos pidiendo. La presidenta Bachelet no ha reorientado las políticas públicas, ni está generando cambios sustanciales en educación, vivienda, salud o en otras materias que son importantes para quienes habitamos el territorio (Maldonado, 2015).

¿Esto quiere decir que la “Nueva Mayoría” no ha emprendido ninguno de los cambios en las políticas públicas? No, al contrario, las reformas se multiplicaron, en particular a principios de 2015, y esta agenda legislativa reformista logró canalizar –y desarmar– gran parte los movimientos sociales, estudiantiles en particular, que se quedaron paralizados, sin saber cómo enfrentar el nuevo ciclo, oscilando entre integración en las instancias de “participación” del gobierno y deseo de movilizar a sus bases, sin lograrlo realmente. Dentro de las reformas más comentadas, citemos el proyecto de la “nulidad” de la Ley de Amnistía de 1978, el abandono de algunos megaproyectos energéticos denunciados por organizaciones medioambientales, la ley de protección sobre semillas transgénicas, el proyecto para modificar el código de aguas, la tímida reforma del código laboral (ya citada), la derogación del sistema electoral binominal, el aumento en el presupuesto de la salud y la reforma educacional, la adopción de una ley de unión civil sin distinción de orientación sexual, el proyecto de ley de aborto, el anuncio de la creación de un Ministerio de la Cultura, cambios considerados por la izquierda del gobierno (esencialmente, el PC y la Izquierda Ciudadana) como la confirmación de un rumbo progresista hacia una democratización real. Un paso importante, según estas fuerzas, hacia caminos de rupturas con el modelo neoliberal. No obstante, los hechos son tozudos... El lema gubernamental podría ser más bien el famoso “cambiar todo para que nada cambie” del *Gatopardo* en la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1957). En lo fundamental, el bacheletismo se mantiene en lo que Carlos Pérez S. nombró “disciplinamiento progresista” y que tanto ha marcado a la política chilena desde los años 90:

En estas estrategias, el disciplinamiento de los ciudadanos en torno al modelo pasa por una constante retórica “progresista”. No sólo la precariedad del empleo y el endeudamiento excesivo mantienen a los ciudadanos atados a un sistema que cotidianamente los sobreexplota y niega, también resultan atrapados por la construcción permanente, orquestada desde el monopolio de los medios de comunicación, de ilusiones en torno a la pronta y segura superación de las miserias que “temporalmente” los afligen. El consenso básico de lo que se ha llegado a llamar la “clase política” (que en Chile es el duopolio Alianza–Concertación), apoyado y magnificado casi unánimemente por los medios de comunicación, es un discurso a la vez populista y claudicante, que se mueve desde una peculiar reconstrucción de un discurso “izquierdista” (“todo esto es herencia de la dictadura”), hasta el populismo atemperado por la “prudencia de los expertos” (“estamos avanzando día a día... en la medida de lo posible”) (Pérez, 2013).

Es lo que se avizora por ejemplo con la tan esperada reforma constitucional: la idea de iniciar una Asamblea Constituyente originaria que podría acabar, por fin, con la Constitución de Pinochet, parece cada vez más lejana y el derrotero hoy más aceptado en el gobierno es el de una reforma institucional “desde arriba” y desde el Parlamento, entre “notables” (aunque aprobada por *referéndum*). Los anuncios de octubre de 2015 de la Presidenta confirmando el advenimiento de la futura redacción de una nueva carta fundamental, delegando al Congreso cuatro alternativas para su elaboración deja muy poca posibilidad para una Asamblea Constituyente (por lo *quórum*s que la propia mandataria decidió fijar). Según el historiador Sergio Grez, gran defensor público de una Asamblea Constituyente,

el camino y método propuestos por la Jefa de Estado, en lugar de permitir el pleno ejercicio de la soberanía popular, constituyen un nuevo intento por evitar que esta se exprese, entregando la conducción y el rol decisivo a las mismas fuerzas sociales y políticas que durante un cuarto de siglo de posdictadura han administrado y se han beneficiado del modelo neoliberal y del sistema de democracia restringida, tutelada y de baja intensidad (Grez, 2015).

Por su parte, la directora de la Fundación CREA (centro de estudios cercano a la Unión Nacional Estudiantil, UNE), enfatiza:

Estos (primeros) seis meses, junto con reafirmar que el cambio de ruta neoliberal no vendrá de este gobierno y que las reformas promovidas por ellos no serán ni profundas ni efectivas, nos devela una vez más un problema de fondo: una minoría en Chile decide por todos los demás. Si durante las movilizaciones más importantes del periodo posdictadura no fueron posibles actos de deliberación ciudadana, pero además, si ni siquiera un gobierno con mayoría parlamentaria que para salir electo prometió cambios es capaz de gobernar en función de ellos, es porque en Chile la democracia está enclaustrada. Y el problema no es la existencia de enclaves, ni de cláusulas autoritarias en algunos espacios del poder, sino que son el sentido e intereses desde el cual está pensada nuestra democracia y sociedad entera. Ningún gobierno –con buenas o malas intenciones– podrá hacer frente a las minorías dominantes si no se busca y construye fuerza en el pueblo. Fuerza que no puede en ningún caso ser meramente una expresión de votos, sino que por sobretodo, ha de ser fuerza como expresión organizada y deliberante (Amtmann, 2014).

Esta distancia sideral entre gobierno, casta política y el pueblo ha sido además reforzada por meses de escándalos de corrupción, financiamiento ilícito de partidos, sobornos empresariales, tráfico de influencias y evasión tributaria que corroen casi todo el espectro político institucional (casos Caval, Soquimich y Penta en particular). Y las medidas anunciadas para intentar enfrentar esta situación (Comisión Engel) aparecen como medidas de parche, lejos de solucionar la verdadera dimensión del problema, sacando a la luz sobre todo a dirigentes políticos renuentes a transparentar sus formas de funcionamiento y a un sistema gangrenado por la práctica del “lobby” del gran empresariado (Nexos, 2015).

Por otra parte, en el plano geopolítico, el carácter neoliberal de la política económica del gobierno de Bachelet ha sido ampliamente confirmado por dos hechos de trascendencia mayor para toda América Latina: primero, el ejecutivo confirmó su inscripción dentro de la Alianza del Pacífico, bloque comercial que reúne a Chile, Colombia, México y Perú en una perspectiva librecambista con la región Asia Pacífico (dando la espalda a la integración latinoamericana). Segundo, el gobierno avaló el compromiso de Chile para negociar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (*Trans-Pacific Partnership*, TPP), tratado de libre comercio entre varios países de la cuenca

del Pacífico, fuertemente promovido por Estados Unidos para contrarrestar la influencia China en la región, y al mismo tiempo que amenaza las veleidades bolivarianas en América Latina. Realizado a espaldas de los pueblos y de manera totalmente secreta, este acuerdo multilateral (uno de lo más importante del mundo), en sus más de 26 capítulos de negociación, busca regular a favor de las multinacionales y del mercado global, un gran número de temáticas que van desde el comercio de medicamentos, hasta la legislación laboral, pasando por los derechos de autor, patentes, inversiones estatales, acceso a internet, etc. con consecuencias desastrosas para los trabajadores, la libertad cultural y el medio ambiente.⁴ En agosto de 2015, más de cien partidos y movimientos de la izquierda latinoamericana y del Caribe, integrantes del Foro de Sao Paulo, reunidos en su XXI Encuentro en Ciudad de México afirmaron:

Tanto la Alianza del Pacífico como el TPP buscan impulsar los Tratados de Libre Comercio (TLC) con los países de la cuenca del Pacífico, que han tenido hasta ahora resultados nefastos para nuestros pueblos. Se trata de una creación de los gobiernos de Estados Unidos y de las potencias imperialistas que buscan dividir la integración económica, comercial, política y cultural de los pueblos latinoamericanos y caribeños, expresada en los diferentes procesos propios de Nuestra América.⁵

En la lista de los firmantes, encontramos al PC chileno y al partido de la presidenta de la República, el Partido Socialista: ¿será que frente a la razón de Estado, a la opinión de los sectores conservadores y al lobby empresarial, el progresismo se desvaneció también en el plano de la política exterior? Un sentimiento que parece confirmarse con la política chovinista dirigida hacia Bolivia a pesar de su legítima reivindicación de un acceso soberano al mar en el tribunal de La Haya...

⁴ El economista y premio nobel Joseph Stiglitz se refirió al TPP declarando que “Este es un mal acuerdo, que fue negociado en secreto sólo por las corporaciones [...]. Y el resultado es exactamente el que usted puede predecir de ese tipo de proceso: las corporaciones tendrán un poder incontrolable”. Más información en <www.tppabierto.net>.

⁵ Fuente: <<http://forodesaopaulo.org/declaracion-final-del-xxi-encuentro-del-foro-de-sao-paulo-en-la-ciudad-de-mexico-df>>.

En textos anteriores, propusimos definir el gobierno de la Nueva Mayoría como el producto ambiguo de una época bisagra, potencialmente de transición, pero donde los muertos todavía pesan sobre los vivos, como diría Marx. Una época de gobierno *progresista neoliberal* o *social-liberal maduro*, en un contexto de crisis parcial del sistema de acumulación forjado en dictadura. Como lo recordábamos, en el pasado Tomás Moulian, desde una óptica gramsciana, ha insistido en el “transformismo” sociopolítico de la posdictadura:

“Transformismo” a las operaciones que en el Chile actual se realizan para asegurar la reproducción de la “infraestructura” creada durante la dictadura, despojada de las molestas formas, de las brutales y de las desnudas “superestructuras” de entonces. El “transformismo” consiste en una alucinante operación de perpetuación que se realizó a través del cambio de Estado. Este se modificó en varios sentidos muy importantes, pero manteniendo un pacto sustancial. Cambió el régimen de poder, se pasa de una dictadura a una cierta forma de democracia, y cambió el personal político en los puestos de mando del Estado. Pero no hay un cambio del bloque dominante, pese a que sí se modifica el modelo de dominación (Moulian, 2002: 140-141).

Mantenemos que la coyuntura político-institucional que se abrió con la elección de Michelle Bachelet, tomando en cuenta las modificaciones de las relaciones entre clases populares y el bloque en el poder como también la nueva agenda legislativa de reformas, puede definirse como una etapa última –¿terminal?– del transformismo capitalista neoliberal en su fase avanzada y madura.

A modo de conclusión.

¿Derrumbe del modelo o construcción estratégica? Los desafíos de la creación de alternativas ecosocialistas “raízales”

Hace 41 años nos despertamos de golpe. De golpe de Estado. Un golpe a las costillas, al bajo vientre, a los testículos. Qué se yo: a los dientes. Un golpe de madrugada que nos dejó tendidos en el suelo, boca arriba nos dejó, sin entender lo que pasaba. Magullados de golpe de Estado despertamos y de golpe de Estado nos levantamos y de golpe en golpe nos asesinaron y de golpe en golpe nos torturaron y de golpe en golpe nos desaparecieron. Y nosotros aún sin comprender cómo era posible que sucediera en este país del fin del mundo donde nunca pasaba nada, o al menos así nos habían hecho creer. Pero vivíamos una ilusión de país porque nada más bastaba mirar el cristal de la historia para ver reflejado en sus retazos de vidrio las matanzas de indígenas o las masacres obreras. Y siempre la clase política y siempre los ricos y siempre los militares. Como hace 41 años cuando nos despertamos de golpe. De golpe de Estado (Tricot, 2014).

La fuerza de propulsión que representa para las clases dominantes y el imperialismo esta triste fecha del 11 de septiembre es todavía una herida abierta en el corazón de la sociedad del Chile actual. La honda resiliencia del entramado de poder que se creó en los años de la dictadura cívico-militar muestra día a día su capacidad de adaptación y ciertos grados de flexibilidad, hasta aceptar la necesidad de reformas “progresistas” o la inclusión del Partido Comunista en el gobierno, pero siempre bajo la cuidadosa vigilancia de los poderes fácticos económicos, mediáticos y militares. En su balance sobre las teorías críticas del neoliberalismo, Stéphane Haber puntualiza tres maneras de acercarse a esta experiencia histórica: desde el estudio de la ideología y su autonomía relativa; desde la política como forma de “gubernamentalidad” y, para terminar, como producto de transformaciones socioeconómicas radicales dentro del modo de producción capitalista (Haber, 2012). En realidad, el corto viaje que acabamos de hacer a través de las diferentes aristas

del neoliberalismo maduro chileno confirma la hipótesis según la cual sería una ilusión querer “segmentar” nuestra aprensión de esta historia: el neoliberalismo aparece como fase actual del capitalismo tardío y un régimen de acumulación que abraza, de manera desigual y combinada, todos los campos sociales, el conjunto de la sociedad y sus actores. Como lo recordaba György Lukács, el capitalismo es un proceso que domina desde la totalidad hacia lo específico y desde lo específico hacia la totalidad. Sin embargo, considerando que el neoliberalismo es un fenómeno planetario que corresponde a la fase de la mundialización del capital financiero (Chesnais, 1997), es forzosamente una experiencia plural ya que sus formas de “aterrizar” en los países es variada en el plano temporal, social y político.

Estudiar el caso chileno permite así designar un caso paradigmático de acumulación flexible, donde se entremezclan algunas huellas de los “viejos espíritus” del capitalismo latinoamericano con los nuevos vientos del sistema socioeconómico nacido de la destrucción-creación radical que siguió la contrarrevolución de 1973. Con todo, se trata de un modelo de acumulación periférico, sumamente dependiente de los circuitos de intercambios internacionales y de la exportación de materias primas, algo que poco tiene que ver con el “nuevo espíritu” del capitalismo neoliberal céntrico (*managerial*, más “horizontal”, basado en la autonomía individual, innovaciones y funcionamiento en redes), descrito por los sociólogos franceses Luc Boltanski y Eve Chiapello (Undurraga, 2014: 292-297). En Chile, prevalecen fuertes jerarquías laborales, un control estrecho y muy jerarquizado del asalariado y, como lo hemos ido insistiendo a lo largo del presente texto, fundamentalmente una explotación, precarización y subsunción real del trabajo férreas, única condición para poder explicar el núcleo duro del modelo del “jaguar” suramericano y sus niveles de acumulación de plusvalía.

A esta relación capital/trabajo que permitió el surgimiento de un empresariado oligopólico, fuertemente conectado al capital transnacional y al imperialismo estadounidense, habría que añadir otros antagonismos esenciales y que no hemos podido desarrollar del todo aquí, a pesar de su importancia. Primero, el giro ecoterritorial extractivo del neoliberalismo y la contradicción capital/naturaleza ya brevemente mencionado. El capitalismo chileno, como –en diferentes grados– sus pares latinoamericanos, representa la apertura de un intenso ciclo de concentración en actividades

primo-exportadoras, mineras y agropecuarias, en desmedro de todo valor agregado o industrialización. En este entramado, el componente energético es la clave, pues representa una auténtica condición material de todo el sistema extractivista y otro factor de producción esencial, con el capital, el trabajo y los recursos naturales. Significa también un talón de Aquiles para la ideología del “crecimiento infinito” de la casta política y empresarial local, de ahí su obsesión por implementar varios megaproyectos de producción y transporte energéticos, en particular hacia los centros mineros del norte, sin preocuparse por sus colosales impactos ecológicos. Segundo, es indispensable subrayar hasta qué punto el trabajo femenino (a menudo precario e informal), la feminización de los cuidados y el trabajo de reproducción representan otra condición vital del metabolismo del neoliberalismo. Sin estas condiciones de producción y de reproducción, ningunos de los parámetros analizados anteriormente podrían existir. Para la clase dominante chilena, una manera de mantenerlos es alimentando un patriarcalismo ultraconservador y un conjunto de violentos estereotipos machistas, legitimados en el plano mediático y político, lo que explica —entre otras cosas— la ausencia de ley de aborto hasta el año 2015.¹ Tercero, sería necesario indagar mucho más el tema del verdadero colonialismo interno y opresión racista que organiza el Estado chileno hacia el pueblo mapuche, combinado con varios mecanismos de “multiculturalismo neoliberal” que pretende “integrar” a los indígenas a través de las redes del mercado. Cuarto, mencionemos aquí la cuestión de las fuerzas armadas, por lo general poco tratado por los estudios críticos pero que siguen siendo una amenaza permanente para todo proyecto de emancipación, ya que los militares se consideran los “garantes” del modelo. Es más, numerosos oficiales ligados a la dictadura y responsables de la represión siguen activos o retirados pero libres (así como no pocos

¹ En enero de 2015, y a propósito del tímido proyecto de ley del gobierno sobre aborto en caso de peligro vital para la madre, inviabilidad del feto o violación, el diputado oficialista de la DC, Pablo Lorenzini, aseveró tranquilamente en los medios: “¿Qué es violación? Producto de algo que no quiso. Hay miles de casos de mujeres que tienen relaciones porque, a lo mejor, tomaron un traguito de más o estaban apenadas, o por las circunstancias que pasan en la vida, que el hombre es muy hábil y las convenció y ella no quería, en ese caso ¿es violación también?”... 2015 *La Tercera* (Santiago). En <www.latercera.com/noticia/politica/2015/02/674-615787-9-lorenzini-hay-mujeres-que-tienen-violaciones-porque-a-lo-mejor-tomaron-un.shtml>.

civiles), lo que vuelve a plantear la reivindicación de la democratización de las FFAA, y de verdad y justicia plena “ahora ya”.

El escenario actual devela así la compleja maquinaria de la *vía chilena al neoliberalismo*, que forjó un capitalismo “maduro” o “avanzado”, iniciado hace casi cuatro décadas, donde las herencias autoritarias siguen presentes, cohabitando con el transformismo político que ha marcado la política institucional desde 1990. Esta maduración se da en una sociedad profundamente modificada en su fisonomía y sociogénesis, como también en la relación sociedad-Estado, en las subjetividades y sentidos comunes, en la cultura popular, en la constitución de sus movimientos sociales. No obstante, desde 2006 y más aun desde 2011, la fábrica de la ciudadanía-*credit card* se suspendió en favor de un potente movimiento social por la educación y de una politización conflictiva “desde abajo” que contagió varios ámbitos del mundo social. Este acontecimiento disruptivo y transversal abrió una fuga en los estanques del modelo, provocó una brecha en el sólido edificio de la democracia neoliberal tutelada: se comenzó a “fisurar” el gigante y su hegemonía.² Comenzaron a recorrer los lugares de trabajo, los barrios de las clases populares y sectores medios, ideas como “no al lucro y los abusos empresariales”, “(re)nacionalización del cobre”, “Asamblea Constituyente”, “abajo la educación de Pinochet”... Otros actores entraron también en este baile de resistencias plurales: ecologistas, pueblos indígenas, feministas, pobladores, trabajadores. Estos primeros embates de la lucha de clases después de décadas de “*pax* neoliberal” no pudieron imponer sus reivindicaciones, pero no fueron derrotados. Un dato que no es menor y anuncia futuros conflictos. Esta fisura también impactó al bloque en el poder y salieron a la luz pública diversas pugnas interburguesas que hacen más débil el sistema en su conjunto, sin que ninguna fracción de las clases dominantes haya logrado por el momento resolver estos conflictos “en las alturas”. Esta debilidad se ha visto reforzada por el contexto de crisis capitalista mundial, el frenazo de la economía China y, en particular en Chile, por la fuerte caída del precio del cobre: si en la llamada “época dorada” –entre 2006 y 2008– los ingresos gracias a la empresa pública cuprífera Codelco representaban el 20%

² Ver el film documental de Julien Terrié: *Fisuras (del modelo chileno)* (Chile/Francia: France Amérique Latine, 2014). En: <www.youtube.com/watch?v=Oby7IWNNVSE&index=8&list=PL0AA521210635157C>.

de los ingresos fiscales totales, en el primer trimestre del 2015 se redujo a 1,6%... Una situación que ha significado un mayor nerviosismo en las filas del empresariado y de sus representantes parlamentarios o mediáticos.

Todo lo que el país conoce como intelectuales neoliberales o conservadores tradujeron en sus escritos cierta preocupación frente a tanto desorden en las calles y a la posible reactivación de las luchas de los trabajadores. Hasta anunciar en un libro, con no poca (auto)convicción, “el regreso del modelo”, afirmando que “no es que la gente no quiera más el modelo. Lo que pasa es que quiere más del modelo” (Larraín, 2012). Donde acierta en parte el director de la *Fundación Libertad y Desarrollo* con este tipo de proclama, es que basta con recorrer hoy, las ciudades y pueblos de Chile, hablar y compartir con sus pobladores, para entender que, a pesar de todo, el modelo no está herido de muerte. El mito de la sociedad abierta de “oportunidades”, de la “clase media aspiracional”, de los pequeños emprendedores exitosos y del consumo para todos, está culturalmente enraizado, alimentado por miles de actos cotidianos, por los medios masivos de comunicación, las telenovelas y poderes constituidos por dentro y, sobre todo, por fuera del Estado neoliberal. Tal vez no sea lo que nos guste pensar, pero de la *fisura al derrumbe*, el salto es grande, muy grande y la historia muestra que el capitalismo no se desvanece por sí sólo: la crisis es incluso su naturaleza, su esencia misma, su motor. Inspirándose de las categorías de Raymond Williams, teórico marxista de la subjetividad y de la cultura, uno podría sugerir que estamos frente a una hegemonía neoliberal agrietada pero no residual, y en ningún caso “emergente”, no lo suficiente fisurada como para hablar de una fractura letal de su dominación ideológica y mucho menos, por supuesto, del mismo modo de producción capitalista (Williams, 1980).³ El derrumbe de tal dominación no se puede proclamar, menos aun desde la academia, sin haber reunido las condiciones estratégicas y políticas mínimas para su concreción y, a la vez, comenzar a reelaborar la capacidad social y comunitaria de las y los de abajo de forjarse como sujeto popular transformador con la capacidad de inventar, crear colectivamente otro mundo... En resumen, las teorías del derrumbe tienden a confundir dos planos: crisis de legitimidad del sistema político y crítica a los abusos empresariales (e incluso al modelo en su globalidad) con el desplome del

³ Esta reflexión debe mucho a los comentarios de Luis Martín-Cabrera.

sistema capitalista neoliberal o más bien la posibilidad de echarlo abajo. De hecho, son dos realidades bien diferentes. Es más, la importancia del poder acumulado por las fracciones neoliberales que dominan el bloque en el poder hace que un “simple” panorama posneoliberal de tipo nacional-popular o “populista”, como lo están viviendo varios países del “volcán latinoamericano” sea poco probable a corto plazo. Sobre todo cuando los primeros balances del “giro” progresista en el resto del continente, abierto en 1998 por la elección de Hugo Chávez, recalcan –una vez más– que las victorias electorales con un amplio apoyo popular no bastan para cambiar las relaciones de fuerzas frente al capital y construir alternativas viables (Gaudichaud, 2010).

En Chile, la capacidad estabilizadora que está demostrando el gobierno de la Nueva Mayoría es sólo una confirmación de las múltiples maneras que tiene el neoliberalismo avanzado de sobrevivir a los “agitados momentos” nacionales, continentales o mundiales (y la burguesía chilena de superar sus divisiones). El propio Alberto Mayol, el 18 de agosto de 2014, llegó a preguntarse si no se estaría viviendo un “derrumbe” de... su teoría del derrumbe, presentada tres años atrás. Confesó incluso “sentirse solo”, pero afirma:

El escenario de impugnación que se abrió en 2011 es estructural porque expresa contradicciones fundamentales de la dimensión económica de la sociedad: el mecanismo de integración es el consumo y los salarios son bajos, por lo que la deuda es el corazón del modelo económico en su aparición cotidiana. Los chilenos ven hoy la deuda no como un crédito (el acto de confianza de un poderoso), sino como un requerimiento de la vida cotidiana donde se acepta una estafa (los estudios cualitativos son muy claros en esto). Por tanto, la escena de la deuda está deslegitimada (Mayol, 2014).

De nuevo un salto de la crisis de legitimidad (en este caso de la deuda) a la crisis estructural del modelo... De manera más convincente, y más acotada, podemos constatar que desde 2011 se gestó un cuestionamiento a la ideología dominante y sus verdades, pero limitado:

el proceso de ampliación de los conflictos y la rearticulación de los movimientos sociales si bien corresponde a un proceso de repolitización se puede ubicar, desde el punto de vista de sus efectos políticos, solo como una “fisura ideológica”. Es decir, una suspensión parcial y

momentánea de los mecanismos discursivos que favorecen la reproducción del sistema de dominación, que se expresa en críticas parciales y fragmentadas a aspectos acotados del sistema social y no como una crítica generalizada al modelo (Ríos, 2015).

A corto plazo, las operaciones transformistas del bacheletismo intentan responder a este desconcierto del bloque dominante, aunque las encuestas de opinión muestran un claro decaimiento de la insumergible figura carismática de la Presidenta. La propuesta de la Nueva Mayoría es reformar pero finalmente en la continuidad de los gobiernos anteriores de la “vieja” Concertación, y con sus personeros políticos en los puestos claves,⁴ enfrentando un periodo donde se entremezclan fuerte crítica desde la derecha (tanto política, como económica), tensiones internas en la coalición entre conservadores y progresistas, pero también presión desigual desde las organizaciones sociales (pobladores y deudores habitacionales, pueblo mapuche, sindicatos clasistas del cobre o portuarios, sindicatos estudiantiles). Con los movimientos, el gobierno debe jugar tanto en el plano de la consulta-cooptación (con la ayuda de los nexos que aún conserva en el espacio de los movimientos sociales), como desde la coacción-represión estatal. En noviembre de 2013, en una nota editorial para *El Mercurio*, Eugenio Tironi, destacado intelectual social-liberal, lo expresó con todas sus letras y algo de lirismo. Según él, con la presidenta Bachelet, “la razón de ser de las instituciones políticas no es defenderse de las mayorías, sino canalizar sus anhelos, que en el caso del Chile actual es el cambio. Reforma o Revolución: un viejo dilema que vuelve a tomar actualidad”.⁵ En realidad, el panorama chileno parece todavía muy lejos de la temida “revolución” invocada por Tironi o incluso de una “coyuntura prerrevolucionaria” como lo mencionó,

⁴ Un hecho correctamente destacado en el último libro de Mayol que describe el peso del “fantasma” de la Concertación en el gobierno: “Si un pacto de gran profundidad no pudo contener transformaciones sin retroceder frente a las presiones fácticas, menos lo puede hacer una institucionalidad que es menor en términos de complejidad. Por necesidad simplemente física, la Concertación (su inercia) primará sobre la Nueva Mayoría” (Mayol, 2014).

⁵ *El Mercurio* 2013 (Santiago) 19 de noviembre.

de manera apresurada, el historiador Gabriel Salazar en 2011.⁶ Si la época de cambio es innegable, en una dirección llena de nubes, claroscuros y contradicciones, por el momento, está lejos de alcanzar un cambio de época. Mirando de reojo a países vecinos como Bolivia, Argentina, Ecuador, en los cuales la crisis de legitimidad del modelo neoliberal se transformó en crisis de hegemonía con grandes movilizaciones y rupturas institucionales, el empresariado busca evitar un escenario similar. La crisis y recomposición en curso en las derechas, el apoyo público a Bachelet de destacadas figuras de las fracciones financieras de la burguesía, permiten ver que las elites piensan encontrar nuevos aires y posibles correcciones sustentables para el régimen. Las grietas del modelo podrían incluso provocar sobresaltos y reacciones violentas por parte de los de “arriba”.

Al terminarse la etapa hegemónica del neoliberalismo, la dominación neoliberal se resiste a morir. Las resistencias al cambio de época se bifurcan entre reacción y revolución pasiva: la reacción violenta que se asoma en el retorno de prácticas represivas focalizadas y la revolución pasiva que asume el rostro de gobiernos que defienden la continuidad mediante correctivos conservadores (Modonesi, 2008: 139).

Como lo hemos expuesto, si bien es cierto que el término de la educación mercantil, la abolición de las deudas ilegítimas o la recuperación de un sistema de salud público son imprescindibles para comenzar a pensar alternativas concretas en el Chile de hoy, no se puede dejar de considerar de manera prioritaria la cuestión laboral: o sea, las condiciones materiales concretas de millones de personas. El periódico digital *El Mostrador* recordó que el 87% de los asalariados chilenos no está satisfecho con su empleo (Urriola, 2014). Hay allí una gran potencialidad política desestabilizadora del capital, pues el control del trabajo ajeno, de su plusvalía y excedentes sigue siendo una condición *sine qua non* de este régimen de acumulación. Asimismo, construir alternativas pensando en la existencia de un hipotético “fin del trabajo” (como lo proclamó Jeremy Rifkin) o de un “adiós al proletariado” (según André Gorz o Alain Touraine) son meramente engaños teóricos y un callejón sin salida. El trabajo (y sus conflictos) atraviesa “como una lanza todo

⁶ Declaración del premio nacional de Historia durante una charla en la Universidad de Los Lagos. En: <<http://metiendoruido.com/2011/09/gabriel-salazar-vivimos-una-coyuntura-pre-revolucionaria/>>.

el tejido social” de la historia de Chile, une lo económico y lo político con las diversas posibilidades “de resistir, organizarse y superar la realidad actual, no sólo la vida política, también la vida cotidiana y doméstica, esa realidad material olvidada –con precisa razón– por el fetiche de la institucionalidad política” (Narbona, Páez, 2014). Ricardo Antunes enfatiza por su parte:

a pesar de la heterogeneización, complejización y fragmentación de la clase obrera, la posibilidad de una efectiva emancipación humana aún puede ser concretada y viabilizada socialmente a partir de revueltas y rebeliones que se originan centralmente en el mundo del trabajo; un proceso de emancipación simultáneamente *del* trabajo, *en el* trabajo y *por el* trabajo. Esto no excluye ni suprime otras formas importantes de rebeldía y contestación. Pero, viviendo en una sociedad que produce mercancías, valores de cambio, las revueltas del trabajo tienen estatuto de centralidad. Todo un amplio abanico de asalariados que comprende el sector servicios, además de los trabajadores “tercerizados”, los trabajadores del mercado informal, los “trabajadores domésticos”, los desempleados, o los subempleados, etc., pueden sumarse a los trabajadores directamente productivos y por eso, actuando como clase, constituirse en segmento social dotado de mayor potencialidad anticapitalista. Del mismo modo, la lucha ecológica, los movimientos feministas y tantos otros nuevos movimientos sociales, tienen mayor vitalidad cuando consiguen articular sus reivindicaciones singulares y auténticas con la denuncia a la lógica destructiva del capital (Antunes, 2000).

Ahora bien, recalcar esta perspectiva no significa caer en el economicismo de antaño cuando la clase obrera industrial era “El Sujeto” único y teleológico de la revolución o buscar la subordinación sistemática de las diferentes luchas sociales a un movimiento obrero que debe reconstruirse. Incluso habría que plantear y recordar, volviendo a Marx, que fundamentalmente y estratégicamente se trata no sólo de construir emancipaciones desde el trabajo o desde lo subalterno, pero *in fine* en *contra* del trabajo, eso es emanciparse del trabajo asalariado y pensar el *más allá* del trabajo dependiente o sumiso... Por otra parte, es menester insistir en la indispensable autonomía de los diferentes actores subalternos para abandonar diversas visiones vanguardistas o “verticalistas” de un marxismo ortodoxo mal interpretado (y todavía presente en parte de las izquierdas). Más bien el desafío sería

constituir *frentes sociopolíticos* para la conformación de un bloque contrahegemónico, capaz de unificar amplias franjas de los asalariados, sectores medios precarizados, jóvenes diplomados y clases populares desde “la diagonal de las luchas de clases”, apoyándose en una dialéctica articuladora de distintas explotaciones, identidades (individuales y colectivas), opresiones (culturales, patriarcales, ecológicas) para la construcción de convergencias donde el capital es, finalmente, “el principio activo central” (Bensaïd, 2011). Dardot y Laval, proponen pensar la revolución del siglo XXI como “revolución de los comunes”, donde la praxis de las apropiaciones sociales y colectivas son las que importan y tendrían que federarse para instaurar sociedades basadas sobre el valor de uso y no el valor de cambio, y en la institución de una política de lo común, tanto contra la propiedad privada como frente a la tiranía de la burocracia estatal (Dardot, Laval, 2014). Pero, ¿qué significaría la construcción de esta “razón de lo común”?

Es una razón política, un modo de conducción de las conductas *opuesto al de la competencia*. El sentido profundo de lo “común” como principio político es el siguiente: no hay más obligación (*cum-munus*: co-obligación) que la que procede de la coparticipación en la deliberación y la decisión. La noción de “política” toma entonces un sentido distinto a una actividad del orden del monopolio de los gobernantes, aunque sean bien intencionados: la de una igualdad en el hecho de “tomar parte” en la deliberación y la decisión por la cual las personas se esfuerzan por determinar lo justo. La coproducción de normas o reglas que compromete a todos los que participan en una actividad. Así reconectamos con la idea aristotélica de la política” (Ávila; Malo y Fernández-Savater 2014).

En su último libro sobre las “diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo”, David Harvey avanza algunas propuestas similares. El geógrafo marxista llama a la fundación de regímenes de derechos sobre lo común –haciendo especial hincapié en el conocimiento humano y la tierra como los bienes comunes más cruciales que poseemos– “cuya creación, gestión y protección quedaría en manos de asambleas y asociaciones populares”. Propone la “disolución” de la oposición capital/trabajo “por medio de productores asociados que deciden libremente qué, cómo y cuándo producirán

en colaboración con otras asociaciones y con el objetivo de la satisfacción de las necesidades sociales comunes” (Harvey, 2014: 285-286).

El debate queda abierto y da para mucho. Evidentemente, partir de tales presupuestos generales es sólo el comienzo de un arduo y pedregoso camino. Primero, porque el movimiento social-popular en Chile está todavía muy fragmentado y porque la dictadura, como las condiciones concretas del trabajo flexible en democracia, conllevaron la destrucción de una de las clases obreras más organizadas de América Latina. Segundo, porque se trata de apoyarse en las lecciones de los nuevos repertorios de lucha que nacieron en el seno de la juventud, del movimiento de pobladores, del pueblo mapuche y de las incipientes experiencias de recomposición sindical (ocupación de espacios públicos y de trabajo, huelgas por solidaridad, control territorial-comunitario) para extenderlos al conjunto de los actores sociales. Tercero, porque hay que seguir agitando y encontrar nuevos temas de movilización unitarios para reanudar las demandas de los asalariados con las de los estudiantes y de los sectores medios precarizados, las de los pueblos indígenas con las de los pobres de la ciudad, etc., en torno a objetivos alcanzables: es decir establecer un “programa de urgencia social y democrática”, sin depreciar el largo plazo del horizonte anticapitalista. Dentro de este programa, la derogación *real y definitiva* del código laboral de 1979 y su reemplazo por uno elaborado por y con las y los trabajadores y sus organizaciones; la (re) nacionalización del cobre y la inversión de sus beneficios en los servicios públicos y en un plan de transición posextractivista sustentable; el fin de las AFP y la recuperación de un sistema de previsión y de pensión solidario; una educación de calidad 100% pública (con democratización comunitaria); y la creación de una Asamblea Constituyente popular originaria con activa participación, son cinco puntos que, nos parece, podrían servir de base para la discusión-organización colectiva, sin olvidar la reconquista del derecho a la vivienda, a la energía y al agua como bienes comunes imprescriptibles.

Pero, último elemento, el escenario actual es complejo también porque la coyuntura nos obliga a reconstruir palancas políticas transformadoras y a retomar discusiones estratégicas enterradas en el seno de las izquierdas chilenas. Es que no sólo el sindicalismo está atomizado o la ciudadanía atrapada por el endeudamiento anómico, son también las izquierdas críticas, revolucionarias, a menudo grupusculares, las que están fragmentadas o ancladas en un pasado

heroico y doloroso. Izquierdas que se encuentran en buena medida alejadas de gran parte de la realidad de la gente y sus problemas diarios, mientras las iglesias evangélicas o pentecostales se expanden en los barrios y en el campo de todo el país. En un momento en que la crisis capitalista mundial ya llegó a los países del Sur y que vientos de recesión comenzaron a rugir encima de la geografía económica del “jaguar chileno”, el drama es que no existe ninguna organización política capaz de proponer caminos unitarios revolucionarios, “abajo” y a la “izquierda”, a una escala masiva y popular. De hecho, la última elección presidencial profundizó aún más las divisiones existentes. No obstante, son numerosos los signos que incitan al optimismo. Se ha levantado una generación que ha perdido el miedo y que busca derroteros antisistémicos y alternativos. Podríamos decir incluso que buscan “respuestas socialistas rai-zales”. La gran cantidad de colectivos barriales, revistas críticas, debates universitarios, talleres de educación popular, trabajo de formación sindical, en particular en torno a la noción de “poder popular” o para rescatar la historia de los Cordones industriales (Gaudichaud, 2004), evidencia una ebullición en construcción, portadora de futuros emancipatorios. Es cierto que en esa nueva camada de rebeldes todavía se hace esperar más apertura hacia temáticas debatidas en el resto de continente: feminismos poscoloniales, buen vivir y agroecología comunitaria, integración regional de los pueblos, democratización del “latifundio mediático”, autogestión obrera, cooperativismo y economía social, plurinacionalismo constituyente y derecho a la ciudad, entre otras. Pero, cuando se conmemoran los 40 años de la muerte en combate de Miguel Enríquez (líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR), diferentes corrientes, anarquistas, libertarias, que se reivindicán del “mirismo”, trotskistas, antiimperialistas, guevaristas, autonomistas, indígenas consideran –con razón– que es momento de renovar los aires ensimismados de la izquierda.

Sin embargo, hay que reconocer que los obstáculos son grandes, ya que más allá de los estrechos espacios de esas organizaciones, prima el rechazo ciudadano a la política... y a los políticos. Incluso en el seno del movimiento social todavía estamos en lo que Daniel Bensaïd llamaba “momento utópico” (Bensaïd, 2013). Varios sectores movilizados en 2011, agrupaciones, sindicatos, etc. se mantienen en la “ilusión de lo social”: creen en la idea-fuerza según la cual los movimientos de base y sus futuras confluencias serán suficientes para derrotar el neoliberalismo. Apuestan a la posibilidad –como

lo propone el creativo teórico mexicano-irlandés John Holloway— que la revolución sea un “río que crece”, cada vez más grande, donde se junten todas las rebeldías, el *saber-hacer* de los movimientos, las brechas de las experiencias comunitarias, las fuerzas de las luchas locales para terminar de *agrietar el capitalismo* y terminar con el trabajo enajenado. Se trata de crear otro mundo desde el “ahora y aquí”, sin tomar el poder del Estado y sus maniobras burocrático-institucionales (Holloway, 2011). Siempre valorando los aportes imprescindibles de la experimentación desde el presente, las “emancipaciones en construcción” en los intersticios de nuestras sociedades y las múltiples “utopías concretas” que cabalgan por Nuestra América (Gaudichaud, 2015), pensamos que no bastará ese cúmulo de diversas grietas, para tumbar el muro blindado y armado del capital. El proceso chileno sólo confirma la gran solidez del modelo y su increíble plasticidad, capacidad de adaptación y fuerza centralizadora, poder de coerción y dominio de múltiples recursos simbólicos. En este sentido, se hace urgente rescatar la política “como arte estratégico”, como potencia organizacional distinta de lo social y de una simple colección de demandas específicas. O sea, recuperar un futuro capaz de representar un proyecto al servicio de lo común, capaz de plantearse como horizonte nada menos que de un cambio *civilizatorio* frente al apocalipsis climático y medioambiental planetario en el cual ya estamos insertos. Eso es pensar una ruptura revolucionaria en nuestras vidas y del sistema, individual y colectiva:

El pasaje del “progreso destructivo” capitalista al ecosocialismo es un proceso histórico, una transformación permanentemente revolucionaria de la sociedad, de la cultura y de las mentalidades. Esta transición debe llevar, no solo a un nuevo modo de producción y a una sociedad igualitaria y democrática, sino también a una *modo de vida* alternativo, a una nueva *civilización* ecosocialista, más allá del reino del dinero, más allá de los hábitos de consumo artificialmente producidos por la publicidad, y más allá de la producción sin límites de mercancías innecesarias y/o nocivas para el medio ambiente. Es importante enfatizar que semejante proceso no puede comenzar sin una transformación revolucionaria en las estructuras sociales y políticas, y el apoyo activo, por una vasta mayoría de la población, a un programa ecologista. El desarrollo de la conciencia socialista y la preocupación ecológica es un proceso, donde el factor decisivo es la propia experiencia de lucha

popular, desde confrontaciones locales y parciales al cambio radical de la sociedad (Löwy, 2009).

Al compás de la dinámica de las nuevas luchas de clases, y a más de 40 años de la derrota trágica de la Unidad Popular, surge en Chile la necesidad de reconstruir una izquierda anticapitalista que mire, con respeto fraternal y distancia crítica, el pasado del movimiento obrero y revolucionario para proyectarse hacia nuestros tiempos. La enorme bisagra existente entre la creciente politización de lo social y la ausencia de herramientas políticas genuinas para acumular fuerzas, hace parte de las grandes debilidades intrínsecas de la naciente reconstitución de la conflictividad antagónica actual.

Debemos refundar y reinventar las formas partidarias (poco importa si les damos ese nombre) es decir, los instrumentos democráticos de centralización de la lucha política. La centralización no es una determinación administrativa, sino un proceso orgánico por el cual se concentran energías, se hacen experiencias comunes, se delibera de conjunto, se decide y se revisan las decisiones según mecanismos democráticos. No podemos predeterminedar qué forma tendrán las organizaciones revolucionarias del próximo periodo al margen de la práctica social, aunque sí formular algunos criterios e hipótesis organizativas a partir de la experiencia política acumulada. La superación de todo monolitismo ideológico y la apertura al pluralismo político, una fuerte sensibilidad hacia la “cuestión democrática”, el respeto a la autonomía del movimiento social y a la multiplicidad de expresiones organizativas, parecen ser las coordenadas mínimas para la estructuración de corrientes políticas que sean dignas de nuestra época (Martín y Mosquera, 2014).

Sin estas herramientas, el derrumbe del modelo chileno será sólo ilusión o, si viene el cambio, se hará a favor de los de siempre...

Bibliografía

- Acuña, Manuel 2014, “Entre el capital bancario y el comercial. Época de reformas y definiciones”, *Rebelión* (Madrid) 14 de junio. En: <www.rebelion.org/noticia.php?id=185962&titular=%E9poca-de-reformas-y-definiciones->.
- Agacino, Rafael 2013a, “Crisis política en Chile: Debate” en *Revista del Grupo de Estudios Marxistas* (Santiago: Quimantú) N°1, mayo.
- Agacino, Rafael 2013b, “Movilizaciones estudiantiles en Chile: anticipando el futuro” en *Educação em revista* (Marília: Universidade Estadual Paulista) Vol. 14, No 1. En: <www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/educacaoemrevista/article/download/3294/2552>.
- Agacino, Rafael 2006, *Hegemonía y contra hegemonía en una contrarrevolución neoliberal madura. La izquierda desconfiada en el Chile post-Pinochet*, Documento de trabajo (Buenos Aires: Clacso). En: <www.plataformanexos.cl>.
- Agencia EFE 2013, “Chile es un ejemplo en reducción de la pobreza en América Latina, según la OCDE” (Madrid) 23 de abril. En: <www.eluniverso.com/2013/04/23/1/1361/chile-un-ejemplo-reduccion-pobreza-america-latina-segun-ocde.html>.
- Aguiar, Santiago 2010, *Elementos de la estructura de la clase trabajadora en el Chile actual* (Santiago de Chile: Estudios del Trabajo). En: <www.estudiosdeltrabajo.cl>.
- Aguiar, Santiago 2009, *La flexiprecarización. Innovación, Clase obrera y Nueva Precariedad*. (Santiago de Chile: Estudios del Trabajo). En: <www.estudiosdeltrabajo.cl>.
- Álvarez, Rolando 2015, *Gremios empresariales, política y neoliberalismo. Los casos de Chile y de Perú (1986-2010)* (Santiago: Lom).
- Amtmann, Carla 2014, “La democracia enclaustrada” *Radio Universidad de Chile*, septiembre. En: <radio.uchile.cl/2014/09/24/la-democracia-enclaustrada>.
- Antunes, Ricardo 2003, *¿Adiós al trabajo? Ensayo sobre las metamorfosis y el rol central del mundo del trabajo* (Buenos Aires: Herramienta).

- Antunes, Ricardo 2000, “La centralidad del trabajo hoy” en Revista *Papeles de Población* (México: Universidad Autónoma del Estado de México) vol. 6, núm. 25, julio-septiembre. En: <www.redalyc.org/articulo.oa?id=11202505>.
- Aravena, Antonio y Núñez, Daniel 2011, “Los gobiernos de la Concertación y el sindicalismo en Chile” en De la Garza Toledo, Enrique (ed.) *Trabajo y sindicatos en los gobiernos de izquierda en América Latina* (OIT: Revista *Trabajo*) N°8, 2011, p. 113-133.
- Aravena, Antonio y Núñez, Daniel (ed.) 2009, *El renacer de la huelga obrera en Chile. El movimiento sindical en la primera década del siglo XXI* (Santiago: ICAL).
- Araujo, Kathya y Martuccelli, Danilo 2013, “Individu et néolibéralisme : réflexions à partir de l’expérience chilienne” en *Problèmes d’Amérique latine* (París) N° 88.
- Arellano, Alberto 2014, “La batalla por el derecho a la propiedad que se avecina con la reforma al Código de Aguas”, *CIPER* (Chile) 13 de agosto. En:<www.ciperchile.cl/2014/08/13/la-batalla-por-el-derecho-a-la-propiedad-que-se-avecina-con-la-reforma-al-codigo-de-aguas/>.
- Armstrong, Alberto y Águila, Rafael 2011, “Evolución de las huelgas laborales en Chile, 1979-2009” en Revista *Administración y Economía* (Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile) N° 69.
- Atria, Fernando 2013, *La constitución tramposa* (Santiago: Lom).
- Ávila, Débora; Malo, Marta y Fernández-Savater, Amador 2014, “Laval y Dardot: El neoliberalismo es una forma de vida, no sólo una ideología o una política económica”, *El Diario* (Madrid). En <www.eldiario.es/interferencias/neoliberalismo-ideologia-politica-economica-forma_6_312228808.html>.
- Azócar, Carlos 2013, “Movimiento estudiantil y elecciones en Chile”, *OSAL* (Buenos Aires: Clacso) Año XIV, N° 34, noviembre.
- Azócar, Carla y Azócar, Carlos y Mayol, Alberto 2013, *El Chile Profundo: modelos culturales de la desigualdad y sus resistencias* (Santiago: Liberalia)
- Azócar, Carla y Azócar, Carlos y Mayol, Alberto 2011, “Siete Fenómenos sobre Educación y Desigualdad en Chile” en *Documento de trabajo Centro de Investigación en Estructura Social*, Universidad de Chile, Santiago. En <www.ciesmilenio.cl>.

- Azócar, Carlos y Mayol, Alberto 2011, “Politización del malestar, movilización social y transformación ideológica: el caso Chile 2011” en *Polis* (Santiago: Universidad Bolivariana) N°30. En <<http://polis.revues.org/2218>>.
- Barozet, Emmanuelle; Méndez, María Luisa y Espinoza, Vicente 2013, “Estratificación y movilidad social bajo un modelo neoliberal: El caso de Chile”, *Revista Lavboratorio* (Argentina) N°25, año 14, otoño. En: <http://issuu.com/editorialeder/docs/revista_lavboratorio_n__25_interio>.
- Barozet, Emmanuelle 2011, “Mobilisations étudiantes et malaise social: el invierno chileno de 2011” en *Problèmes d'Amérique Latine* (París: IHEAL) 4, pp.129-131.
- Barozet, Emmanuelle y Espinoza, Vicente 2009, “¿De qué hablamos cuando decimos clase media? Perspectivas sobre el caso chileno” en *Universidad Alberto Hurtado-UDP-Expansiva* (Santiago) No. 142, agosto.
- Bensaïd, Daniel 2013, *La política como arte estratégico* (Madrid: La Oveja Negra).
- Boccara, Guillaume 2013, Manuel Gárate Chateau, *La revolución capitalista de Chile (1973-2003)*, Editorial Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile, 2012, 589 p., *Nuevo Mundo - Mundos Nuevos* (París) Book reviews and essays, febrero. En: <<http://nuevomundo.revues.org/64887>>.
- Boccardo, Giorgio y Ruiz, Carlos 2014, *Los chilenos bajo el neoliberalismo. Clases y conflictos sociales* (Santiago: El Desconcierto y Fundación Nodo XXI),
- Boccardo, Giorgio y Ruiz, Carlos 2011, “Panorama actual de la estructura social chilena (en la perspectiva de las transformaciones de la historia inmediata)” en *Documento de Trabajo*, Centro de Investigación de la Estructura Social (CIES) (Santiago: Universidad de Chile) abril.
- Boeninger, Edgardo 1997, *Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad* (Santiago: Andrés Bello).
- Carrillo Ramos, Juan Pablo 2009, “Poder Constituyente y Contrarrevolución. Nacimiento y consolidación del Estado Neoliberal en Chile” en *Rebelión*, 10 de octubre. En: <www.rebellion.org/noticia.php?id=93206>.
- Castel, Robert 2004, *La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?* (Buenos Aires: Manantial).
- Chesnais, François 1997, *La mondialisation du capital* (París: Syros).
- Confusam 2014, “Para mejores reformas: Urge un nuevo sindicalismo” en *Confusam* (Santiago) 4 de agosto. En: <www.confusam.cl>.

- Compagnon, Olivier y Gaudichaud, Franck 2008, “Chili: un passé trop vite passé” en *Hermès* (París: CNRS) N°52.
- Couffignal, Georges 2011, “Stabilité politique et crise de la représentation au Chili” en *Cahiers des Amériques latines* (París: IHEAL) N° 68.
- Corvalán, Luis 2012, “La crisis de la dictadura de las FFAA y la mano de los EEUU en la imposición de un recambio neoliberal”, *Centenario y bicentenario: textos críticos* (Santiago: Usach) pp. 531-562.
- Cuenca, Lucio 2014, “Proyecciones del Chile extractivista” en *Memoria Seminario Internacional “Extractivismo en América Latina. Agua que no has de beber”* (Santiago: Fundación Rosa Luxemburgo).
- Dardot, Pierre y Laval, Christian 2014, *Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle* (París: La Découverte).
- Dardot, Pierre y Laval, Christian 2009, *La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale* (París: La Découverte).
- Doran, Marie-Christine 2010, “Femmes et politique au Chili : dynamiques et impacts de l’accession au pouvoir de Michelle Bachelet” en *Recherches féministes* (Laval: Université de Laval) N° 23, junio.
- Dezalay, Yves y Bryant, Garth 2002, *The internationalization of palace wars: lawyers, economists, and the contest to transform Latin American states* (Chicago: University of Chicago Press).
- ENCLA 2011 *Séptima Encuesta Laboral*, (Santiago: Dirección del Trabajo). En: <www.dt.gob.cl/documentacion/1612/w3-article-101347.html>.
- Echeverría, Magdalena 2010, *La historia inconclusa de la subcontratación: y el relato de los trabajadores* (Santiago: División de Estudios de la Dirección del Trabajo). En: <www.dt.gob.cl/documentacion/1612/articles-97627_recurso_1.pdf>.
- Fazio, Hugo 2010, *Un país gobernado por uno de sus dueños* (Santiago: Lom).
- Fazio Hugo 2005, *Mapa de la extrema riqueza en Chile al 2005* (Santiago: Lom).
- Fazio, Hugo y Parada, Magaly 2010, *Veinte años de política económica de la Concertación* (Santiago: Lom).
- Figuroa Bárbara, 2014, “Salario mínimo: nuevo ciclo político comienza por emparejar la cancha” *El Quinto Poder* (Santiago) 5 de junio. En: <www.elquintopoder.cl/politica/salario-minimo-nuevo-ciclo-politico-comienza-por-emparejar-la-cancha>.

- Fleet, Nicolás 2011, “Movimiento estudiantil y transformaciones sociales en Chile: una perspectiva sociológica” en *Polis* (Santiago: Universidad Bolivariana) N° 30. En <<http://polis.revues.org/2152>>.
- Frías, Patricio 2008, *Desafíos del sindicalismo en los inicios del siglo XXI* (Santiago: Clacso).
- Galdámez, Elizabeth y Aedo, Joaquín 2014, “Flexibilización del capital, un desafío en el trabajo y en territorio” en Revista *La Papa* (Santiago) noviembre, N°2.
- Gárate, Manuel 2012, *La Revolución capitalista de Chile (1973-2003)* (Santiago: Universidad Alberto Hurtado).
- Garcés, Mario 2012, *El despertar de la sociedad. Los movimientos sociales de América Latina y Chile* (Santiago: Lom).
- Garretón, Manuel A. y Garretón, Roberto 2010, “La democracia incompleta en Chile: La realidad tras los rankings internacionales” en *Revista de Ciencia Política* (Santiago: Universidad Católica de Chile) Vol.30, N° 1.
- Garretón, Manuel A. 2012, *Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos de la Concertación en Chile. 1990-2010* (Santiago: Arcis/ Clacso).
- Gaudichaud, Franck (ed.) 2015, *América Latina. Emancipaciones en construcción* (Santiago: Tiempo robado editoras / América en Movimiento).
- Gaudichaud, Franck 2014a, “Ensayo crítico sobre el nuevo gobierno Bachelet. “Progresismo transformista”, neoliberalismo maduro y resistencias sociales emergentes” en Revista *Observatorio crítico de América Latina* (Buenos Aires: Clacso) N° 35, mayo. En: <www.clacso.org.ar/institucional/1h3_libro_detalle.php?idioma=&id_libro=875&pageNum_rs_libros=>.
- Gaudichaud, Franck 2014b, “La voie chilienne au néolibéralisme. Regards croisés sur un pays laboratoire” en *Nuevo Mundo-Mundos Nuevos* (París) 10 de junio: En: <<http://nuevomundo.revues.org/67029>>.
- Gaudichaud, Franck 2013, *Chili 1970-1973. Mille jours qui ébranlèrent le monde* (Rennes: Institut des Amériques - Presses Universitaires de Rennes).
- Gaudichaud, Franck 2011, “Reflexiones en torno al “largo mayo chileno”. Cuando el neoliberalismo triunfante se agrieta” en *Herramienta* (Buenos Aires). En: <www.herramienta.com.ar/herramienta-web-10/reflexiones-en-torno-al-largo-mayo-chileno-cuando-el-neoliberalismo-triunfante-se>.

- Gaudichaud, Franck (ed.) 2010, *El Volcán latinoamericano. Izquierdas, movimientos sociales y neoliberalismo* (Madrid: OtraAmérica). En línea en: <<http://alainet.org/active/40895>>.
- Gaudichaud, Franck 2004, *Poder Popular y Cordones industriales. Testimonios sobre el movimiento popular urbano, 1970-1973* (Santiago: Lom-Dibam).
- Gómez Leyton, Juan Carlos 2010, *Política, democracia y ciudadanía en una sociedad neoliberal, Chile 1990-2010* (Santiago: Arcis/ Clacso).
- Gómez Leyton, Juan Carlos 2004, *La frontera de la democracia. El derecho de propiedad en Chile 1925-1973* (Santiago: Lom).
- Grez, Sergio 2015, “A no engañarse: Bachelet descartó Asamblea Constituyente”, *Rebelión* (Madrid) 21 de octubre de 2015, <www.rebelion.org/noticia.php?id=204682>.
- Gudynas, Eduardo 2013, “Extracciones, extractivismos y extrahecciones. Un marco conceptual sobre la apropiación de recursos naturales” en *Observatorio del Desarrollo*, Claes (Montevideo) N° 18, p. 1-17.
- Gutiérrez Crocco, Francisca 2013, “Oportunidades y peligros del pluralismo sindical en el Chile post-transición” en *Nuevo Mundo-Mundos Nuevos* (París) Workshops, junio. En: <<http://nuevomundo.revues.org/65608>>.
- Haber, Stéphane 2012, “Analyser le néolibéralisme aujourd’hui” en *La Revue des Livres* (París) N° 4, mars-avril, p. 60-67.
- Harvey, David 2014, *Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo* (Quito: Instituto de altos Estudios Nacionales).
- Harvey, David 2013, *Breve historia del neoliberalismo* (Madrid: Akal).
- Harvey, David 1992, *La condición de la postmodernidad* (Buenos Aires: Amorrortu).
- Herreros, Francisco 2012, “La resistencia estudiantil y el fracaso de la educación de mercado en Chile” en Estay Reyno, Jaime Eduardo y Lara, Claudio y Silva, Consuelo (ed.) *El neoliberalismo y su crisis: causas, escenarios y posibles desenvolvimientos* (Santiago: Redem), p. 209-225.
- Holloway, John 2011, *Agrietar el capitalismo. El hacer contra el trabajo* (Buenos Aires: Herramienta).
- Huneus, Carlos 2000, *El régimen de Pinochet* (Santiago: Sudamericana).
- Husson, Michel y Louça, Francisco 2013, “Capitalismo tardío y neoliberalismo: una perspectiva de la actual fase de la onda larga del desarrollo capitalista”, *Sin Permiso* (Madrid) N° 12, p. 81-95.

- La Savia 2014, “Notas introductorias para un debate de ecología anticapitalista en Chile. Emancipar el trabajo y la naturaleza” *Rebelión* (Madrid) 12 de noviembre. En: <www.rebellion.org/noticia.php?id=191889>.
- Lazzarato, Maurizio 2011, *La fabrique de l'homme endetté. Essai sur la condition néolibérale* (París: Éditions Amsterdam).
- López, Ramón, Figueroa, Eugenio y Gutiérrez, Pablo 2013, “La ‘parte del león’: Nuevas estimaciones de la participación de los súper ricos en el ingreso de Chile” en *Serie Documentos de trabajo* (Santiago: Departamento de Economía de la Universidad de Chile). En: <www.econ.uchile.cl>.
- Löwy, Michael 2009, “Ecosocialismo: hacia una nueva civilización”, *Herramienta* (Buenos Aires) N° 42 octubre. En: <www.herramienta.com.ar/node/1041>.
- Löwy, Michael 1991, *¿Qué es la sociología del conocimiento?* (México: Fontamara).
- Maillet, Antoine 2013, *La construcción política de los mercados: variedades de neoliberalismo en el Chile post-dictadura*, Thèse en science politique, IEP de París, PUC, Santiago de Chile, 2013.
- Maldonado, Rubén Andino 2015, “Ya está claro hasta dónde quiere llegar este gobierno. Entrevista con Marta Matamala” en *Punto Final* (Santiago) N° 821, 9 de enero.
- Mandel, Ernest 1979, *El capitalismo tardío* (México: ERA).
- Martín, Facundo Nahuel y Mosquera, Martín 2014, “¿Qué organización para qué estrategia? Poder popular, herramienta política y estrategia socialista” en *Democracia Socialista* (Buenos Aires) 10 de marzo. En: <www.democraciasocialista.org/?p=2647>.
- Marx, Karl 1844, *Manuscritos económicos y filosóficos* (París). En: <www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/manuscritos>.
- Mathieu, Lilian 2012, *L'espace des mouvements sociaux* (París: Éditions du Croquant).
- Mathivet Charlotte y Sugranyes, Ana 2010 *Ciudades para todos: Por el derecho a la ciudad, propuestas y experiencias* (Santiago: Habitat International Coalition).
- Mayol, Alberto 2014, *La Nueva Mayoría y el fantasma de la Concertación* (Santiago: Ceibo).

- Mayol, Alberto 2012, *No al Lucro. De la crisis del modelo a la nueva era política* (Santiago: Random House Mondadori).
- Melucci, Alberto 1999, *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia* (México: El Colegio de México).
- Ministerio del Desarrollo Social 2015, *Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2013* (Santiago). En <<http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/resultados-encuesta-casen-2013>>.
- Mira, Andrea 2011, “Crisis de representatividad y estallido social” en *Polis* (Santiago: Universidad Bolivariana) N° 30. En:<<http://polis.revues.org/2232>>.
- Modonesi, Massimo 2008, “Crisis hegemónica y movimientos antagonistas en América Latina. Una lectura gramsciana del cambio de época” en *A Contracorriente: Revista de Historia Social y Literatura en América Latina* (Raleigh: North Carolina State University) Vol. 5, N° 2.
- Moguillansky, Graciela 2001, “Privatizaciones y su impacto en la inversión” en French-Davis, Ricardo y Bárbara Stallings (Eds.) *Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973* (Santiago: Cepal-Lom Ediciones).
- Mönckeberg, María Olivia 2007, *El negocio de las universidades en Chile* (Santiago: Antártica).
- Mondaca, Rodrigo 2014, *La privatización de las aguas en Chile: Causas y resistencias* (Santiago: América en Movimiento).
- Montero, Cecilia 1997, *La revolución del empresariado chileno* (Santiago: Dolmen ediciones).
- Moulian, Tomás 2004, *De la política letrada a la política analfabeta* (Santiago: Lom).
- Moulian, Tomás 2002, *Chile actual: anatomía de un mito* (Santiago: Lom) 2° ed.
- Moulian, Tomás 1998, *El consumo me consume* (Santiago: Lom).
- Narbona, Karina 2014, *Antecedentes del modelo de relaciones laborales chileno* (Santiago: Fundación Sol). En: <<http://defiendeytransforma.cl/?wpdmact=process&did=MTguaG90bGluaw==>>.
- Narbona, Karina y Páez, Alexander 2014, “La acumulación flexible en Chile: Aportes a una lectura socio-histórica de las transformaciones recientes del trabajo” en Revista *Preterito Imperfecto* (Santiago) N 2, mayo. En: <<http://preteritoimperfecto.cl/?p=95#more-95>>.

- Olin Wright, Erik 2009, “Understanding Class: toward an integrated analytical approach”, *New Left Review* (Londres) 60, diciembre. En: <www.ssc.wisc.edu>.
- Observatorio Chileno de Políticas Educativas 2014, “¿Dónde quedó la reforma educativa?” en *Opech* (Santiago) septiembre. En: <www.opech.cl>.
- Osorio, Sebastián y Rivas, Gabriel 2014, “El acuerdo de la CUT con el Gobierno y el Salario mínimo” en *Cipstra* (Santiago) julio. En: <www.cipstra.cl/salario-minimo-1/>.
- Osorio, Sebastián 2013, “El bloque histórico en Chile durante la transición y las transformaciones en la política sindical: el caso de la CUT” en *Cipstra* (Santiago) N°3. En: <www.cipstra.cl>.
- Osorio Contreras, Rodrigo 2007, *La dictature de Pinochet en perspective. Sociologie d'une révolution capitaliste et néoconservatrice* (París: L'Harmattan).
- Patino, Bruno 2000, *Pinochet s'en va: la transition démocratique au Chili, 1988-1994* (París: IHEAL).
- Pérez-Ahumada, Pablo 2015a, “La centralidad de la clase trabajadora para la construcción de un proyecto de izquierda en Chile”, *Perspectiva diagonal* (Santiago) 15 octubre. En: <www.perspectivadiagonal.org/la-centralidad-de-la-clase-trabajadora-para-la-construccion-de-un-proyecto-de-izquierda-en-chile/>.
- Pérez-Ahumada, Pablo 2015b, “The end of a Traditional Class Distinction in Neoliberal Society: ‘White-collar’ and ‘Blue-collar’ Work and its Impact on Chilean Workers’ Class Consciousness”, *Critical Sociology*, Online First Version. En: <<http://doi:10.1177/0896920515585609>>.
- Pérez-Ahumada, Pablo 2014, “Class consciousness in a mature neoliberal society: Evidence from Chile”, *Research in Social Stratification and Mobility*, 38, 57-75. En: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.rssm.2014.06.002>>.
- Pérez Soto, Carlos 2013, “40 años de modelo neoliberal en Chile”, *Diario Radio Universidad de Chile* (Santiago) 7 de octubre. En: <<http://radio.uchile.cl/2013/10/07/40-anos-de-modelo-neoliberal-en-chile>>.
- Perry, Anderson 2003, “Neoliberalismo: un balance provisorio” en Sader, Emir y Gentili, Pablo (comps.) *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social* (Buenos Aires: Clacso).
- Pinto, Julio y Salazar, Gabriel 1999, *Historia Contemporánea de Chile (Vol.1). Estado, legitimidad y ciudadanía* (Santiago: Lom).

- Piva, Adrián 2011, “¿Fin de la clase obrera o desorganización de clase?” en Bonnet, Alberto (comp.) *El país invisible. Debates sobre la Argentina reciente* (Buenos Aires: Peña Lillo/Ediciones Continente).
- Plataforma Nexos 2015, *Análisis de la coyuntura política chilena. Carácter del periodo* (Santiago) segundo cuatrimestre de 2015. En: <www.plataforma-nexos.cl>.
- PNUD 1998, *Informe de Desarrollo Humano en Chile: Las paradojas de la modernización* (Santiago: PNUD). En: <www.desarrollohumano.cl/ele98.htm>.
- PNUD 2015, *Informe de Desarrollo Humano en Chile: Los tiempos de la politización* (Santiago: PNUD). En: <www.desarrollohumano.cl/idh/informes/2015-los-tiempos-de-la-politizacion>.
- Portales, Felipe 2005, “La inexistencia de la democracia en Chile”, *Polis* (Santiago: Universidad Bolivariana) 10, 27 de abril. En: <http://polis.revues.org/7493>.
- Prognon, Nicolas 2010, “Le Chili, une transition vers la démocratie aboutie ?” en *Ilcea* (Grenoble: Universidad Grenoble Alpes), N° 13. En: <http://ilcea.revues.org/907>.
- Ríos, Héctor 2015, “Qué no pasó el 2011? Crisis de representatividad y la repolitización en Chile” *El Mostrador* (Santiago) 10 de agosto. En: <www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2015/08/10/que-no-paso-el-2011-crisis-de-representatividad-y-la-repolitizacion-en-chile>.
- Ruiz, Carlos 2013, *Conflicto social en el neoliberalismo avanzado: análisis de clase de la revuelta estudiantil en Chile* (Buenos Aires: Clacso). En: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20131023010020/Ruiz Encina.pdf>.
- Salazar, Gabriel 2006, *La violencia política popular en las “grandes Alamedas”. La violencia en Chile 1947-1987 (una perspectiva histórica popular)* (Santiago: Lom) segunda edición.
- Silva, Patricio 2008, *In the Name of Reason: Technocrats and Politics in Chile* (University Park: Penn State University Press).
- Skoknic, Francisca 2014, “Los forados a favor de la elusión que dejó el acuerdo tributario de Arenas con la derecha”, *Ciper* (Santiago) 17 de julio. En: <ciperchile.cl/2014/07/17/los-forados-a-favor-de-la-elusion-que-dejo-el-acuerdo-tributario-de-arenas-con-la-derecha/>.

- Svampa, Maristella 2012, “Consenso de los Commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América” en *Revista Observatorio crítico de América Latina* (Buenos Aires: Clacso) N° 32. En: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20120927103642/OSAL32.pdf>.
- Tarrow, Sydney 1994, *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política* (Madrid: Alianza editorial).
- Taylor, Marcus 2006, *From Pinochet to the ‘Third Way’: Neoliberalism and Social Transformation in Chile* (London: Pluto Press).
- Therborn, Göran 2014, “New Masses? Social Bases of Resistance” en *New Left Review* (Londres) N° 85.
- Therborn, Göran 2012, “Class in the 21st century” en *New Left Review* (Londres) N° 78.
- Tilly, Charles y Tarrow, Sydney 2008, *Politiques du conflit. De la grève à la révolution* (París: Presses de SciencesPo).
- Toro, Sergio 2008, “De lo épico a lo cotidiano: Jóvenes y generaciones políticas en Chile” en *Revista de Ciencia Política* (Santiago: Universidad Católica de Chile) N° 28.
- Tricot, Tito 2014, “Hace 41 años nos despertamos de golpe. De golpe de Estado”, *Servicio Informativo Alai-amlatina* (Quito), 12 de septiembre. En: <http://alainet.org/active/77055&lang=es>.
- Ugarte, José Luis 2014, “La cocina de Javiera”, *El Mostrador* (Santiago) 13 de noviembre. En: <http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/11/13/la-cocina-de-javiera>.
- Universidad Diego Portales 2014, *Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile* (Santiago: UDP). En <http://www.derechoshumanos.udp.cl/index.php/informe-anual/repository/Informe-Anual-sobre-Derechos-Humanos-en-Chile-2014>.
- Undurraga, Tomás 2014, *Divergencias: trayectorias del neoliberalismo en Argentina y Chile* (Santiago: Universidad Diego Portales).
- Urriola, Rafael 2014, “¿Fracaso del sistema? 87% de empleados no están contentos con sus empleos” en *El Mostrador* (Santiago) 23 de septiembre. En www.elmostrador.cl.
- Urrutia, Miguel 2002, “La crítica al neoliberalismo como interioridad keynesiana” en *Revista Chilena de Temas Sociológicos* (Santiago: Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez) N° 8.

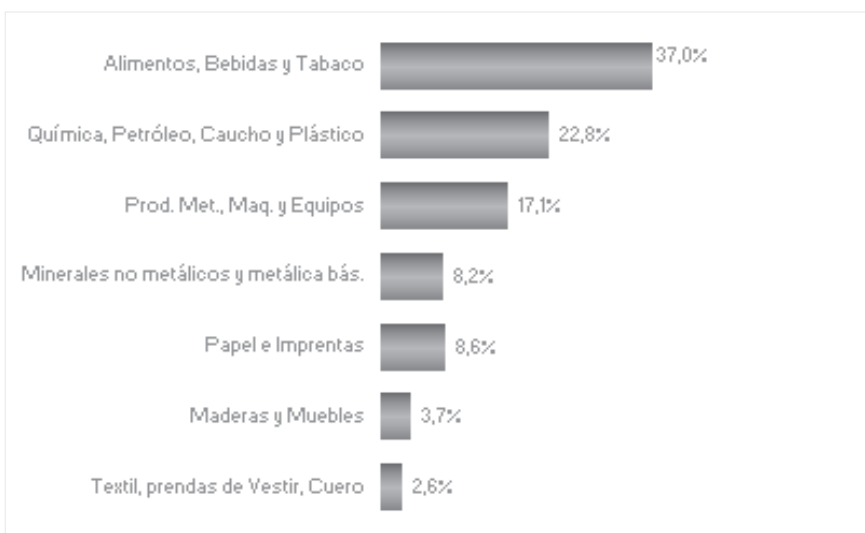
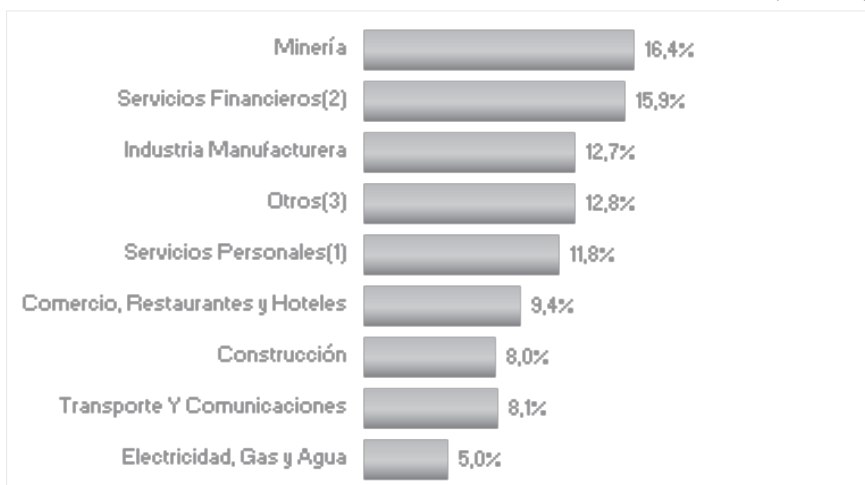
- Vivallo Urra, Oscar 2013, “La exclusión social como instrumento sociopolítica de dominación. Análisis de la exclusión social en el acceso a la educación superior chilena”, en *Coloquio internacional “Chile actual. Gobernar y resistir en una sociedad neoliberal”*, Grenoble, Francia, septiembre. En: <<http://chili-neoliberal.sciencesconf.org>>.
- Williams, Raymond 1980, *Marxismo y literatura* (Barcelona: Península).
- Womack, John Jr. 2007, *Posición estratégica y fuerza obrera. Hacia una nueva historia de los movimientos obreros* (México: Fondo de Cultura Económica).
- Zrari, Sabah 2012, “Le Chili : élites néolibérales et société étatiste”, *CERI* (París: SciencesPo) Junio. En: <www.ceri-sciences-po.org>.

Selección de film-documentales

- Fuentes, Carol y Valdeavellano, Rafael 2015, *Chicago boys* (Santiago: La Ventana Cine).
- Ciari, German y Polti, Mariana 2014, *América Latina piensa la cuestión del desarrollo: El modelo chileno* (Buenos Aires: Agallón producción). En: <www.youtube.com/watch?v=LHDze7VsvhA>.
- Periódico Resumen 2014, *Plantar pobreza. El negocio forestal en Chile* (Concepción: Resumen). En: <www.youtube.com/watch?v=A42dHCxuj1wZ>.
- Terrié, Julien 2014, *Fisuras (del modelo chileno)* (Chile/Francia: France Amérique Latine) 2014. En: <www.youtube.com/watch?v=Oby7IWN NVSE&index=8&list=PL0AA521210635157C>.

Anexo 1

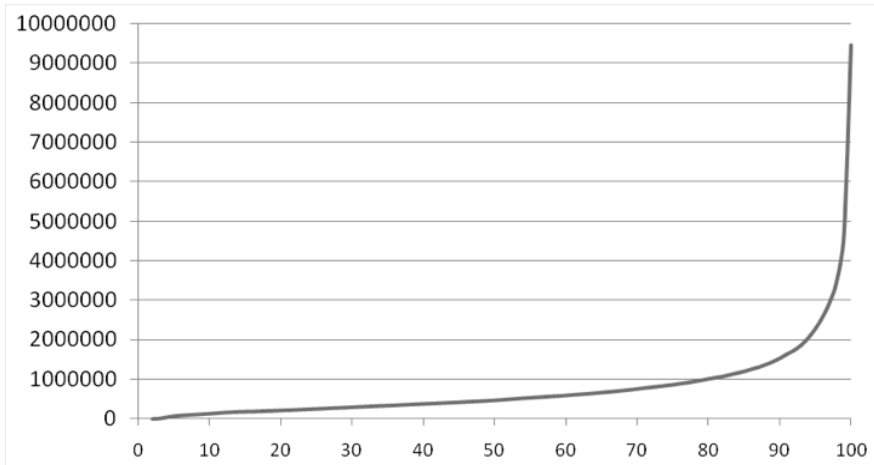
Estructura del Producto Interno Bruto (2009)



Fuente: Elaboración de Santiago Aguiar, en base a datos del Banco Central y del INE (Aguiar, 2010).

Anexo 2

Mapa de la extrema desigualdad. Ingreso de los hogares según percentiles



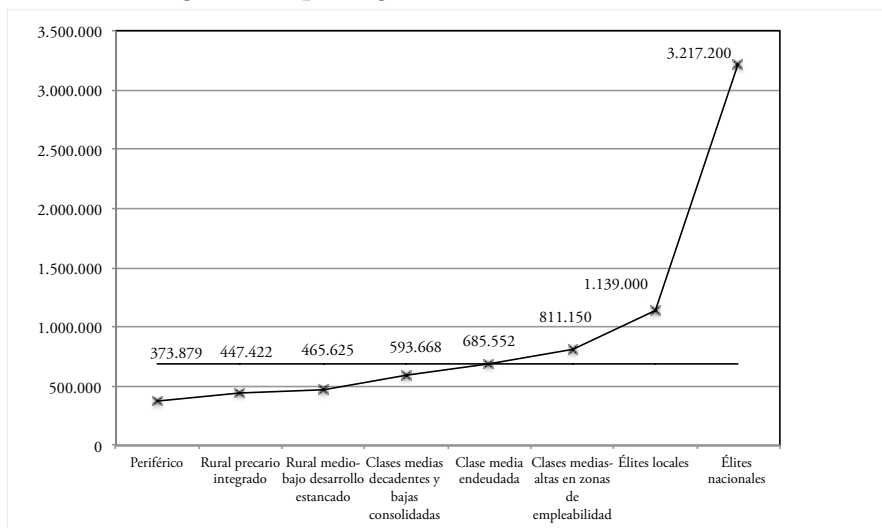
Fuente: Elaboración de Carlos Azócar y Alberto Mayol en base a encuesta Casen 2009 (Azócar y Mayol, 2011).

Anexo 3

Correlación entre desigualdades de ingresos y educación en Chile

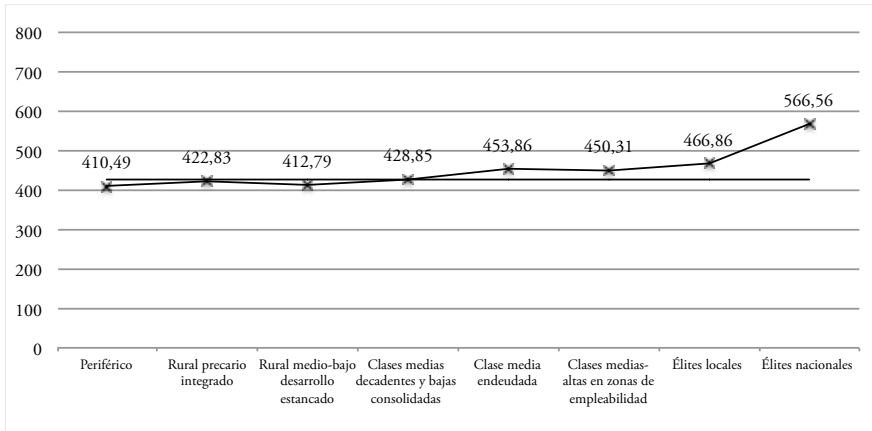
La Prueba de Selección Universitaria (PSU) es un test estandarizado escrito realizado desde 2003 para el proceso de admisión a la educación universitaria y el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) es el sistema de evaluación de la Agencia de Calidad de la Educación (Ministerio de la Educación) que se aplica a todos los estudiantes de enseñanza básica y media.

Gráfico 1 Ingreso total por hogar (Casen 2009)



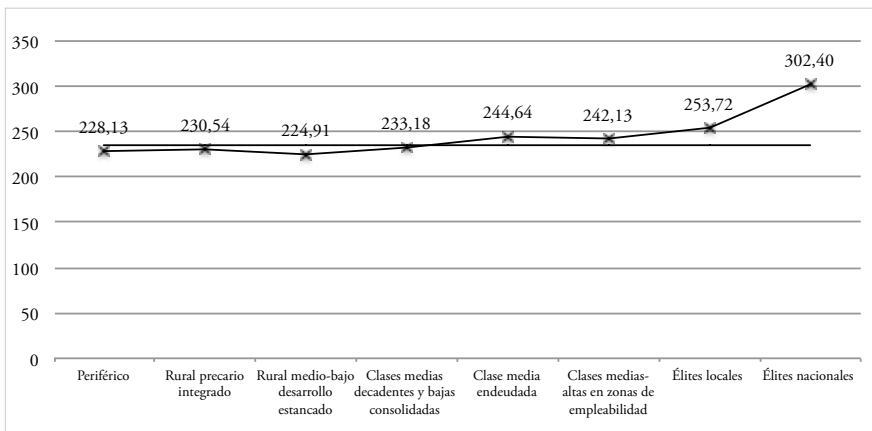
Fuente: Elaboración de Azócar, Carla; Azócar, Carlos; Mayol, Alberto, 2011.

Gráfico 2 PSU 2009 - Demre



Fuente: Elaboración de Azócar, Carla; Azócar, Carlos; Mayol, Alberto, 2011.

Gráfico 3 Simce 2do medio 2008 (Ministerio de Educación)



Fuente: Elaboración de Azócar, Carla; Azócar, Carlos; Mayol, Alberto, 2011.

Sobre el autor

Franck Gaudichaud

Doctor en Ciencia política (Universidad París 8). Magíster en Historia (Universidad Bordeaux 3), académico en Estudios latinoamericanos de la Universidad Grenoble-Alpes (Francia). Es autor de varios libros y numerosos artículos sobre movimientos populares, izquierdas y capitalismo en Chile y América Latina (en varios idiomas), miembro del colectivo editorial del portal www.rebellion.org, colaborador de *Le Monde Diplomatique* (París) y redactor de la revista *ContreTemps*. Su último libro publicado en Chile es un trabajo colectivo: *América Latina Emancipaciones en construcción* (Tiempo Robado y América en Movimiento, 2015)

El valioso texto que nos ofrece aquí Franck Gaudichaud [...] sobre la base de una evaluación de la trayectoria reciente de la sociedad chilena, incursiona sobre las interpretaciones del momento actual y las posibilidades de algún tipo de alternativa política de carácter popular. Los ejes en que concentra su análisis –nombro solo los que me parecen principales– son la centralidad de la relación capital/trabajo, el carácter de los movimientos sociales y el peso de la subjetividad de masas que el propio modelo produce y reproduce, todo ello en el marco de la institucionalidad política y la estructura de clases que caracterizan en el presente al modelo neoliberal. La combinación de dichos ejes y la apelación a tales aspectos estructurales (lo político y las clases sociales), conducen a una síntesis crítica que, a mi juicio, constituyen el aporte central que ofrece el texto, pues permite una discusión sobre las alternativas políticas, teniendo a la vista una hipótesis interpretativa del momento por el que hoy atraviesa la sociedad chilena.

[Rafael Agacino, prólogo]

ISBN: 978-950-9364-06-8



9789569136406

Quimantú y Tiempo robado editoras, se unen en esta oportunidad en un esfuerzo compartido con Franck Gaudichaud, para poder publicar esta reflexión -que esperamos sea exigente en su contenido pero clara en sus ideas vertebrales- en una edición de bajo costo para facilitar su más amplia difusión.

A partir de una mirada compartida sobre el espacio editorial en Chile y su necesaria puesta a disposición de los diversos grupos y organizaciones que luchan por transformar los mecanismos que nos mantienen bajo un modelo de sociedad muy distinto al que aspiramos, estas editoriales se han propuesto mancomunar sus esfuerzos para aportar a esa caja de herramientas -a la que alude el autor- puesta al servicio del movimiento popular ubicado "abajo y a la izquierda".